

TABLA DE CONTENIDO

De la guerra del agua a la guerra del gas: conceptualización del conflicto en Bolivia



Margaret Carolla
Universidad del Salvador
Maestría en Relaciones Internacionales
Tesis de maestría

Mayo 2005

Profesor Alexandre Roig
Consejero de tesis

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	1
Marco del trabajo.....	7
Capítulo I:	
Conceptuación del conflicto: Georg Simmel y Ralf Dahrendorf.....	10
Georg Simmel.....	11
Ralf Dahrendorf y la teoría del conflicto social.....	16
Capítulo II:	
Panorama histórico.....	24
El colonialismo y el período post-independencia.....	25
La Revolución de Abril.....	30
El regreso a la democracia y el ajuste estructural.....	35
La década de 1990.....	41
Capítulo III:	
El debate por la pobreza: el legado de las reformas estructurales.....	54
Pobreza en Bolivia.....	54
Un país, diferentes interpretaciones.....	58
El gobierno boliviano.....	59
Los sectores movilizados.....	62
Los académicos.....	64
Capítulo IV:	
Las guerras del agua y del gas.....	70
La guerra del agua.....	70
La guerra del gas.....	80

Capítulo V:

Análisis de los conflictos.....	91
La guerra del agua.....	95
Los sectores movilizados: Aquellos que se oponían a la privatización.....	95
El gobierno: Aquellos a favor de la privatización.....	101
La guerra del gas.....	105
Los sectores movilizados: Aquellos que se oponían a la exportación.....	105
El gobierno: Aquellos a favor de la exportación.....	117
La embajada estadounidense.....	120
Representaciones de democracia de los distintos actores.....	122

Capítulo VI:

Conclusión.....	130
Los niveles del conflicto.....	133
Bibliografía.....	136

Índice de gráficos

Gráfico 2.1 Resultados Elecciones Nacionales, 2002.....	49
Gráfico 3.1 Distribución de la población según condición de pobreza, censo de 1976, 1992 y 2001.....	55
Tabla 5.1 La estructura del discurso de las guerras.....	94

Fotografía en la cubierta:

“El agua es nuestro ¡¡Carajo!!” y “El gas nos pertenece por derecho” de Indymedia Bolivia, ver sitios de web

<http://bolivia.indymedia.org/es/2005/04/16233.shtml>, y <http://bolivia.indymedia.org/es/>

INTRODUCCIÓN

Durante los primeros cuatro años del siglo XXI, cobraron notoriedad dos focos de conflicto en Bolivia, probablemente generados por los recursos naturales. Dichos conflictos se manifestaron a causa de la aplicación o la propuesta de aplicación de ciertas políticas económicas por parte del gobierno boliviano. La privatización del servicio de agua y la propuesta de exportación de gas natural boliviano constituían las políticas conflictivas que, respectivamente, generaron la “guerra del agua” en Cochabamba en 2000 y la “guerra del gas” en El Alto y La Paz durante los meses de septiembre y octubre de 2003. En ambos casos, el gobierno de Bolivia cedió a las demandas de los sectores movilizados y canceló las políticas en cuestión. Estos conflictos se daban entre partes con intereses dispares con respecto a la propiedad y el control de los recursos naturales, como también al capital producido por la venta de los mismos.

¿Por qué surgieron estos conflictos? Una posible hipótesis es que el conflicto existía entre un actor interesado en ofrecer un control público (estatal) de los recursos naturales y otro con intereses en la propiedad y gestión privadas de los recursos naturales. No obstante, tal como afirmaron por igual los investigadores y participantes, y como concluye también el presente estudio, la caracterización de las guerras por el gas y el agua como meros conflictos por el control de los recursos naturales no engloba su verdadera complejidad. Al investigar en profundidad, esta hipótesis parece dejar de lado cuestiones sobre la estructura de la sociedad boliviana puestas en el tapete por los participantes de estos conflictos. Los conflictos latentes en la sociedad boliviana a causa de la pobreza, las reformas estructurales del estado, las políticas de erradicación de la coca, y los derechos de los pueblos originarios son todas fuentes adicionales de conflicto; se trata de tensiones acumuladas que explotaron en el punto más álgido de los conflictos por el gas y el agua. Sin embargo, la interpretación de estas fuentes latentes de conflicto como objetos de las guerras por el gas y el agua también parece incompleta.

Para interpretar las guerras por el gas y el agua, es necesario observar tanto las características de los actores como también las estructuras sociales implicadas que aparentemente han tenido un papel importante en la generación del conflicto. Al investigar el objeto de las guerras del gas y el agua, la representación que los actores tienen de la democracia parece surgir como la generadora del conflicto en ambos casos. Los principales actores del conflicto construyeron su discurso en torno a su propia interpretación de democracia, a la vez que cada uno de ellos afirma ser la verdadera o legítima democracia de Bolivia. La hipótesis de este estudio es que los recursos naturales en cuestión, como también otros conflictos latentes, presentaron un punto saliente que reveló el conflicto surgido a causa de diversas interpretaciones del significado de la democracia. La democracia surge como el objeto porque cuestionar la manera en que se toman las decisiones con respecto a los recursos colectivos implica el papel del estado como agente de toma de decisiones colectivas para el total de la sociedad. También es un síntoma del conflicto estructural que existe entre los actores con distintos niveles de dominación – aquellos que tienen autoridad y aquellos que no la tienen. Este conflicto se vio alimentado también por los conflictos latentes en la sociedad boliviana, especialmente el debate por la causa de la pobreza y sobre qué debe hacerse para aliviarla o eliminarla. El presente estudio investigará esta hipótesis, examinando la estructura histórica de la sociedad boliviana al igual que la estructura del conflicto observado a través de un análisis del discurso de los principales actores (aquellos a favor de las políticas económicas propuestas, y aquellos que están en contra).

La “guerra del agua” es el conflicto surgido en discurso entre los principales actores, y en las calles entre los manifestantes y los militares y la policía en el valle de Cochabamba; el mismo consistió en tres “batallas” sucedidas entre enero y abril de 2000. Las demandas de los sectores movilizadas expresadas por el movimiento social Coordinadora para la Defensa del Agua y la Vida – incluyendo la cancelación de la privatización del sistema de agua – fueron concedidas por el gobierno. La “guerra del gas” se refiere al conflicto surgido en discurso entre los principales

actores y en las calles entre manifestantes y los militares y la policía en el Departamento de La Paz, específicamente en las ciudades de El Alto y la capital, La Paz. Las protestas, huelgas, y bloqueos comenzaron el 19 de septiembre de 2003 y fueron llevadas a cabo por diversos sectores de la sociedad: Sindicatos, federaciones, estudiantes, y movimientos políticos y sociales. Cada sector tenía sus propias demandas, pero el tema central de las protestas fue el rechazo de la propuesta no finalizada de un plan para exportar gas boliviano a EE.UU. y México a través de puertos chilenos. Después de la muerte de varios manifestantes en violentos choques con las fuerzas de seguridad, se sumó a la demanda general la renuncia del presidente electo. El 17 de octubre, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció y asumió así el vicepresidente Carlos Mesa, con promesas de realizar un referendo vinculante sobre la cuestión de la exportación de gas.

La hipótesis de esta investigación se basa en un análisis histórico y político de Bolivia, como también en el estudio de los sucesos de las guerras por el gas y el agua, haciendo hincapié en el discurso de ambos actores. Su propuesta es que es posible interpretar ambas guerras en tres niveles diferentes. En el primer nivel, el objeto del conflicto son el gas y el agua propiamente dichos. Ciertas políticas económicas (la privatización y la propuesta de exportación) generaron una oposición que se manifestó en un conflicto visible, tanto en el discurso como en violentos choques en las calles, dándole así al conflicto el mote de “guerra.” Los sectores que se oponían a las políticas que afectaban los recursos naturales en cuestión lograron ver satisfechas sus demandas por parte del gobierno.

En un segundo nivel de análisis, el objeto de los conflictos no son las políticas económicas relacionadas con los recursos naturales, sino una serie de problemas acumulados o conflictos latentes en la sociedad boliviana. En este nivel, los recursos naturales no son más que una parte de los conflictos entre los actores sociales en Bolivia, y las manifestaciones del conflicto tanto en el discurso como en las calles fueron una válvula de escape de la tensión

acumulada por conflictos como la pobreza, la erradicación de la coca, la transición del estado boliviano de un modelo de corporativismo estatal a uno más orientado al mercado, la lucha por los derechos de los pueblos aborígenes, y demás.

Después de analizar los dos primeros niveles de conflicto, la hipótesis propone un tercer nivel de conflicto. El objetivo principal en este nivel son las diferentes interpretaciones de lo que es y debe ser la democracia en Bolivia. Cabe destacar la importancia de que los objetos en el primer nivel de conflicto son los recursos naturales; por razones históricas y de memoria colectiva, los recursos naturales son un tema de particular protagonismo en Bolivia. Sin embargo, en estos casos, los recursos naturales pueden ser interpretados como temas que revelaron un conflicto relacionado con la democracia. En ambos casos, los sectores movilizados respondieron para revertir o bloquear la aplicación de una política económica – privatización y exportación – y el gobierno, apoyado por grupos a favor de dichas políticas, fue obligado a defenderlas. Los sectores movilizados concluyeron que dichas políticas eran perniciosas para sus intereses y se opusieron a ellas ya que su gobierno representativo no lo hizo. Por lo tanto, los sectores movilizados sostenían que su gobierno representativo no era democrático. Por otro lado, el gobierno calificó de no democrática a la falta de respeto por la ley y el orden demostrado por los sectores movilizados. A menudo, ambas partes mencionaban explícitamente la democracia y afirmaban actuar ya sea en su defensa o hacia la creación o conservación de una verdadera democracia. Claramente, existían dos interpretaciones muy distintas de democracia durante estas guerras. Las distintas interpretaciones se expresaban en distintos ámbitos, pero siempre en torno a la idea de democracia. Los sectores movilizados exigían una “verdadera” democracia, una democracia que se correspondiera con sus intereses, y que enfatizara la justicia, la participación popular, y que rechazara la interferencia extranjera como algo inherente a los intereses de las personas. El gobierno, por otra parte, defendía su legitimidad utilizando un razonamiento económico, concentrándose en la necesidad de la ley y el orden, y destacando la importancia de

establecer y mantener la credibilidad para atraer las inversiones al país. Al ser la parte revisionista, el primer grupo reconocía y participaba en este conflicto por la democracia, mientras que el gobierno, como la parte que apoyaba el status quo, trataba de negar y quitar el conflicto de las distintas opiniones con respecto a la democracia.

La estrategia de investigación implica la necesidad de un análisis que va de un examen de los actores a un análisis de las estructuras sociales, y examina la relación entre los actores y la estructura. Ese será el principal desafío del presente trabajo. Primero, la investigación examinará la estructura de la sociedad boliviana a través de un análisis histórico, que determinará el marco para el análisis de los casos. El estudio examinará entonces la relación existente entre los actores y las guerras, incluyendo sus intereses y estrategias. El análisis del discurso ocupará una parte importante de esta sección, pues el discurso revela la representación que los actores tienen de su propia posición en la estructura social.

Al identificar la idea de democracia como el objeto de las guerras por el gas y el agua, esta investigación intentará marcar la conexión entre los actores y la estructura social en la que interactúan. Esta conexión se sostendrá con la ayuda de una conceptualización del conflicto basada en las obras teóricas de los sociólogos alemanes Georg Simmel y Ralf Dahrendorf. Al establecer primeramente el concepto de Simmel de que el conflicto es positivo, inevitable, ubicuo, y necesario para el cambio social, este estudio examinará el modelo de sociedad propuesto por Dahrendorf para examinar las estructuras sociales que tienden a generar conflicto independientemente de los factores históricos. Dado que el conflicto por la democracia es un conflicto por el sistema político, el modelo de Dahrendorf posee valor heurístico, ya que el estado es sociedad en su forma política, y está definido por estructuras que implican relaciones de autoridad que tienden a producir conflicto. El conflicto en las guerras por el gas y el agua puede ser interpretado por un conflicto generado por estructuras sociales – en estos casos, estructuras políticas, un conflicto entre, como sostiene Dahrendorf, “gobernantes y gobernados.”

Sin embargo, las variables históricas específicas a los casos en cuestión también pueden ser incluidas en el análisis, permitiendo así una consideración de los actores participantes del conflicto y también de la estructura social.

El conflicto por las diferentes interpretaciones de la democracia se vio alimentado por el debate por la naturaleza de la pobreza en Bolivia y de lo que debe hacerse para aliviarla. Existe una marcada diferencia en las opiniones evidenciadas en este discurso con respecto al debate por parte de ambos grupos participantes. Por esta razón, el presente estudio tendrá en cuenta el contexto en el cual tuvieron lugar las guerras, especialmente con respecto al estatus de la pobreza y de las reformas estructurales de Bolivia hacia fines de la década del '90 y comienzos del siglo XXI. La familiaridad de estos debates es primordial para entender el contexto del discurso y las estrategias empleadas por los actores en los conflictos. Si bien parece haber un mínimo de consenso entre ambas partes al afirmar que la pobreza es el principal problema que enfrenta Bolivia, cuando se pregunta por qué la pobreza es persistente y qué debe hacerse al respecto, las respuestas obtenidas son muy diferentes. Dichas respuestas alimentan las representaciones que los actores tienen de la democracia, y se ven claramente reflejadas en el discurso.

Si bien el conflicto puede tener diversas manifestaciones, para analizar las guerras del gas y el agua este estudio se concentrará en la siguientes formas: El conflicto expresado “en las calles” (acciones colectivas como huelgas, bloqueos, protestas, marchas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad) por un lado; y el conflicto en el discurso por el otro. Si bien adoptan distintas formas, pueden considerarse empíricamente como parte del mismo conflicto entre las partes. El conflicto entre dos o más actores solo puede ocurrir cuando hay una relación, y sus diferentes formas no pueden separarse claramente. No se trata de categorías separadas y determinadas, sino que existen en una suerte de simbiosis: Una forma afecta a la otra, y ambas son parte del mismo conflicto por un mismo objeto.

El estudio se limitará a los conflictos colectivos, aquellos manifestados entre instituciones o actores colectivos que representan a un grupo de la sociedad. Si la unidad básica de análisis para ambas guerras son los actores involucrados (principalmente el gobierno y los sectores movilizadores), entonces se debe considerar que la estructura mayor es el estado boliviano.

Marco del trabajo

El presente estudio se divide en seis capítulos. El Capítulo I constituye una discusión de los aspectos teóricos de este análisis para conceptualizar el conflicto. Este capítulo está compuesto principalmente de una discusión de las obras teóricas de Georg Simmel y Ralf Dahrendorf. Los escritos de Simmel sobre el conflicto sostendrán la conceptualización del conflicto plasmada en este estudio. El modelo de cuatro etapas de la sociología del conflicto propuesto por Dahrendorf brindará una herramienta analítica para analizar los conflictos generados por las estructuras sociales. Los casos bolivianos son excelentes ejemplos para este tipo de análisis, dado que la fricción generada entre aquellos que poseen la autoridad y aquellos sobre quienes se ejerce la misma es clara y evidente.

El segundo capítulo incluye una discusión de importantes antecedentes históricos. Una breve historia de la economía, la política, y la sociedad de Bolivia identificará los principales hechos y tendencias, incluyendo su riqueza de recursos naturales, la gran población aborigen, la relación entre gobierno y sociedad, y la creciente visibilidad y actividad de los movimientos indígenas y sociales a principios del siglo XXI. Algunos eventos recientes de gran importancia son el regreso a la democracia en 1982 y el programa de ajuste estructural Nueva Política Económica de 1985, que impulsaron una era de intensa cooperación con las instituciones financieras internacionales. Además, el conflicto generado por la guerra contra las drogas, especialmente la erradicación de las plantaciones de coca, es otro tema de notoriedad en la historia reciente. Finalmente, la reciente crisis económica y política, incluyendo dos momentos de levantamientos importantes en 2000 y 2003, también será considerada.

El Capítulo III identificará los importantes debates de la sociedad boliviana en torno a la pobreza y los efectos de las reformas estructurales de las décadas del '80 y '90. La crisis económica y política de los años previos a las guerras del gas y el agua exacerbó dichas fuentes de contención, y se vuelve primordial entender este contexto inmediato para interpretar las guerras. Las diferentes interpretaciones de los dos elementos en estos debates, a su vez, se ven claramente reflejadas en el discurso que los actores tienen de las guerras. Este estudio intentará observar la realidad objetiva del contexto, como también las percepciones e interpretaciones de esta realidad por parte de los actores.

El cuarto capítulo incluirá una descripción de las guerras del gas y el agua, estableciendo una base empírica al describir la evolución de los conflictos, e incluyendo los antecedentes inmediatos, actores, etapas, y formas. El quinto capítulo incluirá el análisis de los intereses y estrategias de los principales actores, como también de su discurso, buscando identificar la fuente estructural del conflicto examinando cómo los actores construyen su discurso. Esta sección analizará la estructura de los conflictos, empleando los cuatro pasos de la teoría sociológica del conflicto de Dahrendorf. El análisis examinará la manera en que los actores construyeron su discurso en torno al campo de la democracia a favor y en contra de las políticas en cuestión según el papel de dominación de cada uno. Este capítulo incluirá diferentes interpretaciones de por qué la democracia surgió como el objeto, al punto que este ejercicio ayuda a identificar la interacción entre la fuente estructural de conflicto y las características particulares de los actores. El Capítulo VI extraerá conclusiones con respecto a las hipótesis presentadas.

Los casos de las guerras del agua y el gas son temas interesantes en la investigación del conflicto. Ambos casos implican formas de acción colectiva (en las calles, protestas, marchas, bloqueos) que atrajeron la atención pública, e incluyeron además importantes componentes

discursivos. Si bien existe literatura sobre la guerra del agua, la misma es citada comúnmente como una victoria para el pueblo que había sido marginado del proceso de toma de decisiones, o un rechazo ingenuo de las realidades de la globalización; en las palabras de un editorial del *New York Times*, los bolivianos estaban cometiendo un “suicidio económico para los pobres.”¹ Los conflictos latentes se dan por sentados o directamente se descartan. Además, el hecho de que la guerra del gas ocurrió recientemente significa que aún queda por escribir grandes cantidades de material sobre ambos casos. El presente trabajo podría constituir un pequeño paso hacia la construcción de esa literatura, pues analiza ambos casos desde la perspectiva de su gran potencial para el estudio de los conflictos.

Estos casos están estrechamente relacionados con el debate mundial sobre la globalización. Tienen una relevancia relativa, ya que a menudo son citados como ejemplares para sostener diferentes posiciones ideológicas. Por esta razón, es de especial importancia entenderlos antes de aplicarlos de esta manera.

¹ *The New York Times*. 17 jul 2004. A12.

CAPÍTULO I: CONCEPTUACIÓN DEL CONFLICTO:

GEORG SIMMEL Y RALF DAHRENDORF

La categoría de análisis más útil para estudiar las estructuras sociales y los actores de las guerras por el agua y el gas es el conflicto. El conflicto aparece como la mejor manera de definir la relación existente entre los actores; el presente estudio intentará analizar específicamente el conflicto generado por las estructuras sociales. El conflicto es una categoría muy amplia con una literatura igualmente amplia con respecto a sus definiciones y funciones. Comenzando con el enunciado de que todo cambio social es precedido por conflicto, es necesario concebir un marco teórico con valor heurístico que examine lo que es el conflicto, cómo ocurre, y cuáles son sus formas y funciones, y que no vea al conflicto a priori como algo disfuncional. De todos los autores que han escrito sobre el tema, se destacan dos como esenciales para entender estas cuestiones relacionadas con el conflicto. Sus contribuciones permiten una conceptualización que le permite ser utilizado como una categoría de análisis para una investigación, y no como un medio de dictar un juicio normativo. Los dos autores seleccionados como la base de esta conceptualización del conflicto van de lo general a lo más específico. Georg Simmel establece un concepto general del conflicto y su significado sociológico; Ralf Dahrendorf construye sobre las ideas de Simmel y escribe que el propósito de una teoría sociológica del conflicto es identificar las estructuras sociales que tienden a generar conflicto.

Si bien este estudio ha identificado a la democracia como el principal ámbito del conflicto, la teoría democrática no constituiría una categoría útil de análisis. Empíricamente, es evidente que las democracias tienen muchas formas y funciones diferentes; no es útil entonces examinar los casos sobre la base de una teoría de la democracia. La utilización de esta categoría solo podría llevar esta investigación a la conclusión de que la democracia en Bolivia, al menos en los dos casos de conflicto, es disfuncional. Sin embargo, la idea de que la existencia de conflicto en una democracia es disfuncional no solo está alejada de la verdad, sino que también

es peligrosa. Por lo tanto, la cuestión sobre qué es o debe ser la democracia en Bolivia no es de interés – es de mayor significado saber cómo interpretan los actores esa cuestión, pues es la manera en que ellos estructuraron su campo de conflicto. Las guerras por el gas y el agua son casos de conflicto político y por lo tanto serán analizadas las estructuras políticas, pero no desde el punto de vista de la teoría democrática.

La teoría del conflicto del sociólogo Georg Simmel servirá de base teórica para esta discusión.² Simmel es uno de los autores fundamentales sobre el conflicto, y sus contribuciones han impactado enormemente en la sociología moderna del conflicto. Y más importante aún para este estudio, Simmel argumentó en su teoría que el conflicto es una fuerza que crea y destruye los vínculos sociales al mismo tiempo, tiene aspectos positivos y negativos que no pueden separarse, y es inevitable y necesaria para el funcionamiento de la sociedad. Ralf Dahrendorf, que escribió medio siglo después de Simmel, contribuyó aún más a la teoría del conflicto. Su concepto de un “modelo conflictivo de sociedad” incorpora la noción de Simmel de que no es la presencia, sino la ausencia de conflicto lo sorprendente y anormal. Su teoría del conflicto social se basa en la idea del origen estructural del conflicto social, o las “fricciones sociales que pueden derivar de la estructura de las sociedades independientemente de los datos históricos estructuralmente incidentales.”³

Georg Simmel

La base de la teoría de Simmel es lo que los traductores han llamado “sociación.” Vivir en interacción con otros es una condición de la humanidad, y cada interacción es una forma de “sociación.” El conflicto, tanto como la cooperación, dado que no puede llevarse a cabo por un solo individuo, es también una forma de sociación. El conflicto es el resultado de una relación y

² Simmel, Georg. “Conflict and the Web of Group-Affiliations.” Trans. Kurt H. Wolff and Reinhard Bendix. New York: The Free Press. 1955.

³ Dahrendorf, Ralf. “Toward a Theory of Social Change.” *The Journal of Conflict Resolution*, v 2, n 2 (Jun, 1958), 170-183. El otro artículo de referencia escrito por Dahrendorf es “Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis.” *The American Journal of Sociology*, v 64, n 2 (Sep., 1958), 115-127.

existe para “resolver dualismos divergentes; es una manera de lograr cierta unidad.” Dado que el conflicto solo puede existir en una relación, los actores que participan de ella interactúan y “socian.” El conflicto necesariamente implica interacción; es un lazo común entre los grupos que, según Simmel, de no ser así no estarían unidos por ninguna fuerza.⁴

Tener en cuenta que el conflicto es resultado de la sociación y que es positivo sociológicamente es esencial para entender el concepto que Simmel tiene del conflicto. Lejos de demonizar el conflicto, Simmel sostiene que negar el conflicto es negar una relación social. El conflicto, por ende, es importante por su mera existencias. Para destacar este punto, Simmel lo compara con las indiferencias, o con una falta de sociación. Si la indiferencia es posible, entonces el conflicto es ignorado o negado, y la sociedad se ve privada de su mecanismo para resolver los “dualismos divergentes.” Por lo tanto, es importante que exista el conflicto, porque indica que se están explicitando las diferencias y el cambio está sucediendo.

Simmel escribe que el conflicto resuelve las tensiones entre los contrastes, ya sea que esta resolución trabaje rumbo a la unión de las partes o a la división de las mismas. El conflicto resuelve los dualismos divergentes, aún si esto da como resultado la eliminación de una de las partes en conflicto. En las unidades sociales, las unidades convergentes y divergentes están entrelazadas inextricablemente. Por ende, un grupo completamente unificado y armonioso “no solo es irreal empíricamente, sino que también puede demostrar una falta total de proceso vital real.” Para que la sociedad funcione y tome forma, esta expresión de fuerzas convergentes y divergentes, de armonía y desarmonía, es necesaria. La sociedad es el resultado de ambos tipos de interacción, y estos tipos “se manifiestan como totalmente positivos.” Para Simmel, el conflicto es, por lo tanto, una fuerza que destruye y crea vínculos sociales al mismo tiempo. El conflicto no puede separarse ni aislarse como negativo, pero sí es necesario e inevitable.

⁴ Agulla, Juan Carlos. La experiencia sociológica II. Buenos Aires: Estudio Sigma. 1994.

Al considerar el conflicto, los seres humanos a menudo lo ven en términos de dualismos opuestos. Simmel sostiene sus opiniones sobre el dualismo de las fuerzas opuestas haciendo referencia a los fundamentos filosóficos de su análisis. La tendencia más común al considerar el conflicto “interno” (interpersonal) es observar la oposición entre dos partes. Una es un elemento positivo en la vida, y la otra es una fuerza negativa que debe ser eliminada para alcanzar el elemento positivo. Simmel hace mención a la felicidad y el sufrimiento, la virtud y el vicio, la fuerza y la insuficiencia como ejemplos de este dualismo: Los seres humanos tendemos a pensar que nuestra verdadera identidad se halla en uno de los elementos que se oponen. Esto existe tanto dentro del individuo como en la interacción grupal. El bando que es considerado como destructivo y negativo (sufrimiento, vicio, insuficiencia, según los ejemplos) es, en realidad, positivo. Simmel lo explica de la siguiente manera:

debemos concebir todas estas diferenciaciones polares como pertenecientes a una sola vida; debemos percibir el pulso de una vitalidad central en la medida que, si se ve desde el punto de vista de un ideal en particular, no debe serlo en absoluto y es meramente algo negativo; debemos permitir que el significado total de nuestra existencia crezca a partir de ambas partes.

Separar y asignarle un significado positivo o negativo a un lado del dualismo no es útil a la hora de conceptualizar el conflicto. Simmel señala la importancia de considerar a los dualismos como un todo al examinar la cuestión del conflicto contra la paz, porque “el conflicto nos impresiona con su fuerza destructiva socialmente como con un hecho aparentemente indiscutible.”⁵ En realidad, ambos elementos son positivos en la medida en que son observables y constituyen el todo.

Simmel se centra en la dualidad de la unidad y el desacuerdo. El error más común es creer que en esta dualidad uno se desmorona y el otro crece, y sea cual fuere el resultado, se trata de una sustracción de los dos. En realidad, la parte que queda de pie es en realidad el resultado de la suma de ambos. La unidad suele referirse al consenso general de individuos que interactúan que supera sus desacuerdos y su separación. Sin embargo, el significado más amplio de unidad

⁵ Simmel 16.

es también el de “una total síntesis grupal de personas, energías, y formas, es decir, el carácter total de ese grupo.” Cuando se hace referencia a la unidad, se suele perder el significado mayor, y al hacerlo nos estamos refiriendo solamente a aquellos elementos que son unitarios en función, dejando de lado el elemento de discordia. Dado que entre los individuos el desacuerdo tiene un carácter negativo y destructivo, “concluimos ingenuamente que debe tener el mismo efecto sobre el grupo en su totalidad.” Esto sucede cuando algo negativo es considerado aisladamente, pero no necesariamente tiene el mismo efecto destructivo sobre la relación total de los individuos. De esa manera, en una observación más exhaustiva del conflicto, los elementos negativos del conflicto que normalmente se consideran individualmente pasan a tener un papel positivo.

El desacuerdo está inextricablemente relacionado con los elementos que mantienen unidos a los grupos, y este conflicto permite que las unidades desarrollen sus propias características definidas. Por lo tanto, si el desacuerdo desaparece de una relación, el resultado no es “una vida más rica y plena”, sino un fenómeno totalmente diferente, como si la armonía y la cooperación hubieran desaparecido totalmente de esa relación. Esta oposición y desacuerdo interactúa con los elementos que unen a la sociedad, y “lo que a primera vista parece estar en disociación [indiferencia], es en realidad una de sus formas elementales de sociación.” En parte, esto le da forma a la sociedad: En el caso de que la oposición y la tensión desaparezcan, surge en su lugar un fenómeno totalmente nuevo. Además, es imposible saber de antemano qué forma tendrá prioridad. Simmel argumenta lo siguiente:

En general, siempre y cuando el problema sea la cristalización de las instituciones cuya tarea es resolver el cada vez más complejo e intrincado problema del equilibrio dentro del grupo, a menudo no queda claro si la cooperación de las fuerzas para el beneficio del todo toma forma de oposición, competencia, y crítica, o de una unidad y armonía explícitas.⁶

El desacuerdo es, por lo tanto, tan importante en las relaciones sociales como la armonía.

⁶ Simmel 24

La pertenencia común en una estructura social mayor, según Simmel, puede ser otra base de conflicto. Esta área mayor común a todos los actores se convierte en algo rutinario, por lo que sus posiciones mutuas en un conflicto dado están determinadas no por las características habituales de la estructura mayor (un posicionamiento a largo plazo de paz relativa), sino por aquello que es “temporalmente diferente.” Es el contraste que resulta de una divergencia, aún por un tema insignificante, lo que da como resultado un conflicto entre los miembros de una misma estructura social mayor. Los grupos que están en conflicto se odian mutuamente no solo por aquello que produjo el conflicto en primer lugar, sino porque cada parte cree que la otra amenaza la unidad del grupo mayor. Si el grupo se disuelve, el conflicto se libera. Sin embargo, para que el grupo continúe debe haber una tensión entre “el antagonismo intragrupal y la continuidad del grupo” que debe llevar a otro conflicto. Cada parte pelea en nombre del grupo en su totalidad, y odia “en su adversario no solo a su propio enemigo sino al mismo tiempo al enemigo de la unidad sociológica mayor.”

Simmel describe un cierto instinto innato de oposición. Dado que los humanos son puramente egoístas por naturaleza, la oposición es un reflejo inevitable que surge aún en relaciones armoniosas. Dada esta situación, Simmel afirma lo siguiente, que se aplica directamente a los casos aquí estudiados: “En la hostilidad humana, la causa y el efecto suelen ser tan heterogéneos y desproporcionados que es difícil determinar si el asunto en cuestión es de verdad la causa del conflicto o simplemente la consecuencia de una oposición de larga data.”

Simmel también examina la transición de la paz al conflicto y del conflicto a la paz. La transición de la paz a la guerra no representa tanto un desafío como de la guerra a la paz: “En tiempos de paz, las situaciones a partir de las cuales se desarrollan los conflictos abiertos son conflictos en una forma difusa, imperceptible, o latente.” Cuando surge el conflicto, el mismo resulta ser una acumulación de antagonismos de odio y fricciones que están fuera del área central del conflicto. Los antagonismos que no son explícitos antes del clímax del conflicto surgen

directamente de las condiciones de paz. Si bien esto dificulta la determinación de si el objeto implicado es la causa del conflicto las consecuencias de una oposición de larga data, al menos es fácil identificar los antagonismos. La transición de la guerra a la paz, por el contrario, no es tan directa. Por lo tanto, es importante examinar las formas en que terminan los conflictos. Dichas formas son las siguientes: Desaparición del objeto, victoria, compromiso, y conciliación.

Al examinar la victoria, Simmel considera el caso puesto sobre el tapete no solo por la superioridad de una de las partes, sino también, “al menos en parte, por la resignación del otro bando.” Esto es importante porque una parte se rinde antes de agotarse totalmente. Es interesante tener en cuenta que “en este carácter voluntario de declararse vencido se halla una prueba contundente del poder propio. Se trata, al menos, de una última acción a realizar: Uno le está dando un regalo al vencedor.”⁷

Ralf Dahrendorf y la teoría del conflicto social

Ralf Dahrendorf, otro sociólogo alemán que escribió sus obras medio siglo después que Simmel, desarrolla un modelo de conflicto que incluye suposiciones sobre la naturaleza del conflicto elaborada por su predecesor. Dahrendorf defiende el “modelo conflictivo de sociedad” como un medio de análisis sociológico. Este modelo se basa en tres principios clave: Cambio, conflicto, y represión.⁸ Primeramente, en lugar de considerar como anormal al cambio,

Dahrendorf sostiene que “todas las unidades de la organización social están en un constante cambio, a menos que intervenga alguna fuerza para detener este cambio”, es la ausencia de cambio lo que debe tenerse en cuenta. Dahrendorf afirma que “toda sociedad que se haya conocido cambia sus valores e instituciones de manera continua. Los cambios pueden ser rápidos o graduales, violentos o regulados, generales o poco a poco, pero nunca están del todo ausentes allí donde los seres humanos crean organizaciones para vivir en comunidad.” La

⁷ Simmel 114.

⁸ Dahrendorf 1958b.

sociedad, según Dahrendorf, no es algo inherentemente estático con algunos momentos de cambio: la sociedad es dinámica y el cambio es ubicuo.

El conflicto es omnipresente por igual tanto en la sociedad como en el generador del cambio social. Como se dijo anteriormente, no es el conflicto lo que debe explicarse, sino su ausencia. La ausencia de conflicto es “sorprendente y anormal, y tenemos buenas razones para sospechar si encontramos una sociedad u organización social que no muestre evidencias de conflicto.” Además, el conflicto puede adquirir diversas formas que van desde la guerra al debate parlamentario, con huelgas y bloqueos en el medio. No obstante, la noción subyacente sigue siendo la misma para todas las formas: “El conflicto puede eliminarse temporalmente, regularse, canalizarse, y controlarse, pero ni un paradigmático de la filosofía ni un dictador moderno puede abolirlo de una vez y para siempre.” La influencia de Simmel parece evidenciarse aquí, en la idea de que el conflicto es positivo sociológicamente y no una fuerza negativa a priori.

Finalmente, Dahrendorf sostiene que la represión es un elemento importante de la sociedad: “Las sociedades y organizaciones sociales se mantienen unidas no por el consenso sino por la represión, no por el acuerdo universal, sino por la coerción de unos sobre otros.” El sistema de valores de una sociedad en este modelo es impuesto por la fuerza más que aceptado. La idea de represión es esencial, ya que la fuente del conflicto social es la represión de algunos miembros de la sociedad sobre los demás que forman parte de la estructura social. Dahrendorf hablará más adelante de la génesis estructural del conflicto entre grupos con distintos niveles de dominación.

La incertidumbre y la falta de acuerdo sobre cómo debe ser una sociedad ideal lleva a un conflicto constante. “Dado que no conocemos todas las respuestas, tiene que existir un conflicto continuo sobre los valores y políticas. Debido a esa incertidumbre, siempre hay cambio y desarrollo.” Las explicaciones de los problemas sociales que surgen de esta incertidumbre deben ser en términos de represión, conflicto, y cambio. El cambio es omnipresente en la sociedad

humana y es sacado a la luz por el conflicto, que a su vez es generado por la represión. El conflicto es ubicuo porque la represión lo es en la medida en que los seres humanos forman organizaciones sociales. Por lo tanto, siempre es la represión, o la dominación de unos sobre otros, el aspecto principal en el conflicto social.

Dahrendorf adopta los conceptos de cambio, conflicto, y represión, y los sistematiza en su ensayo "Toward a theory of social conflict." Allí opina que la finalidad de una teoría sociológica del conflicto es "superar la naturaleza predominantemente arbitraria de los hechos históricos que no tienen explicación derivándolos de elementos sociales estructurales, en otras palabras, explicar ciertos procesos a través de conexiones prognósticas." En lugar de observar condiciones históricas especiales que sean específicas a las sociedades involucradas en la investigación, es más importante entender que el conflicto surge como resultado de ciertos acuerdos estructurales, y surgirá cada vez que los mismos estén presentes. Dahrendorf pretende así no considerar una teoría general del conflicto, sino una teoría que considere al conflicto como "expresiones de características estructurales y generales de las sociedades, o de sociedades en la misma etapa de desarrollo." Dicho en otras palabras, "la teoría sociológica del conflicto haría muy bien en dar un paso al costado y darle lugar a una explicación de las fricciones existentes entre quienes gobiernan y son gobernados en la estructura de una organización social en particular."

Dahrendorf sostiene que "ninguna teoría del cambio o conflicto social puede anteceder a la descripción de la entidad estructural que sufre el cambio o en la que suceden los conflictos." Él critica la teoría estructural-funcionalista de la sociología moderna en su descripción de cómo se unen los elementos de una estructura en un todo estable, cuestionando si esta descripción es un punto de partida útil para un análisis estructural de cambio, el conflicto, y la represión.

El estructural-funcionalismo ve a la sociedad como un todo coordinado y funcional en el que los distintos elementos se combinan y cumplen diversas funciones. El fin de estudiar las

distintas asociaciones, instituciones, o procesos es determinar las “consecuencias intencionales o no de estas asociaciones para el funcionamiento y la conservación del sistema.” Dahrendorf cita ejemplos de conclusiones estructural-funcionalistas como “‘el sistema educativo funciona como un mecanismo de asignación de posiciones sociales’.” Los problemas surgen al preguntar cuáles son las funciones de los grupos militantes o de oposición. La respuesta de los estructural-funcionalistas es que contribuyen al funcionamiento del sistema existente. Sin embargo, Dahrendorf afirma que aún cuando ese sea el caso, la respuesta de los estructural-funcionalistas en realidad revela poco del verdadero papel de los grupos opositores. Además, cuando los grupos opositores – intencionalmente o no – contribuyen a la destrucción del sistema existente, el punto de vista estructural-funcionalista los califica de “disfuncionales.” La misma es una categoría residual que no explica totalmente el papel de dichos elementos.

El examen de la estructura social, sostiene Dahrendorf, brinda un camino hacia una útil teoría sociológica del conflicto. El modelo de sociedad propuesto por Dahrendorf tiene cuatro elementos, basados en su discusión previa del modelo conflictivo de sociedad en términos de cambio, conflicto, y represión. Esta teoría del conflicto postula un cambio social ubicuo y el conflicto social, la “disfuncionalidad” de todos los elementos de la sociedad, y el carácter represivo de la unidad social. Los cuatro elementos son: “1) Toda sociedad está sujeta al cambio en todo momento: El cambio social es ubicuo; 2) Toda sociedad experimenta conflicto social en todo momento: El conflicto social es ubicuo; 3) Todo elemento de una sociedad contribuye a su cambio; 4) Toda sociedad se apoya en la represión de algunos de sus miembros por parte de otros.”

La tesis del modelo que Dahrendorf plantea del origen estructural del conflicto es que la fuente de conflicto se halla en las “relaciones dominantes que prevalecen dentro de ciertas unidades de organización social.” Él utiliza el concepto de Max Weber de un “grupo coordinado imperativamente” como unidades, en el cual existen relaciones de autoridad y subordinación.

Para obtener una definición operativa de la autoridad, Dahrendorf recurre nuevamente a la determinación de Weber: “la probabilidad de que una orden con cierto contenido será obedecida por ciertas personas.” Esto contiene los siguientes elementos: 1) La autoridad denota una relación de supra y subordinación. 2) El bando supraordinado prescribe al subordinado un cierto comportamiento con forma de orden u prohibición. 3) El bando supraordinado tiene el derecho de hacer dichas prescripciones; la autoridad es una relación legítima de supra y subordinación; la autoridad no se basa en efectos azarosos personales o situacionales sino en una expectativa asociada a la posición social. 4) El derecho de la autoridad se limita a ciertos contenidos y a personas específicas. 5) La no obediencia de dichas prescripciones es sancionada; un sistema legal (o un sistema de costumbres de cuasi-legales) salvaguarda la efectividad de la autoridad.

El principal punto de intereses de este análisis es que “toda posición en un grupo coordinado imperativamente puede ser reconocida como perteneciente a aquel que domina o al que es dominado.” La principal división existe entre aquellos con roles de dominación positiva (expectativa de ejercicio de la autoridad) y los roles de dominación negativa (aquellos sin privilegios de autoridad). Si un conflicto social cumple con los criterios de esta dicotomía dentro de grupos coordinados imperativamente, entonces puede ser explicado estructuralmente. Con esta base, Dahrendorf crea un modelo de análisis de la teoría del conflicto. El modelo de cuatro pasos propuesto por Dahrendorf puede ser un medio útil para analizar un conflicto. El mismo tiene en cuenta el conflicto generado por las estructuras a la vez que incluye variables específicas a los actores involucrados.

Su modelo incluye los siguientes pasos: Primero, en el grupo coordinado imperativamente, aquellos que detentan los roles de dominación y aquellos que no tienen poder componen dos cuasi-grupos con interés latente opuesto. Aquí son llamados cuasi-grupos porque no se trata de unidades organizadas; su oposición puede no ser evidente y solo existe en forma de expectativas asociadas con ciertas posiciones. Normalmente, el interés del cuasi-grupo con un rol

positivo de dominación se asocia con el status quo, mientras que el interés del rol negativo de dominación se asocia con el cambio.

El segundo paso en este modelo es que los miembros de los cuasi-grupos opuestos, aquellos con roles positivos y negativos de dominación, se organizan en grupos con intereses explícitos bajo condiciones variables empíricamente (las condiciones de organización). Dichos grupos “de interés” organizados pueden incluir partidos o sindicatos, y sus intereses explícitos son formulados por programas e ideologías. En el tercer paso, los grupos de interés formados están en constante conflicto con respecto a la conservación del cambio o del status quo. La forma y la intensidad de este conflicto dependen de las condiciones variables empíricamente (las condiciones del conflicto). En el último paso, el conflicto entre los grupos de interés lleva a cambios en la estructura de las relaciones sociales en cuestión a través de cambios en las relaciones de dominación. Nuevamente, las condiciones variables empíricamente (las condiciones del cambio estructural) determinan el tipo, la velocidad, y la profundidad de dichos desarrollos.

El área problemática para este modelo está delimitada por aquellos conflictos entre grupos que surgen de la estructura de autoridad de las organizaciones sociales. El modelo identifica los factores pertinentes en las condiciones empíricas de la organización, del conflicto, y del cambio. Los grupos de interés son una función de las condiciones de la organización si se da un grupo coordinado imperativamente; las formas específicas del área de conflicto funcionan si se dan las condiciones de los grupos de interés; y las formas específicas de cambio son una función de las condiciones de cambio si se da el conflicto entre los grupos de interés. Por lo tanto, este modelo tiene en cuenta ambos factores específicos a los actores que participan en el conflicto como también la estructura que genera el conflicto. La tarea es, entonces, identificar estos tres grupos de condiciones y determinar su peso relativo.

En cuanto a las condiciones variables empíricamente, Dahrendorf examina las posibilidades para cada uno de los tres factores pertinentes: Las condiciones de la organización, del conflicto, y del cambio. Las condiciones de la organización incluyen tres factores principales: Las condiciones sociales, por ejemplo la comunicación entre los miembros, o el reclutamiento y formación de los cuasi-grupos; las condiciones políticas, que son necesarias para que se formen los grupos de interés, incluyendo la libertad de coaliciones; y las condiciones técnicas, como el fundador del grupo, el líder, y la ideología.

Dentro de las condiciones del conflicto, existen dos condiciones principales: El grado de movilidad social de los individuos o familias y la presencia de mecanismos efectivos para regular los conflictos sociales. Al imaginar la intensidad de los conflictos sociales entre los grupos de interés de manera continua, es posible conjeturar la presencia de una ausencia de movilidad social y de regulación de mecanismos en tener influencia en la posición de un conflicto dado en ese continuo.

Las condiciones del cambio estructural determinan la forma y el alcance de los cambios en la estructura social que surgen del conflicto entre los grupos de interés. Dahrendorf menciona algunas posibilidades: La relación entre la intensidad del conflicto y el cambio resultante, o la capacidad de los gobernantes de mantenerse en el poder. Sin embargo, deja mayores precisiones sujetas a las condiciones de emprendimientos futuros. Al analizar el cambio estructural, es importante tener en cuenta que el conflicto no desaparece cuando los cambios llegan al clímax. El conflicto puede cambiar de forma, pero el conflicto generado estructuralmente permanece.

Esta sección presentó un resumen de dos complejos teóricos con teorías sobre el conflicto que desafían la sabiduría convencional. El conflicto es positivo desde el punto de vista sociológico y es el resultado de una relación entre dos o más actores. Más que una fuerza negativa, el conflicto cumple en realidad un papel vital en la sociedad, tanto como la cooperación

o la armonía. Más que ser algo funcional, el conflicto y el cambio son continuos en la sociedad. Ciertos conflictos son generados estructuralmente, y son resultado de la represión de un grupo (aquellos con roles positivos de dominación) sobre otro grupo (aquellos con roles negativos de dominación). Estos conflictos se desarrollan en cuatro pasos, van desde la etapa latente en la que se forman los cuasi-grupos, a una etapa más visible en la que surgen las organizaciones, a una etapa de conflictos abiertos, y finalmente a la etapa del cambio estructural. El desarrollo de estos pasos depende de condiciones variables empíricamente, pero en general, los conflictos generados estructuralmente incluyen estos cuatro pasos.

Esta conceptualización del conflicto basada en las teorías de Simmel y Dahrendorf señalará el análisis de la presente investigación. El siguiente análisis de la historia boliviana, el debate sobre la pobreza y las reformas estructurales, y los casos serán alimentados por sus teorías. Estos casos se aplican a este tipo de análisis; son políticos por naturaleza, y tal como sostiene Dahrendorf, “el conflicto político es un hecho estructural de la sociedad bajo cualquier condición imaginable.” La utilización del modelo de Dahrendorf como base permite un análisis que ayudará al principal desafío de esta investigación: Tener en cuenta tanto las condiciones empíricas del conflicto, específicamente un análisis de los actores, como también la estructura que genera el conflicto.

CAPÍTULO II: PANORAMA HISTÓRICO

Para entender el conflicto que dio como resultado las guerras por el gas y el agua, se debe realizar un análisis minucioso de la historia boliviana. En las palabras de Dahrendorf, esta sección describirá “la entidad estructural que sufre el cambio o en la que suceden los conflictos.” Para cumplir el objetivo de este estudio, es decir, examinar las estructuras sociales que generaron los conflictos, es necesario comprender la evolución histórica de dichas estructuras. Es una tarea ardua, ya que la mayor parte de los principales hechos en la historia boliviana – incluyendo la colonización, la explotación de los recursos naturales, la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, la Revolución de 1952, el restablecimiento de la democracia, y demás – parecen tener roles importantes a la hora de dar forma a las estructuras. Dado que es difícil aislar estos antecedentes entre sí, y no es posible realizar una revisión completa de la historia boliviana a la luz de este proyecto, este panorama se limitará a los siguientes puntos: Revisión cronológica de la estructura política y económica de Bolivia, relación entre el gobierno y la sociedad, movimientos sociales y aborígenes, relaciones con los EE.UU. en la guerra contra las drogas, plan de ajuste estructural de 1985, y las reformas del estado de la década del '90. El Capítulo III se fundamentará en estos últimos puntos al examinar el debate actual en Bolivia sobre la pobreza y las reformas estructurales de los '80 y '90.

La elección de dichos antecedentes se basa en un repaso de la literatura existente sobre las guerras, como también un examen del discurso de los actores. Este discurso planteó preguntas sobre la sociedad, la economía, y la política bolivianas que no pueden encararse sin tener una perspectiva histórica. Esta perspectiva es necesaria para entender la manera en que estas estructuras se ven influenciadas por los actores de las guerras por el gas y el agua, incluyendo su discurso y estrategia. En el análisis de los casos, esta perspectiva histórica posibilitará una exploración más exhaustiva de la interacción entre los actores y la estructura social.

El colonialismo y el período post-independencia

Una de las caracterizaciones más frecuentes de la sociedad boliviana es que está altamente fragmentada. Las estructuras sociales creadas durante la conquista española, y la posterior colonización, han permanecido casi inalterables durante siglos en este país andino. El territorio que hoy se conoce como Bolivia formó parte del Imperio Inca, comenzando alrededor de 1460. Se encontraba poblado por una variedad de grupos aborígenes, desde los aymaras en el altiplano norteño, quechuas en el altiplano del sur, y diversos grupos nómadas en las llanuras del este y el sudeste.⁹ Gran parte del altiplano estaba bajo el control de los Incas a la llegada de los españoles en 1532 a lo que hoy es territorio peruano. No pasó mucho después de la derrota de las fuerzas incas por partes de Francisco de Pizarro para que los españoles comenzaran a establecerse en el altiplano en 1538. Esta zona comenzó a adquirir una gran importancia para los españoles. Conocida como Alto Perú durante el período colonial, era una fuente de grandes riquezas para la corona después del descubrimiento de plata en 1545 en Cerro Rico. Esta montaña ubicada en lo que ahora es el sudoeste boliviano prácticamente financió a la corona española durante más de doscientos años. A comienzos del siglo XVII, Potosí, la ciudad fundada cerca del Cerro Rico, gozaba de una fabulosa riqueza y tenía más población que Londres o París.

Los españoles podían extraer la mayor cantidad de ganancias de las minas a través de un sistema de trabajos forzados conocido como *mita*, que ya existía en el Imperio Inca y que continuó aún más duro y oneroso durante el dominio español. Los grupos indígenas eran organizados en comunidades llamadas *ayllus* (sistema de agrupación utilizado por los aymaras) y los hombres eran obligados a trabajar una cierta cantidad de tiempo en las minas. Las condiciones eran extremadamente duras y la tasa de mortalidad muy alta. El empobrecimiento de las masas de pueblos indígenas que trabajaban en las minas y brindaban esta fuente de abundancia, mano de obra barata para las industrias coloniales, hicieron posible la acumulación

⁹ "Historia de Bolivia." Instituto Nacional de Estadísticas.
http://www.ine.gov.bo/ProgBase.asp?h=Aspectos_Historicos.htm&T=Historia%20de%20Bolivia. 10 agosto 2004.

de grandes riquezas por parte de los españoles o criollos. Los trabajos forzados también eran utilizados por grandes terratenientes en las áreas fértiles de Chuquisaca y Cochabamba para satisfacer la demanda de alimentos en el árido altiplano. Al mismo tiempo se daba una mezcla de culturas durante la colonización, a medida que surgía una nueva clase de cholos (pueblos indígenas que adoptaban la vestimenta y el consumo occidentales, y hablaban castellano).¹⁰

Después de un siglo de descenso en la producción, hacia finales del siglo XVIII se observó un crecimiento renovado en la industria minera, que dependía en gran medida de la *mita* y los subsidios reales. Para incrementar los resultados económicos de las colonias, se expandió la “capitación” sobre los pueblos indígenas para abarcar así a todos los varones aborígenes, y se convirtió en la principal fuente de ingresos para la corona en esta zona.¹¹ Además de proveer ingresos directos, este tributo incluía un mecanismo que obligaba a los agricultores indígenas a comercializar su producción en los mercados españoles.

Bolivia obtuvo su independencia en la ola de rebeliones sudamericanas liderada por José de San Martín y Simón Bolívar, y técnicamente se liberó de España como parte de Perú después de la batalla de Ayacucho en 1824. Bolivia se separó de Perú el 6 de agosto de 1825, recibiendo su nombre en honor del libertador del norte de Sudamérica, quien también fue el primer Presidente del país durante un breve lapso. Lo sucedió su segundo, Antonio José de Sucre, un líder militar liberal que instauró diversas reformas, entre ellas el despojo de gran parte de las tierras, riquezas, y poder de la Iglesia Católica. La Iglesia quedó así relativamente débil en Bolivia y dejó de tener un papel principal en la política nacional. También abolió el impuesto aborígen.

A pesar de estar en el clímax de la independencia, los pueblos indígenas, que representaban un 80% de la población total en 1825, seguían siendo considerados como ciudadanos de segunda clase, privados incluso de los derechos más básicos. En 1830, fue

¹⁰ Klein, Herbert. *A Concise History of Bolivia*. Cambridge: Cambridge University Press. 2003. Pg 51.

¹¹ Klein 71.

restituido el impuesto a los aborígenes, el cual pasó a representar aproximadamente un 45% del presupuesto nacional.¹² En las palabras de un historiador: “Teóricamente, [las masas aborígenes] eran hombres libres viviendo en países libres; en realidad eran privados de todo medio de avance económico, se les negaba la participación real en su propio gobierno, y prácticamente no gozaban de oportunidades de educación ni progreso.”¹³

Diversos gobiernos del siglo XIX intentaron apropiarse individualmente de tierras indígenas – un concepto ajeno a la cultura del altiplano – al quitarles tierras comunales a los grupos que no tenían títulos de propiedad claros. Al verse imposibilitados de demostrar la propiedad de las tierras, los indígenas trabajaban como aparceros de tierras que se concentraban cada vez más en manos de unos pocos terratenientes. Surgieron algunas rebeliones armadas, acrecentando así la ya tumultuosa escena política.

Bolivia trabó dos guerras con Chile en el siglo XIX, en 1837 integrando la Confederación Perú-Bolivia y nuevamente en 1879 en la Guerra del Pacífico. Este segundo conflicto comenzó en 1878 cuando el gobierno boliviano intentó aplicar un impuesto a las compañías británicas y chilenas que extraían sal del territorio marítimo boliviano. En respuesta, Chile optó por ocupar militarmente la zona en febrero de 1879. Bolivia había suscripto un tratado de defensa con su vecino Perú, y ambos países intentaron detener la ocupación. Sin embargo, Chile adoptó una postura más firme y ocupó zonas del territorio costero peruano. La Guerra del Pacífico terminó en 1883, dejando 120.000 km² de territorio boliviano, incluyendo 400 km de costas, bajo control chileno, además de importantes zonas de territorio peruano.¹⁴

En 1904, Bolivia y Chile rubricaron un Tratado de Paz y Amistad ratificado por el Congreso Boliviano. Al ver ocupado militarmente su acceso al Pacífico, Bolivia no tuvo más opción que aceptar los términos de Chile: A cambio de ceder su litoral, Bolivia recibiría una

¹² del Pozo, José. *Historia de Latinoamérica y del Caribe 1825-2001*. Santiago de Chile: LOM. 2002. 49.

¹³ Crow, John A. *The Epic of Latin America*. Berkeley: University of California Press. 4th ed. 1992. Pg. 624.

¹⁴ “Libro Azul: El problema marítimo boliviano.” Gobierno de Bolivia. La Paz. 2004.

compensación monetaria (300.000 libras esterlinas), libre tránsito al Pacífico, y la construcción de un ferrocarril desde La Paz hasta Arica. Bolivia se convirtió así en un país mediterráneo. Al día de hoy, esta pérdida territorial provoca un perdurable efecto económico y psicológico en los bolivianos. La falta de un puerto oceánico soberano, además de la pérdida de potenciales depósitos minerales en lo que hasta entonces era territorio boliviano, ha generado odio y tensión hacia Chile. El gobierno boliviano, en su posición de que la falta de un acceso viable y soberano al océano ha ido en detrimento de su desarrollo, ha iniciado diversos intentos de llevar a Chile a negociar los territorios durante el siglo XX, pero la intransigencia chilena sumada a la inflexibilidad boliviana aseguraron que dichos intentos no llegaran a buen puerto.¹⁵

A principios del siglo XX, el surgimiento de un mercado mundial de estaño y los grandes depósitos que Bolivia tiene de ese mineral crearon una esperanza de crecimiento económico a través de la exportación de ese metal. Desde comienzos de siglo hacia finales del mismo período, la principal exportación de Bolivia fue el estaño. Su economía dependía tremendamente del mineral y por ende era muy vulnerable a la inestabilidad provocada por la fluctuación de precios en el mercado mundial. Las penurias de la economía nacional iban más allá del mercado del estaño, ya que la recaudación impositiva bajó notoriamente en la década del '20. Una seria recesión económica obligó al gobierno boliviano a tomar grandes préstamos, y traspasar el control del cobro de impuestos a bancos estadounidenses y a compañías petroleras de ese país. A principios del siglo XX, el capital extranjero (principalmente británico, chileno, y estadounidense) ya controlaba la mayoría de las minas de estaño de Bolivia, pero después de la consolidación de las décadas del '20 y '30, las minas pasaron a ser controladas por los “Tres Grandes” magnates del estaño, que al menos “técnicamente” eran bolivianos. Cuando el

¹⁵ Ibid. El “Libro Azul” del gobierno boliviano ofrece un análisis exhaustivo del conflicto histórico con Chile desde la perspectiva boliviana. El año pasado, el gobierno del Presidente Mesa ha efectuado importantes aperturas a la comunidad internacional buscando apoyo multilateral al reclamo boliviano. Algunos de dichos intentos incluyen la Cumbre Extraordinaria de las Américas, de enero de 2000 en México, y el 59° Debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2004.

gobierno boliviano buscó ayuda de los banqueros estadounidenses para incrementar la recaudación, los bancos recomendaron “el aumento en los impuesto y el cobro de impuestos a los propietarios de las minas.”¹⁶ Los Tres Grandes magnates respondieron internacionalizando sus operaciones, solidificando una percepción cada vez más común de que aunque los magnates eran todos bolivianos, en realidad representaban intereses extranjeros. El gobierno boliviano también permitió la construcción de proyectos de infraestructura por parte de compañías estadounidenses financiados por bonos bolivianos.

En la década del '30, la Gran Depresión estaba causando estragos en la economía del estaño. Los precios del metal habían caído, pero no estimulaban la demanda, por lo que cayó la producción. Bolivia entró en cesación de pagos de deuda, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en hacerlo. La crisis económica también exacerbó las tensiones entre el estado boliviano y los magnates del estaño. Las condiciones económicas llevaron a un desorden civil. El malestar creció al comenzar a surgir la falta de alimentos, restricciones en las importaciones, y huelgas. El Presidente Daniel Salamanca, según los historiadores, buscó desviar la atención del remolino interno para desviarla hacia una disputa fronteriza con Paraguay en la región del Chaco. Además, se hacía cada vez más evidente que Bolivia tenía pocas esperanzas de obtener acceso al Pacífico por parte de Chile, y comenzó a buscar su ruta marítima hacia el este. Finalmente, los descubrimientos de petróleo efectuados por la concesión Standard Oil hicieron más atractiva la región al este de los Andes. A mediados de 1932, colapsó el mercado del estaño, dejando miles de mineros sin trabajo. El 18 de julio de ese año, el Presidente Salamanca anunció que Paraguay se había apoderado de un fuerte en la frontera, y exacerbó el conflicto fronterizo hasta que estalló el conflicto armado. La Guerra del Chaco duró desde 1932 a 1935, dejando como resultado decenas de miles de muertos y una tremenda destrucción económica, sin mencionar la pérdida de territorio a manos de Paraguay. También creó un fenómeno político – la

¹⁶ Lehman, Kenneth. *The US and Bolivia: A Limited Partnership*. Athens: University of Georgia Press. 1999. 68.

movilización de los veteranos de la Guerra del Chaco – que más tarde tendrían un papel importante en el futuro cercano de Bolivia.

Hacia mediados del siglo XX, Bolivia seguía siendo un país rural (72% de los bolivianos trabajaban de la agricultura o de empleos relacionados), pero la urbanización iba en aumento.¹⁷ De los terratenientes, un 6% poseía 1000 o más acres de tierra, y sus posesiones representaban el 92% de la tierra arable de todo el país. La mano de obra era barata o gratuita, ya que estos terratenientes “empleaban” a pueblos indígenas como aparceros. La producción industrial era incipiente, y Bolivia era el productor de estaño de mayor costo en el mundo; aquel sector del que dependía la economía prácticamente no estaba dando ganancias.¹⁸ Los trabajadores, cada vez más militantes, entraron en conflicto con el gobierno. Las condiciones eran ideales para que la aparición de un levantamiento social.

La Revolución de Abril

La Revolución de 1952 es considerada a menudo como el hecho político y social más significativo de la historia boliviana reciente. Su principal protagonista fue el Movimiento Nacionalista Revolucionario, o MNR, un partido formado en 1941 luego de la costosa derrota de Bolivia en la Guerra del Chaco. El partido unió a la clase media urbana y a los sindicatos de mineros bajo el estandarte de la revolución y el nacionalismo. No obstante, en 1946, el Presidente Villarroel del MNR fue derrocado por una rebelión y colgado de un farol. Los líderes del MNR estuvieron exiliados hasta 1951. Ese año, Víctor Paz Estenssoro, uno de los fundadores del partido, se postuló a la presidencia desde el exilio. Preocupado por la notoriedad adquirida por Estenssoro, los militares intervinieron y anularon las elecciones. La consiguiente revolución, liderada por el MNR, cambió el escenario político y social en Bolivia. Los mineros, agricultores, y trabajadores urbanos se unieron en apoyo al MNR, exigiendo “tierras, control del estaño,

¹⁷ Klein 209.

¹⁸ Klein 211.

alimentos, y justicia.”¹⁹ En abril de 1952, la revolución llevó a Paz Estenssoro a la presidencia luego de lo cual comenzaron a darse una serie de importantes cambios.

Estos cambios implementados por Paz Estenssoro y el MNR reflejaban la composición de la coalición revolucionaria. En este período, los sectores indígenas bolivianos finalmente obtuvieron el derecho a votar gracias a una ley de sufragio universal. La reforma agraria fue otra política del gobierno revolucionario que afectó a los sectores aborígenes. Fue abolido el trabajo forzado, y los grupos indígenas, que hasta entonces se dedicaban a la agricultura meramente para subsistir y obtener ingresos, finalmente habían logrado la autonomía de sus tierras. Los campesinos se convirtieron en un miembro poderoso de la coalición revolucionaria, y durante este período también se organizaron en sindicatos. Las milicias de campesinos fueron recompensadas por su lealtad en la revolución y se les dio armas. En reconocimiento por el papel primordial que tuvieron los mineros en la Revolución de Abril, el gobierno nacionalizó las minas de estaño, hasta entonces propiedad de los Tres Grandes magnates. El gobierno estableció la Corporación Minera Boliviana, o Comibol, para controlar las minas propiedad del estado, y hacia fines de octubre de 1952, la Comibol controlaba dos tercios de la industria minera boliviana.²⁰

Otra consecuencia importante de la Revolución de 1952 fue la fundación de la Central Obrera Boliviana, o COB, que se convirtió en la principal federación de trabajadores. Fundada por mineros, ellos componían su principal base de poder. La COB tenía una gran influencia sobre el gobierno del MNR, ya que tres de los ministros del gabinete apoyaban a la COB y la organización tenía poder de veto sobre las decisiones de la Comibol a la vez que co-gobernaba la administración de las minas. La COB ha sido desde entonces una fuerza de gran influencia en la política boliviana, y, si bien se ha visto debilitada por las reformas económicas de los '80 y '90, sigue siendo una importante organización de trabajadores.

¹⁹ Crow 825.

²⁰ US Library of Congress Country Studies. “Bolivia.” <http://countrystudies.us/bolivia/>

El común denominador a los cambios efectuados por el gobierno revolucionario puede describirse, según Roberto Laserna, como una forma de corporativismo estatal. Este modelo predominó hasta las reformas de los '80 y '90. El estado era el principal organizador de la vida socioeconómica y política, y a través del clientelismo burocrático ofrecía un medio de movilidad ascendente y control social. El aparato estatal, según Laserna, era un mecanismo de acceso grupal y de control de los beneficios colectivos, a través de herramientas como el clientelismo.²¹ El estado en Bolivia era todo y llevaba a cabo todas las acciones. En esta cultura de paternalismo estatal, los bolivianos se acostumbraron a tener certeza sobre lo que les deparaba el futuro.

Paradójicamente, a pesar de su importancia y los cambios que instituyó, el legado de la Revolución de 1952 era incompleto. Aquellos sectores que anteriormente habían sido excluidos de la sociedad boliviana obtuvieron sus derechos políticos, pero no se lograron la equidad ni la inclusión sociales y económicas. Los cambios que trajo la revolución nunca se institucionalizaron, y la coalición revolucionaria se desintegró hacia fines de los '50 y principios de los '60. Esto se debió en parte a diversos factores limitantes.

Primeramente, después de la nacionalización, las minas de estaño dejaron de ser rentables a causa de una falta de experiencia técnica e inversiones de capital, además de una caída en los precios mundiales del estaño. Más aún, los salarios de los mineros habían sido aumentados en un 50%. El gobierno dependía en gran medida de los Estados Unidos para refinar el estaño. Para mantener el gasto en el presupuesto, Bolivia debió permanecer en buenas relaciones con los Estados Unidos para obtener préstamos del exterior. Los EE.UU., quizás debido al hecho de que las minas nacionalizadas ya no pertenecían a capitales de ese país, se convirtió en la principal fuente de ayuda financiera.²² A través de su ayuda, EE.UU. alentó la moderación del gobierno

²¹ Calderón, Fernando and Roberto Laserna. "Paradojas de la modernidad." Buenos Aires, CLACSO, 1994.

²² del Pozo 155.

revolucionario, incluyendo la compensación de las compañías mineras nacionalizadas y el permiso para que compañías estadounidenses invirtieran en el sector petrolero.

Posterior a la reforma agraria, los campesinos eran dueños y regentes por primera vez de las tierras que trabajaban. Sin embargo, al no tener experiencia en la economía de mercado, los nuevos propietarios de las tierras solo trabajaban lo suficiente para satisfacer sus necesidades. El resultado fue una escasez de alimentos que provocó altos niveles de inflación entre 1952 y 1956, y Bolivia tuvo que importar alimentos para alimentar a su gente.²³ Hubo un plan de estabilización impuesto por el Presidente Siles en 1957 que fue rechazado por la COB, y que llevó a un conflicto abierto dentro de la base misma del MNR. Las dificultades económicas y las divisiones internas aumentaban aún más la oposición al MNR.

Paz Estenssoro, quien fue presidente entre 1952 y 1956 y de 1960 a 1964, fue elegido para un tercer período en 1964. Sin embargo, en su período anterior, la inflación y una economía debilitada habían obligado al MNR a depender en mayor medida del ejército para mantener el control del país. El compañero de fórmula de Paz Estenssoro era el General René Barrientos, y la dupla resultó electa gracias al apoyo de los militares y los sectores campesinos. Tres meses después de las elecciones de 1964, Paz Estenssoro fue destituido en un golpe sin derramamiento de sangre, terminando así el control del MNR sobre la política sin haber establecido con éxito una base para la gobernabilidad democrática. Barrientos pasó a trabajar en revertir las políticas de los gobiernos electos. Redujo los salarios de los mineros, despidió y exilió a los líderes sindicales, y reprimió las protestas de los trabajadores. También fue responsable de orquestar lo que hoy se conoce como el pacto militar-campesino. Haciendo uso de su conocimiento del quechua (Barrientos era mestizo), se ganó el apoyo de los campesinos armados prometiéndoles proteger la tierra que se les había otorgado gracias a la reforma agraria. Su gestión fue legitimada por elecciones en 1966. En 1967, sus militares eliminaron el incipiente movimiento guerrillero

²³ Crow 826.

en el este capturando y ejecutando al Che Guevara, y el poder de Barrientos parecía seguro hasta su muerte en un accidente de helicóptero en 1969.²⁴

Varios dictadores militares gobernaron Bolivia desde la muerte de Barrientos hasta el regreso de la democracia en 1982, entre ellos los siete años de gobierno del Coronel Hugo Bánzer. Bánzer adoptó una postura de derecha, determinando la prohibición de los partidos políticos y los sindicatos (entre ellos la COB), y fomentó las inversiones extranjeras directas en el país.²⁵ El aumento en los precios del estaño durante la década del '70 dio como resultado un alto crecimiento económico y un importante superávit en la balanza comercial. Los aumentos en los precios mundiales del petróleo convirtieron a las relativamente pequeñas exportaciones de petróleo boliviano en grandes generadoras de ingreso; en 1974, el petróleo representaba un 25% del valor total de las exportaciones. Además, Bolivia comenzó a exportar gas natural a Brasil y Argentina. Estos desarrollos parecían indicar la posibilidad de cambios y crecimiento a largo plazo.²⁶ Sin embargo, al igual que prácticamente todos los países latinoamericanos, Bolivia comenzó en este período a amasar una enorme deuda, que al día de hoy constituye una gran fuga en el tesoro nacional. Hacia fines de los '70, la deuda de Bolivia rondaba los USD 3.500 millones. La economía boliviana comenzó a decaer a causa de una baja en los precios de las materias primas en el mercado mundial sumada a un aumento en las tasas de interés. Las mujeres mineras comenzaron una huelga de hambre en 1977 a la que se sumaron otros mineros, sacerdotes, y estudiantes, llevando a su fin a la dictadura de Bánzer. A comienzos de la década del '80, Bolivia había perdido su acceso al crédito internacional, y el Banco Mundial y el FMI cesaron su ayuda financiera. Fue un período de inestabilidad política, con gobiernos militares,

²⁴ del Pozo, José. 212.

²⁵ Sachs, Jeffrey. "The Bolivian Hyperinflation and Stabilization." *The American Economic Review*, v 77, n 2. Papers and Proceedings of the Ninety-ninth Annual Meeting of the American Economic Association (May 1987), 279-283.

²⁶ Klein 232.

golpes de estado, y elecciones anuladas. Finalmente terminó en 1982 con el regreso de la democracia.²⁷

El regreso a la democracia y el ajuste estructural

En 1982, Hernán Siles, quien había sido presidente de 1956 a 1960, asumió nuevamente la presidencia. Un congreso opositor liderado por Paz Estenssoro y el MNR y el ex dictador Bánzer y su partido Acción Democrática Nacional, o ADN, impidieron que Siles impusiera sus iniciativas izquierdistas. Los crecientes conflictos y la polarización entre la COB y las empresas bolivianas, la presión de los grupos sociales y los acreedores internacionales, y una brote hiperinflacionario se conjugaron para crear una situación cada vez más inestable. En la década del '80, el PBI real per cápita cayó un 22% en los primeros cinco años, indirectamente proporcional al número de huelgas y días laborales perdidos.²⁸ Más significativa aún fue la hiperinflación que Bolivia sufrió durante ese período. Con niveles que estuvieron entre los más altos de la historia mundial, los precios subieron un 20.000% entre agosto de 1984 y agosto de 1985, y en sus meses finales, de mayo de 1985 a agosto de ese año, la inflación creció a una tasa anual de 60.000%.²⁹

Según Jeffrey Sachs, economista de Harvard y asesor económico del gobierno boliviano, la hiperinflación en Bolivia tuvo tres causas principales: Primero, el acceso restringido al crédito internacional y el aumento en las tasas internacionales de interés a principios de los '80 fueron los principales factores que provocaron el ascenso indiscriminado de la hiperinflación. Segundo, las transferencias del PBI neto pasaron de USD 178 millones hacia Bolivia en 1980 a USD 190 millones desde Bolivia en 1983. Con un PBI de aproximadamente USD 3.600 millones, hubo un movimiento del 10% del PBI. Cuando esto sucedió, el gobierno acudió al señoreaje, provocando aún más inflación. Tercero, el aumento en la inflación hizo colapsar el sistema impositivo. Las

²⁷ Sachs 279.

²⁸ Godoy, Ricardo and Mario De Franco. "High Inflation and Bolivian Agriculture." *Journal of Latin American Studies*. v 24, n 3. Oct 1992, 617-637.

²⁹ Sachs 279.

recaudaciones impositivas cayeron de un 9% del PBI en 1981 a un 1,3% del PBI en 1985.³⁰ Esta abrupta caída en las recaudaciones hicieron que todo gasto fuera virtualmente imposible. Si bien el gobierno de Siles había entrado en cesación de pagos de la deuda, no pudo generar ganancias ni luchar contra la hiperinflación. La situación se volvió aún más explosiva dado que Siles había entrado al gobierno con una coalición de centroizquierda que favorecía los aumentos en el gasto social, y el empleo y los pagos al sector público. Después de once años de gobierno militar, las presiones y expectativas del nuevo gobierno democrático quizás excedieron su capacidad de concreción.

La naciente democracia boliviana se encontraba en serio peligro debido a la hiperinflación y al malestar social. Siles terminó su mandato prematuramente y se llamó a elecciones, las cuales fueron llevadas a cabo en 1985. Según la Constitución Boliviana, si ningún candidato recibe una mayoría de los votos, el Congreso debe elegir entre los dos candidatos más votados. Esta vez, Bánzer recibió una importante cantidad de papeletas a su favor, pero el segundo en la elección, Paz Estenssoro del MNR, formó una coalición con el que ocupaba el tercer lugar y fue elegido presidente por el Congreso. Más tarde, y para asegurar la aprobación de lo que serían las controvertidas reformas económicas más importantes de la historia de Bolivia, Paz Estenssoro buscó y recibió la participación de Bánzer en su coalición. Conocido como “democracia pactada”, este patrón incluía, en sus términos más básicos, la construcción de una coalición entre los principales partidos políticos para asegurar la gobernabilidad.

El tumulto social del período 1982-1985 creó un ambiente que exigía cambios drásticos. Paz Estenssoro asumió la presidencia el 6 de agosto de 1985, y hacia fines de ese mes ya había promulgado la Nueva Política Económica (NPE). Conocido en Bolivia como el Decreto 21.060, el gobierno de Paz Estenssoro trabajó en estrecha relación con las instituciones financieras internacionales en su diseño e implementación. Irónicamente, fue bajo el liderazgo de Paz

³⁰ Sachs 280.

Estenssoro que se construyó el modelo corporativo estatal de la Revolución de Abril; Paz Estenssoro era ahora el responsable de dismantelar la base de dicho modelo. El principal objetivo de la NPE era la estabilización económica y política. En 1985, Bolivia se convirtió en uno de los primeros países latinoamericanos en poner en práctica un “plan de ajuste estructural” ortodoxo, o “tratamiento de shock” para obtener estabilidad macroeconómica y reducir la hiperinflación. En ese entonces Bolivia representaba la vanguardia de Latinoamérica en términos de adopción de tratamientos de shock para estabilizar la economía.

Para lograr la estabilidad macroeconómica, la NPE constaba de las siguientes medidas: Una devaluación de la moneda con una flotación controlada de la tasa de cambio, una inmediata reducción del déficit fiscal aumentando los precios del sector público, congelamiento de los salarios del sector público, refuerzo del sistema impositivo para expandir su base y aumentar la recaudación, firma de un tratado con el FMI y una renegociación del calendario de deuda pública con los acreedores internacionales. A excepción de la falta de una tasa de cambio libre y del no pago de la deuda externa, Bolivia adoptó los principales elementos de un plan ortodoxo de estabilización. Sin embargo, dicha política “fue más allá de medidas macroeconómicas e incluyó reforma fiscal, liberalización del mercado, desregulación de los precios internos, y descentralización o privatización de las empresas públicas.”³¹ Bolivia, a quien se le había cortado el crédito y la cooperación internacional, súbitamente pasó a reunir los requisitos para obtener préstamos y asistencia financiera, y aún más, fue tomada como modelo de estabilización económica para los países en vías de desarrollo. El gobierno reprimió de manera activa la oposición de los sindicatos al plan, declarando la ley marcial tanto en 1985 y 1986 cuando los bloqueos que impedían a los trabajadores llegar a sus puestos desafiaron las políticas.

La NPE es a menudo mencionada como un éxito en la reducción de la hiperinflación. La inflación cayó de 11.748% en 1985 a 14% en 1987. Los salarios reales, que habían caído un

³¹ Sachs 281.

45,6% en 1985 y un 39,2% en 1986, comenzaron a subir, un 35% entre septiembre de 1986 y septiembre de 1987. El PBI que había disminuido en un promedio de -1,5% entre 1981 y 1986, creció un modesto 2,5% en 1987. De 1992 a 1996, la inflación en Bolivia era menor que el promedio de Latinoamérica, y su tasa de crecimiento económico era aún mayor que el promedio de la región.³²

El legado de la NPE aún provoca acalorados debates en Bolivia al día de hoy.³³ Por un lado, fue exitosa para detener la hiperinflación, pero tuvo grandes costos sociales. Uno de los más importantes fue el masivo aumento del desempleo, el subempleo, y la expansión de la economía informal. Al cerrarse la Comibol, miles de mineros quedaron sin trabajo. Entre 1985 y 1987, la Comibol pasó de emplear 30.000 personas a solo 7.000. El sindicato de mineros, que hasta entonces conformaba la fuerza más poderosa dentro de la COB, disminuyó drásticamente. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se convirtió en el sindicato más importante dentro de la COB, pero la base de poder de la principal organización de trabajadores del país se había debilitado enormemente.³⁴ Aún más, hacia fines de 1988, la tasa anual de aumento de precios había subido a más de un 20%. La caída en los precios del estaño y el gas natural, que en ese momento constituían cuatro quintas partes de las exportaciones del país, coincidió con la implementación de las medidas, llevando así a una aguda reducción de los ingresos del estado y a un agravamiento de las consecuencias sociales de la NPE.

El éxito económico del plan también comenzó a ser cuestionado. Un estudio realizado por Mann y Pastor sostiene “queda claro que la estabilización no ha generado una explosión

³² Drosdoff, Daniel. “Salto al Vacío: Estabilización y riesgo político en Bolivia.” *Archivos del Presente*. 3, n2. Apr-Jun 1998. 169.

³³ El artículo de Drosdoff, escrito en 1998, califica como un éxito al plan de estabilización de Bolivia, y al país como un modelo para los países en desarrollo. Hoy día, sigue siendo blanco de las críticas debido a los constantes niveles de pobreza, y a un crecimiento en la brecha entre ricos y pobres. Dichos debates serán tratados en el siguiente capítulo.

³⁴ Klein 245.

significativa en los beneficios ni en las inversiones.”³⁵ Según la teoría ortodoxa, la caída en los salarios reales es esperada después de la implementación de un plan de ajuste. Ese fue el caso de Bolivia. Sin embargo, dichas caídas deberían ser meramente temporales, y si bien la demanda aumenta, la economía debería expandirse a través de las exportaciones y las inversiones. A medida que se expande la economía, los salarios y el consumo interno deberían subir también. Pero ese no fue el caso de Bolivia. Mann y Pastor sostienen que no es probable que así suceda en el futuro cercano, “una tendencia que sugiere que hay un error de aplicación ya sea en la teoría o en la política boliviana.”

El caso de Bolivia parece demostrar que los objetivos del plan ortodoxo de estabilización y las políticas de renovación económica están en conflicto. Primero, la estabilización exige una tasa de cambio estable, mientras que la reactivación precisa que la moneda se devalúe. Segundo, las reducciones en los salarios, que pueden ser necesarias para hacer más competitivas las exportaciones, tienden a generar problemas sociales y políticos en un país donde los salarios ya son de por sí muy bajos. Además, la disciplina fiscal necesaria en el modelo ortodoxo provoca una caída en el gasto social. Esto no solo genera conflicto social y un aumento en la presión sobre la estructura política, sino que también limita la capacidad que el estado tiene de invertir en la infraestructura necesaria para una expansión de la economía. En un escenario perfecto, Mann y Pastor afirman que los requisitos de la estabilización deben cumplirse *antes* de la implementación de las políticas que apuntan al crecimiento. Sin embargo, parece que en el caso boliviano la debilidad de las estructuras políticas y sociales no ofrecen el tiempo óptimo necesario.

Las elecciones de 1985 también fueron significativas pues representaron una transición pacífica a un líder elegido democráticamente, un suceso muy poco común en la historia

³⁵ Mann, Arthur J. y Manuel Pastor Jr. “Orthodox and Heterodox Stabilization Policies in Bolivia and Peru: 1985-1988.” *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol 31, n 4, (Winter, 1989), 163-192. 177.

boliviana. Por otra parte, la coalición formada por Paz Estenssoro marcó un camino en la política boliviana - la democracia pactada – que fue seguida en las sucesivas elecciones presidenciales.

En un informe de la UNDP realizado por Fernando Calderón y Eduardo Gamarra, los mismos sostienen que la democracia pactada tiene cinco características principales:³⁶ Primero, asegura una distribución equitativa de los puestos gubernamentales entre los miembros del partido, alimentando así el sistema de clientelismo político reinante en Bolivia. Esta distribución es un beneficio tangible para los miembros de los partidos que conforman la coalición. Segundo, la toma de decisiones políticas quedaba concentrada en el ejecutivo, que tenía una orientación técnica. Los partidos del Congreso aprobaban las políticas diseñadas por esos tecnócratas. Esto aumentó la productividad del Congreso si se lo mide en términos de leyes promulgadas, pero el debate casi no existía. Tercero, se consolidaba el caudillismo partidario. La democracia pactada era el producto de los acuerdos entre los líderes más altos de cada partido. Si bien esto estabilizaba el sistema político, también provocaba agitación dentro de muchos partidos. Se hacía difícil reclutar nuevos líderes, y prácticamente no había rotación entre los líderes partidarios. Una cuarta característica era la rotación entre los tres partidos mayoritarios (MNR, MIR, ADN). Cada uno de ellos ostentaba el poder rotando de una elección a otra. Finalmente, la democracia pactada se basa en un consenso entre los partidos con respecto a las políticas a ser promovidas por el ejecutivo. Dichas políticas, promovidas por el Banco Mundial y el FMI, son llamadas con frecuencia el Consenso de Washington, y serán tratadas más adelante.

La democracia pactada también cuenta con varios logros, según Calderón y Gamarra. Primero, las coaliciones gobernantes tenían la suficiente flexibilidad para expandirse e incluir más miembros, ya sea para unirse en la oposición o para asegurar la gobernabilidad. Esto era posible gracias a la falta de una verdadera oposición que se opusiera a las premisas básicas del modelo político y económico. Segundo, los partidos de distintas coaliciones podían identificar

³⁶ Calderón, Fernando y Eduardo Gamarra. "Crisis, inflexión y reforma del sistema de partidos en Bolivia." UNDP. La Paz. Aug 2003.

los problemas y encararlos a través de reformas diseñadas para retener el poder de los partidos. Una vez que se formaba, la coalición premiaba a los participantes con puestos gubernamentales y ministeriales.

Luego del agitado escenario económico, político, y social de mediados de los '80, Jaime Paz Zamora del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o MIR, fue elegido en 1989. Si bien Zamora resultó en tercer lugar en la elección popular, fue seleccionado como presidente cuando su partido se alió con el de Bánzer. El gobierno de Paz Zamora continuó con el consenso político básico entre los partidos con respecto a la NPE. El crecimiento en el PBI era positivo, aunque debido a la alta tasa de crecimiento poblacional, el crecimiento del PBI per cápita seguía siendo negativo.³⁷ La desregulación y las reducciones en las tarifas abrieron las puertas a las inversiones extranjeras, especialmente en el sector de los hidrocarburos, asociándose con la compañía estatal de petróleo y gas natural YPFB, y con el sector minero.³⁸ Además, durante la administración de Paz Zamora, se vendieron alrededor de 780 unidades que eran propiedad del estado, principalmente pequeñas empresas.³⁹

La década de 1990

La década del '90 en Bolivia fue un período de constantes cambios y conflictos. En 1993, Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR sucedió a Paz Zamora. El ajuste estructural de los '80 continuó durante su gobierno con importantes reformas en el aparato estatal. Los últimos años de la década se vieron marcados por una crisis económica y política – como también por el surgimiento de movimientos políticos indígenas – que culminaron en varios casos notorios de tumulto social. Es importante tener en cuenta las tendencias políticas, económicas, y sociales,

³⁷ "Giving it away." *The Economist (US)*. 20 Oct 1990. v317 n7677. pg. 48.

³⁸ Hatfield, Laura Ziegler. "Bolivia's new legislation attracts foreign investment." *Business America*. 23 Mar 1992. v113 n6. pg 19.

³⁹ Grebe Lopez, Horst. "The Private Sector and Democratization." *Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience*. New York: Palgrave, 2001, 164.

especialmente del período 1998-2002, para entender el contexto de los casos estudiados en la presente investigación.

Una de las principales reformas de los '90 fue el sistema administrativo del país. En abril de 1994, el gobierno de Sánchez de Lozada promulgó la Ley de Participación Popular, y el año siguiente aprobó la Ley de Descentralización. Dichas leyes fueron creadas en un intento por consolidar la presencia del estado boliviano en la totalidad del territorio y modernizar el aparato administrativo estatal, dividiendo el territorio en municipalidades, provincias, y departamentos. Las leyes crearon 200 nuevas municipalidades y descentralizaron la autoridad gubernamental, transfiriendo más poder de toma de decisiones y aproximadamente un 20% de los recursos fiscales a esos nuevos entes administrativos. Para aumentar la presencia electoral, el número de funcionarios electos a nivel local pasó de 262 antes de las leyes a 2.900 después de su sanción. Las mismas establecieron procedimientos para reconocer las organizaciones territoriales de base, que fueron diseñadas para aumentar la representación y la participación de sectores hasta ese entonces excluidos de la toma de decisiones, principalmente en zonas rurales. Éstas organizaciones podían entonces participar en el diseño de planes operativos con los funcionarios municipales, y tenían opinión sobre el gobierno local.⁴⁰ En las elecciones municipales de 1995, dos de cada cinco gobiernos locales eligieron candidatos de los partidos de oposición, con un avance político significativo de los partidos que representaban a los sindicatos de cocaleros y también a las organizaciones laborales quechuas y aymaras. Además, los miembros de los consejos campesinos e indígenas ganaron dos tercios de los escaños disponibles en los gobiernos municipales.⁴¹

Esta reforma ha provocado controversias. George Gray-Molina concluye que la reforma “claramente ha resultado en aumento de la representación política de indígenas y campesinos en

⁴⁰ Banco Mundial. “Staff Appraisal Report, Bolivia, Rural Water and Sanitation Project.” 15 Dec 1995; también se encuentra una discusión de las reformas en Klein 261-62, y Calderón y Laserna 1994.

⁴¹ Gray-Molina, George. “Exclusion, Participation and Democratic State-building.” *Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience*. New York: Palgrave, 2001, 63-82.

la política local, una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, y una significativa redistribución urbana-rural de los recursos fiscales.”⁴² Sin embargo, las reformas no lograron mejorar el acceso a los servicios sociales, mercados económicos, e infraestructura productiva. Gray-Molina también reconoce que dado que las reformas aumentaron la representación y la participación en la toma pública de decisiones, también han hecho crecer la institucionalización de la práctica democrática local y han reducido el poder de los canales clientelistas de intermediación. No obstante, las reformas poco han hecho para reformar a los partidos políticos en sí, que siguen haciendo uso del clientelismo para obtener favores políticos.

Una interpretación más crítica de la Ley de Participación Popular res la de Álvaro García Linera y Raquel Gutiérrez, quienes afirman que era una ley claramente anti-indígena. La misma representaba un intento de hacer invisibles y disolver las prácticas políticas y de gestión pública de las comunidades pequeñas e indígenas que hasta ese entonces habían estado marginadas del estado liberal.⁴³ En primer lugar, la ley dividió asociaciones y grupos comunitarios ya existentes e impuso reformas de control y gestión favorecidas por tecnócratas y administradores públicos y privados. Segundo, impuso la afiliación a partidos políticos como la única forma legal y reconocida de participación política, y los partidos podían, a través del clientelismo, controlar la vida política de las comunidades.

Quizás la más importante de las reformas llevadas a cabo durante la mandato de Sánchez de Lozada de 1993 a 1997 fue la “capitalización” de las principales industrias estatales. Los ferrocarriles nacionales (ENFE), las telecomunicaciones (ENTEL), la línea aérea (LAB), la electricidad (ENDE), y el gas natural y el petróleo (YPFB) fueron “capitalizados.” El control del management y hasta un 50% de la propiedad de cada compañía fueron vendidos a inversores extranjeros. A diferencia de los programas tradicionales de privatización, en los que las

⁴² Ibid.

⁴³ García, Álvaro y Raquel Gutiérrez. “El ciclo estatal neoliberal y sus crisis.” *Democratizaciones plebeyas*. La Paz: Muela del Diablo, 2002, 11-24.

compañías son vendidas para generar ingresos y financiar así el gasto, los inversores no compraron los activos existentes de las compañías, sino que hicieron nuevas inversiones para aumentar la equidad. El proceso de capitalización le dio a Bolivia promesas de USD 1.670 millones en inversiones. El 50% que retenía el gobierno boliviano fue invertido en fondos de pensiones, también controlados por compañías extranjeras.⁴⁴ El mismo le paga una pensión a los bolivianos al llegar a los 65 años de edad. Este elemento fue blanco de fuertes críticas sobre su función redistribuida, considerando que en 1995, el promedio de expectativa de vida en Bolivia era de 63,31 años mientras que hoy apenas llega a 63,7.⁴⁵ Cabe agregar también que en el período 1993-1997, 36 compañías estatales fueron privatizadas completamente, generando un total de USD 76 millones.

Al igual que muchos países en vías de desarrollo con grandes deudas, Bolivia ha sido objeto de las iniciativas del Banco Mundial y el FMI. Desde la implementación del plan de estabilización, el gobierno ha trabajado en estrecha colaboración con los funcionarios de las instituciones financieras internacionales para recibir préstamos y apoyo financiero para proyectos y ajustes estructurales. Debido en parte a las reformas realizadas en la década del '90, Bolivia también ha reunido los requisitos para acceder a programas especiales de reducción de deuda bajo la iniciativa conocida como Países Pobres Altamente Endeudados, o HIPC, según sus siglas en inglés. Aquellos países con altos niveles de deuda y que cumplan ciertos criterios a la vez que demuestren un compromiso con las reformas propuestas por el FMI y el Banco Mundial pueden acceder al programa. El FMI alabó el compromiso de Bolivia por la reforma estructural, por ejemplo “el proceso de privatización, la profundización de los mercados de capital interno, y la flexibilización de los mercados laborales”, como también los intentos por mejorar la educación,

⁴⁴ Banco Mundial. “Memorandum of the President of the International Development Association and the International Finance Corporation to the Executive Directors on a Country Assistance Strategy of the World Bank Group for the Republic of Bolivia.” 21 May 1998. Annex E, pg. 2.

⁴⁵ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Human Development Report 2004.”

la salud, y la descentralización fiscal.⁴⁶ En 1998, Bolivia se convirtió en el primer país latinoamericano y el segundo en el mundo en recibir ayuda de dicha iniciativa, recibiendo USD 760 millones de ayuda nominal.

De manera conjunta con dichas reformas, a fines de los '80 y '90, comenzó a formarse un nuevo fenómeno social, económico y político en el centro de Bolivia. Una consecuencia importante de la NPE fue el crecimiento de las migraciones internas. Al haber sido despedidos de sus puestos como mineros y con pocas oportunidades económicas en la zona occidental del país, muchos nuevos desempleados migraron hacia el este a la zona tropical del Departamento de Cochabamba, el Chapare. Al llegar, adoptaron la actividad más lucrativa en la región: El cultivo de hojas de coca. La coca es una planta con una historia anterior incluso al tiempo de los incas, y cuyo uso tradicional nada tiene que ver con la producción de cocaína. Sin embargo, los precios mundiales de la cocaína aumentaban y había una gran demanda de la materia prima utilizada en su producción. La explosión en la producción de coca en Bolivia tuvo un profundo impacto en el país tanto económica como políticamente cuando los EE.UU. declararon su guerra contra las drogas. Un elemento central de esta guerra fue y sigue siendo la reducción del suministro a través de la erradicación de la materia prima, y ofreciendo ayuda para desarrollos alternativos y construcción de instituciones en los países productores de droga. Bolivia fue un blanco importante de estas iniciativas.

La erradicación forzada, particularmente, fue costosa. Casi no había oportunidades económicas alternativas tan rentables como la coca en el Chapare para aquellos mineros y sus familias que habían viajado hasta allí para establecerse. Los programas de desarrollo alternativo que ofrecían pagos en efectivo a los agricultores que abandonaran las plantaciones de coca tuvieron poco éxito. A mediados de los '90, los EE.UU. financiaron y entrenaron a las fuerzas militares para comenzar a erradicar por la fuerza las plantaciones de coca, dando como resultado

⁴⁶ FMI. "Bolivia to Receive \$760 Million in Debt Relief." Anuncio de prensa 48/98, 4 oct 1998.

una destrucción, resentimiento, y resistencia generalizada. En las elecciones de 1997, el otrora dictador Hugo Bánzer regresó a la presidencia, esta vez como líder elegido democráticamente. La administración de Bánzer se caracterizó por una era de cooperación sin precedentes con Washington en lo concerniente a la guerra contra las drogas. Con la ayuda de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL), el gobierno de Bánzer permitió la erradicación de la coca, conocida como "Plan de Dignidad." En 1990, la coca del Chapare era la principal fuente de coca para la cocaína del mercado estadounidense. En diciembre de 2000, Bánzer proclamó la victoria en la lucha por erradicar la producción de coca en el Chapare, afirmando que desde 1998 habían sido erradicadas 40.000 hectáreas.⁴⁷ Si bien el plan fue exitoso en la reducción del número de hectáreas cultivadas, esta política trajo consigo serios costos sociales que contribuyeron a la crisis política y el malestar social.

Los ex mineros y otros migrantes se organizaron fuertemente y se resistieron a la erradicación forzada. El sindicato de cocaleros formó su propio partido político, el Movimiento al Socialismo, o MAS. Sobre la base de una plataforma socialista, el MAS representaba originalmente los intereses de los cocaleros. Si bien el partido comenzó como un movimiento político regional que hacía hincapié en la resistencia a la erradicación financiada por los EE.UU., llegó a ocupar un puesto importante en la escena nacional. Un sindicalista llamado Evo Morales es el líder del partido. Morales, de extracción aymara, representa hoy la izquierda boliviana. Su nombre es sinónimo a nivel internacional del movimiento latinoamericano antiglobalización, ya que ha desafiado de manera consistente las políticas de los gobiernos nacionales pro-neoliberales. Él es una de las pocas figuras nacionales con identidad indígena, y si bien su partido no se orienta expresamente hacia una identidad indígena en particular, muchas de las plataformas del MAS coinciden con las demandas de diversos movimientos indígenas.

⁴⁷ "Coca's second front." *The Economist*. 4 ene 2001; ver también "International Narcotics Control Strategy Report." Mar 2004. <http://www.state.gov/g/inl/rls/nrcrpt/2003/vol1/html/29832.htm>.

La plataforma del MAS contiene diferentes políticas asociadas con el populismo y el socialismo de izquierda y con una identidad mestiza, entre ellas la emancipación de los trabajadores, la lucha de las clases, y la resistencia a la globalización, el imperialismo, el capitalismo, y las reformas neoliberales. Según los observadores, la postura más importante del MAS es su constante oposición a lo que se percibe como una interferencia de los EE.UU. en los asuntos nacionales, mientras que otros partidos han sido condescendientes. Si bien la interferencia que generó el movimiento fue la política de erradicación, esta resistencia se ha generalizado e incluye ahora a la privatización, los tratados de libre comercio, y toda política que sea vista como una imposición de los EE.UU. Durante la década de los '90, los partidarios del MAS se encontraban principalmente en las regiones de cultivo de coca, pero su influencia comenzó a extenderse a otras partes del país.

El final de la década de los '90 y el comienzo del siglo XXI fueron momentos de un crecimiento en la inestabilidad social. La implementación de la erradicación forzada llevó a que aumentara la resistencia y la actividad social, especialmente en aquellos sectores rurales. En parte como causa y consecuencia del turbulento panorama social, que comenzó en 1998, Bolivia entró en una crisis económica. Es importante tener en cuenta las tendencias económicas y sociales del período 1998-2002 para así entender el contexto de los casos estudiados en esta investigación. La tasa de crecimiento económico del 4,5% de 1993 a 1998 tan aplaudida luego de la implementación del plan de ajuste estructural comenzó a dar señales de debilidad; en 1998, la tasa de crecimiento fue de menos del 1%. Los deteriorados términos comerciales que resultaron de una caída en los volúmenes de producción y en los precios internacionales de las principales exportaciones comenzaron a presionar el balance fiscal y el también el balance contable actual. Para el año 2002, el déficit fiscal llegaba a un 8,9% del PBI, y el gobierno comenzó a depender

cada vez más de la financiación externa.⁴⁸ El crecimiento económico per capita era negativo, y la economía comenzó a estancarse debido a un deterioro de la balanza comercial de las principales exportaciones bolivianas.

Un informe conjunto del FMI y el Banco Mundial da cuenta que el financiamiento externo en términos del PBI cayó un 40% en el período 1998-2002, y cita una “serie de factores internos, como el programa de erradicación de la coca, la incertidumbre en las elecciones presidenciales, y rebrotes de alteraciones sociales, como impactos adversos en la economía. Dichos impactos dieron como resultados obstáculos en la producción, desbalances fiscales, problemas del sector financiero, fugas de capital, y desaceleración del crecimiento.”⁴⁹ Debido al éxito en la erradicación de la coca, la economía de la coca cayó de un 2,8% del PBI en 1997 a solo un 1% en 2000. Algunos analistas le atribuyen otros problemas a la crisis económica a la pobre gestión de Bánzer, cuyo mandato estuvo signado por la corrupción y el nepotismo. Las inversiones en el sector petrolero y gasífero cayeron de USD 680 millones en 1998 a USD 160 millones en 2003.⁵⁰ El desempleo oficial pasó de 5% en 1998 a un 8,3% en 2001, mientras que el empleo informal en 2003 ascendía a un 69%.⁵¹

En su análisis del período 1998-2002, Macías y Matus del Instituto Internacional de Gobernabilidad (IIG) afirman que la recesión que comenzó en 1998 demostró la vulnerabilidad de la economía boliviana, caracterizada por muy pocas reservas internas y una gran dependencia de la financiación externa. Además, Bolivia junto con una débil capacidad de exportación, se caracterizó por bajos niveles de productividad y competitividad, concentrada en ciertos recursos naturales (minerales y gas natural) y productos primarios (soja), con muy poco valor agregado y precios volátiles. En este período, el déficit fiscal rondó un promedio de 5,5%, en parte como

⁴⁸ Macías, Iñigo y Mario Matus. “¿Economía de mercado sin mercado?: Gobernabilidad política de las reformas económicas.” *Bolivia: El desarrollo posible, las instituciones necesarias*. Instituto Internacional de Gobernabilidad. Barcelona. 488. (nov 2003).

⁴⁹ FMI y Banco Mundial. “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative – Statistical Update.” 31 Mar 2001

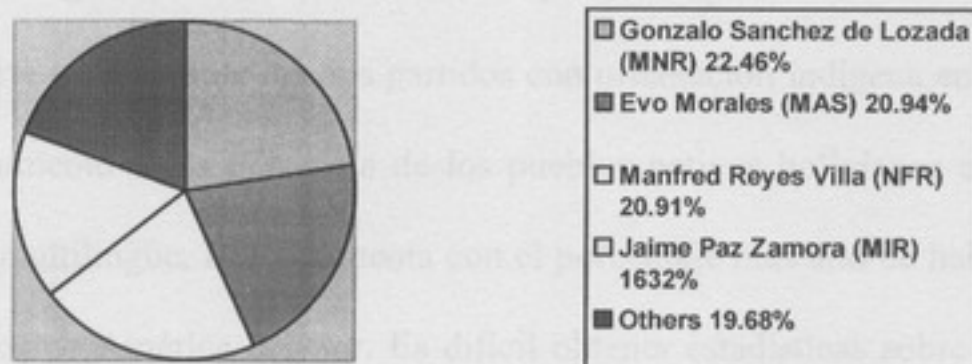
⁵⁰ Forero, Juan. “Losing Energy and Investors.” *The New York Times*. 29 Jul 2004. pW1

⁵¹ Sida 19.

resultado de la caída en los ingresos de una economía decreciente, y de la contracción de la economía mundial. Por el lado de los gastos, las reformas del sistema de pensiones no hicieron más que aumentar el gasto. Los salarios de los empleados públicos aumentaron un 30% en este período, en respuesta a las presiones de los policías, docentes, y trabajadores de la salud.

A principios de 2000, tuvo lugar la guerra del agua – que será examinada en detalle en la siguiente sección. El régimen de Bánzer fue considerado como corrupto, y los sucesos de la guerra del agua tuvieron forma de una crisis muy visible que dañó la imagen del gobierno. A Bánzer le diagnosticaron cáncer y renunció antes de terminar su mandato, poco antes de que terminara la guerra del agua en abril de 2000. El vicepresidente Jorge “Tuto” Quiroga asumió al puesto hasta las elecciones de 2002. Los resultados fueron significativos por diversas razones. Principalmente, hubo un virtual empate entre los cuatro candidatos más votados:

Gráfico 2.1 Resultados Elecciones Nacionales, 2002



Fuente: Corte Nacional Electoral de Bolivia

En la consiguiente maniobra política, se formó una coalición para asegurar que el Congreso eligiera a Sánchez de Lozada para otro período. Para elegirlo, el MNR se alió con el su histórico rival, el MIR, que había obtenido el cuarto lugar, a pesar de que su candidato, el ex-presidente Jaime Paz Zamora, había librado una campaña muy fuerte contra Sánchez de Lozada.⁵²

⁵² de la Fuente, Manuel. “Del reino del neoliberalismo a la insurgencia de los indígenas y campesinos: La posibilidad de construir una nueva Bolivia.” *Observatorio Social de Latinoamérica*. CLASCO, N 8 sep 2002. 85.

Estas elecciones marcaron un punto de inflexión con respecto a las anteriores. En cada elección presidencial desde 1985, los partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN y otros partidos menores) habían obtenido un promedio del 74,6% de los votos emitidos.⁵³ En cambio, en las elecciones de 2002 estos partidos habían obtenido solo un 47,7% de los votos. Los comicios también se vieron signados por un crecimiento del MAS como partido nacional. Hasta entonces, sus simpatizantes se encontraban concentrados en las regiones cocaleras, pero ahora el partido de Evo Morales estuvo a solo un 1,5% de ganar la presidencia. El MAS también obtuvo el segundo lugar en representación en el Congreso, con 27 diputados de un total de 130 y siete senadores de un total de 27, pasando así a ocupar el lugar de partido de oposición. Además del asombroso desempeño del MAS, el MIP (Movimiento Indígena Pachakutik, el movimiento nacionalista indígena), liderado por Felipe Quispe, obtuvo un 6,09% de los votos. A pesar de la fuerte presencia de los partidos indígenas en las elecciones de 2002, no formaron parte de la coalición gobernante, que siguió estando en manos de los partidos tradicionales.

La fuerte presencia de los dos partidos con orientación indígena en 2002 es un indicador del reciente aumento en la presencia de los pueblos nativos bolivianos en la escena nacional. Multiétnica y multilingüe, Bolivia cuenta con el porcentaje más alto de habitantes originarios de todos los países de América del Sur. Es difícil obtener estadísticas sobre esta cuestión dada la naturaleza subjetiva de la identidad. La raza es un tema complejo en Bolivia, ya que después de varios siglos, los términos raciales a menudo se utilizan para definir a las clases sociales más que para referirse a una identidad genética o fenotípica⁵⁴; por ejemplo, el término campesino se ha convertido en sinónimo de pueblos indígenas, “transformando así un concepto étnico en una ocupación o clase social.”⁵⁵ La jerarquía de estas identificaciones existe en Bolivia desde la colonización, y en cierta medida continúa hoy – aunque no legalmente. Los “*blancos*” son las

⁵³ Ibid 83.

⁵⁴ Klein xii

⁵⁵ Banco Mundial. “Bolivia Rural Water and Sanitation Project.” Staff Appraisal Report. 15 dic 1995. Pg.

élites, que hablan castellano, usan vestimenta occidental y comen alimentos no autóctonos. La clase media o la clase baja urbana son los *mestizos*, o *cholos*, que se visten a la usanza occidental y hablan castellano y a veces algún idioma nativo. Los habitantes de las zonas rurales pobres, que solo hablan su idioma nativo, se visten y comen de acuerdo a sus costumbres y son los *indios*, excluidos tradicionalmente del poder a menos que abandonen su identidad, su atuendo, sus costumbres, y se conviertan en cholos. Estas identidades se han mezclado con el pasar de los años, pero el legado de exclusión y jerarquía social continúa bien arraigado en la sociedad boliviana.

El Instituto Nacional de Estadística clasifica a la población según la autoidentificación con grupos indígenas. Según sus cifras, de la población boliviana mayor de 15 años de edad, un 31% son quechuas, 25,23% son aymaras, 6,10% pertenecen a otros grupos, y un 37,95% no se identifican con ningún grupo aborigen.⁵⁶ Si se sigue una clasificación etnolingüística de la población, un 73,69% habla castellano, un 25,67% habla el quechua, un 17,67%, el aymara, mientras que un 4,32% habla otro idioma.⁵⁷ Esto implica que una cuarta parte de la población no habla castellano. A pesar de su importante presencia en cifras, los pueblos originarios bolivianos son considerados verdaderos ciudadanos de segunda clase, ya sea por ley o por práctica social.

Si bien son numerosos, los movimientos sociales y políticos en Bolivia no se organizan tradicionalmente en torno a una identidad aborigen. Según Deborah Yashar, la tendencia general en Latinoamérica es que los movimientos indígenas del siglo XX se organizan en torno a los sindicatos, partidos políticos, la Iglesia, o una revolución, y sus identidades se basan en la clase, el carácter partidario, religioso, o los lazos revolucionarios. Los expertos señalan la “débil politización de los enclaves étnicos en Latinoamérica y concluyen que la etnicidad en

⁵⁶ “Bolivia: Autoidentificación con pueblos originarios o indígenas de la población de 15 años o más de edad según sexo, área geográfica y grupo de edad, Censo 2001.” Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/piwdielxx.exe/TIPO>. 10 agosto 2004.

⁵⁷ “Bolivia: Población de 6 años o más de edad por idioma o lengua que habla según sexo, área geográfica y grupo de edad, Censo 2001.” <http://www.ine.gov.bo/cgi-bin/piwdielxx.exe/TIPO>. 10 agosto 2004.

Latinoamérica ha tenido un impacto comparativamente menor en la organización política, las plataformas partidarias, los debates, y el conflicto, en un marcado contraste con otras regiones del mundo.”⁵⁸ Sin embargo, los recientes sucesos sugieren que en muchas partes de Latinoamérica, los pueblos indígenas se están organizando políticamente cada vez más con una identidad indígena explícita. Antes de los eventos de octubre de 2003, que, han sido por lejos la mayor expresión del poder de movilización del sector indígena, sucedió la Rebelión Aymara de septiembre de 2000. La misma tuvo lugar poco después de la guerra del agua ese mismo año, y logró paralizar el país, bloqueando las principales carreteras en La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz. Dichas protestas demostraron la capacidad que tienen los pueblos indígenas para movilizar adherentes como también el atractivo de una identidad aborigen.

A pesar de los sucesos de septiembre de 2000, surgió en Bolivia un movimiento indígena nacional no unificado. Las posiciones políticas del MIP se basan en lo que Quispe llama una “lucha entre pueblos” en la que la principal tarea es “re indianizar” a aquellos que no conservan su identidad indígena, y movilizar a la población aymara y quechua.⁵⁹ El MIP nació como un instrumento político-ideológico de las comunidades indígenas, con la meta de lograr que los pueblos indígenas se conviertan en un actor político con su propia estructura de movilización política. En lugar de una democracia representativa (que según Quispe, no representa a nadie), el MIP defiende la creación de un gobierno indígena, vinculado y dirigido por las comunidades indígenas, es decir, una forma de comunitarianismo democrático. En una entrevista de 2001, Quispe afirmaba que el MIP se mantendría alejado de la política electoral y operaría al margen del sistema; sin embargo, en las elecciones de 2002, como se mencionó anteriormente, el MIP presentó candidatos y el mismo Quispe obtuvo un escaño en el Congreso.

⁵⁸ Yashar, Deborah J. “Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America.” *Comparative Politics*, v 31, n 1 (Oct., 1998), 23-42.

⁵⁹ Quispe Huanca, Felipe. “Organización y proyecto político de la rebelión indígena aymara-quechua.” Entrevista de Patricia Costas, el al. *Tiempos de rebelión*. La Paz: Muela del Diablo, 2001, 163-189.

Paralelo al nuevo poder obtenido por los sectores indígenas, los primeros seis meses del gobierno de Sánchez de Lozada estuvieron marcados por la inestabilidad. Se repitieron los hechos de la década del '90, los enfrentamientos entre los cocaleros y las fuerzas de seguridad dejaron un saldo de varios campesinos muertos. Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, la Red de Información Andina, y la Asamblea Permanente Boliviana sobre los Derechos Humanos, expresaron su preocupación por la violencia, las muertes, y la impunidad de las fuerzas militares.

La crisis más severa del mandato de Sánchez de Lozada antes de octubre de 2003 fue el motín policial y la crisis de autoridad gubernamental del 12 y 13 de febrero de ese año. El déficit fiscal de Bolivia del año 2002 excedió el 7,5% que se había previsto y alcanzó un 8,9%. Las negociaciones entre el FMI y el gobierno boliviano terminaron con un acuerdo para reducir el déficit fiscal a un 5,5%. Esto se lograría gracias a un impuesto personal del 12,5% sobre el ingreso de todos los trabajadores asalariados.⁶⁰ La reacción a este *impuestazo* fue rápida. La COB anunció movilizaciones para obligar al Congreso a rescindir la ley que posibilitaba la aplicación de dicho impuesto. Sin embargo, las fuerzas policiales tomaron las medidas más drásticas, rebelándose contra el gobierno nacional. Otros manifestantes, enfurecidos por los ajustes económicos recomendados por el FMI, se unieron a los policías amotinados. Hubo escenas de violencia en las principales ciudades, pero el principal levantamiento se concentró en La Paz. Se convocaron a las tropas militares para controlar a la policía. Los manifestantes atacaron edificios del gobierno y empresas, y el Presidente se vio obligado a huir del Palacio Presidencial. El resultado fue 34 personas muertas en los enfrentamientos, y el gobierno rescindió la aplicación del impuesto. El nivel de descontento demostrado, y el rápido cambio de dirección del gobierno para apaciguar a los manifestantes opacaron los sucesos de octubre.

⁶⁰ "Todos pagarán por igual 12.5% de su salario." *La Razón*. 11 Feb 2003.

CAPÍTULO III: DEBATE POR LA POBREZA:

EL LEGADO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

Casi no caben dudas entre los observadores de que Bolivia se encuentra en una crisis económica y política desde 1998. Estas crisis están estrechamente relacionadas y en parte son la causa y el síntoma del problema más importante que existe hoy en Bolivia: La pobreza. Desde un punto de vista ético y funcional, la pobreza es el principal impedimento para el desarrollo humano. Bolivia es considerada prácticamente de manera universal como el país más pobre de Sudamérica, pero cuando se consideran las razones por las que Bolivia es tan pobre y qué debe hacerse para eliminar o reducir la pobreza, hay poco consenso entre el gobierno, los actores sociales, los actores externos, y los académicos. Hay una relación intrínseca entre este debate y las cuestiones de las reformas estructurales del estado boliviano de las décadas del '80 y '90. La manera en que dichas reformas han afectado la pobreza y los intentos para reducirla es un elemento clave del debate por la pobreza.

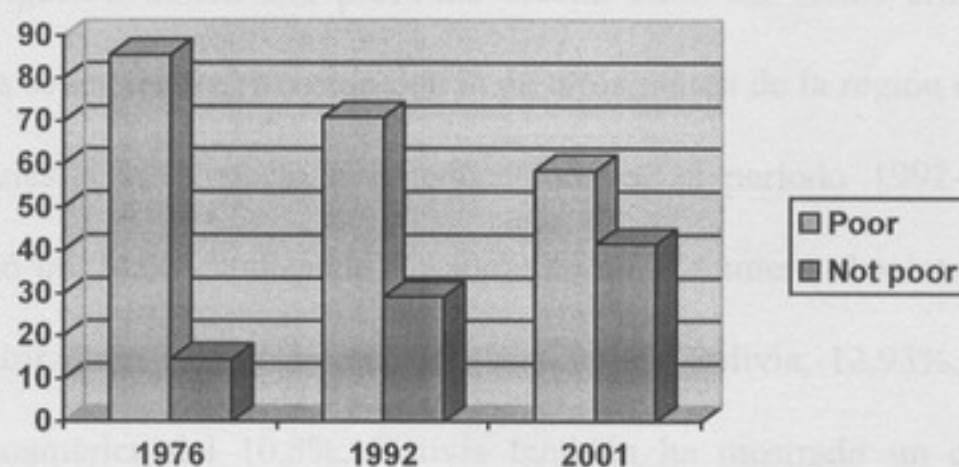
El malestar social de principios del siglo XXI ha puesto en primera línea a este debate. Dichas condiciones provocaron numerosas reflexiones e interpretaciones de los dos elementos centrales aquí analizados: La naturaleza de la pobreza en Bolivia y el legado de las reformas estructurales que comenzaron con la NPE y continuaron en los '90. Es importante analizar las distintas interpretaciones para así poner en contexto a las guerras del gas y el agua. Para ello, esta sección incluirá y estará organizada según las interpretaciones que se correspondan más adecuadamente con los actores involucrados en los casos: Aquellos a favor de las políticas en cuestión (el gobierno) y aquellos que se oponen (los sectores movilizadores). Se incluirá, además, un análisis de los distintos investigadores.

La pobreza en Bolivia

Antes de analizar el debate sobre la pobreza y las reformas estructurales en Bolivia, es necesario dar un vistazo a la información existente sobre la naturaleza de la pobreza de los

bolivianos, especialmente durante el período que comienza después de las reformas estructurales y que se extiende hasta el siglo XXI. Entre las perspectivas aquí analizadas, hay un mínimo de consenso en que las reformas no generaron el crecimiento económico necesario para reducir la pobreza de manera rápida. Al medir la pobreza, el Instituto Nacional de Estadística del gobierno boliviano informa la siguiente reducción en el número de pobres y el incremento en el número de personas no pobres según un porcentaje de la población total:

Gráfico 3.1 Distribución de la población según condición de pobreza, censos de 1976, 1992, y 2001



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

En esta tabla, la pobreza se define según indicadores sociales, no según los ingresos; se considera “pobre” a una persona que carece de una vivienda adecuada, carece total o parcialmente de acceso a agua potable y condiciones sanitarias, utiliza combustible inadecuado, tiene un bajo nivel de educación, y/o no tiene acceso a servicios de salud. En el último censo, un 58,6% de la población era pobre, lo que equivale a 4.695.464 personas. Si se lo toma como un porcentaje de la población, es una reducción. Sin embargo, dado que Bolivia tuvo una tasa anual de crecimiento demográfico de un 2,2% desde 1975 a 2002, no queda claro si la reducción en el porcentaje de pobres se tradujo realmente en una disminución significativa del número real de pobres. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de la UNDP de 2004, Bolivia se ubicaba en el puesto número 114 del Índice de Desarrollo Humano, el cual incluye diversos indicadores

sociales además de los ingresos. En el hemisferio occidental, solo Honduras, Guatemala, Nicaragua y Haití se encuentran por debajo.

El IIG ofrece un excelente análisis del carácter de la pobreza en Bolivia. En el documento “Los avances sociales no reducen la pobreza ni la desigualdad”, Iñigo Macías tiene en cuenta los avances y falencias de los intentos por reducir la pobreza en términos de ingreso y de indicadores sociales (educación y salud).⁶¹ Según Macías, Bolivia ha demostrado importantes avances en mejorar la educación y la salud, lo cual explica por qué el gráfico del Instituto Nacional de Estadística muestra una reducción de la pobreza medida según los indicadores sociales y no los ingresos. Su investigación indica una profunda brecha entre las zonas urbanas y rurales, y también que Bolivia se encuentra rezagada detrás de otros países de la región en lo que respecta a indicadores sociales. Con respecto a la educación, en el período 1992-2002, la tasa de alfabetización creció un 24,6%, indicando un aumento en el número absoluto de personas que pueden leer y escribir. Pero la tasa de analfabetización en Bolivia, 12,93%, es mayor que el promedio en Latinoamérica del 10,8%. Bolivia también ha mostrado un crecimiento en la cantidad de alumnos matriculados. Sin embargo, dichos avances educativos no se han trasladado al ámbito económico. Una posible explicación es la baja calidad de la educación: Un año adicional de escuela no garantiza un aumento en la productividad económica. Los indicadores en la salud también parecen mostrar cierto progreso: En los últimos diez años, aumentó la expectativa de vida, como también el porcentaje de personas con acceso a servicios básicos de salud (70 %) y agua potable (80 %). No obstante, es evidente que dichos avances no son suficientes para cubrir las necesidades de todos los bolivianos, y que el país sigue estando muy por detrás de sus pares en la región andina. Esta situación probablemente no cambie pronto, dado que Bolivia posee el menor gasto en salud per capita de la región (USD 52,80).

⁶¹ Macías, Iñigo. “Los avances sociales no reducen la pobreza ni la desigualdad.” *Bolivia: el desarrollo posible, las instituciones necesarias*. Instituto Internacional de Gobernabilidad. Barcelona, España. Nov 2003.

En relación a la pobreza en términos de ingresos, Macías sostiene que Bolivia ha fracasado en su lucha contra la pobreza. A pesar de los avances logrados desde 1976, en el período crítico de 1999-2000, el número de pobres en términos de porcentaje de la población y en números reales aumentó de un 61,6 % en 1999 (4,85 millones) a un 65,1 % en 2000 (5,25 millones) y cayó levemente en porcentaje (63,8 %) en 2001, pero aumentó en números reales, subiendo a 5,28 millones. Aquí podemos ver que la pobreza en términos de ingreso aumentó entre 1999 y 2001, a pesar de las mejoras en salud y educación.

Esta información destaca una importante dualidad relacionada con la pobreza en Bolivia: Si bien la mayoría de los bolivianos han mejorado en cierta medida su calidad de vida, el país no ha podido trasladar esos avances a un aumento en los ingresos. Hay dos razones principales para esta situación. Primero, la mayor parte de la población es joven; en 2001, el 58,63 % de la población estaba por debajo de los 25 años de edad. Una segunda razón es la cada vez mayor inequidad en la distribución de los recursos en lo que respecta a ingresos. Bolivia tiene uno de los niveles de desigualdad más altos de Latinoamérica, superando a Brasil, con un coeficiente Gini promedio de .609 en el período 1999-2001. Con niveles de desigualdad tan altos, es difícil que el crecimiento económico reduzca la pobreza pues los recursos generados tienden a concentrarse en manos de las clases más altas.

Hay tres maneras en las que la desigualdad en los ingresos afecta potencialmente al crecimiento económico. La primera es la relación entre los altos niveles de desigualdad/polarización económica e inestabilidad sociopolítica. La existencia de grupos sociales claramente diferenciados según los niveles de ingreso, con necesidades diferentes – y hasta cierto punto, opuestas – dificultan el consenso, llevando en muchos casos a una violencia social y fragilidad política. Esto puede dañar la credibilidad del país, según Macías, necesaria para atraer el capital extranjero que se precisa para aumentar las inversiones y el crecimiento. La segunda manera en que la desigualdad en los ingresos afecta el crecimiento es que lleva a un

mercado de capital fragmentado, en el que solo una pequeña porción de la población tiene acceso al crédito. Bajo estas circunstancias, la economía no puede alcanzar su potencial de crecimiento. La tercera situación es el efecto de distorsión que tiene la inequidad en la actividad económica. La desigualdad tiende a que se realicen demandas políticas para una redistribución de los ingresos, la cual debe financiarse a través de aumentos impositivos, que a su vez reducen las inversiones y limitan el crecimiento.

Macías concluye que las estructuras institucionales, sociales, económicas, y políticas existentes en el país son incapaces de convertir el crecimiento en capacidades básicas (salud y educación) en oportunidades de aumento de ingresos. Sin embargo, las reformas al sistema educativo y al mercado laboral no son la panacea. Bolivia necesita no solo un crecimiento económico más importante y sostenido, sino que los recursos y oportunidades generados por el crecimiento se traduzcan en mejoras para los sectores más pobres de la población. El crecimiento económico es necesario, pero no basta para mejorar las condiciones sociales en Bolivia. Macías sostiene que una estrategia nacional para reducir la pobreza requiere de un crecimiento económico sostenido y de políticas económicas que faciliten el acceso a los recursos a los sectores más desfavorecidos de la población.

Un país, diferentes interpretaciones

El problema de la pobreza en Bolivia es multifacético. A pesar de los aumentos en el acceso a la educación y las mejoras en los indicadores de salud, los bolivianos siguen sumidos en la pobreza. Esta sección examinará las distintas interpretaciones que los actores de las guerras tienen sobre el porqué Bolivia sigue pobre, y qué debe hacerse para reducir la pobreza. También examinará sus distintas interpretaciones sobre los efectos de las reformas estructurales de los '80 y '90. Dichas interpretaciones de la pobreza en Bolivia y el legado de ajustes estructurales brindan un ejemplo de los distintos puntos de vista que tienen los principales actores de las

guerra del gas y el agua. Se presentan a continuación tres opiniones centrales: Las del gobierno boliviano, las de los sectores movilizados, y las de los académicos que han estudiado el tema.

El gobierno boliviano

Las posiciones oficiales de los promotores de las reformas estructurales no interpretan las estadísticas sobre la pobreza como un fracaso del modelo, sino como un fracaso de Bolivia a la hora de cumplir las condiciones necesarias para que las políticas funcionen correctamente. Quienes las proponen reconocen algunas de las falencias de las políticas; sin embargo, no cuestionan las premisas básicas del modelo neoliberal.

La posición oficial del gobierno de Bolivia para el presente estudio es la expresada en el Informe sobre la Estrategia de Reducción de la Pobreza en Bolivia, o BPRS según sus siglas en inglés, de 2001. Dicho informe, según el FMI, “describe los programas y políticas macroeconómicas, estructurales, y sociales del país... para promover un crecimiento amplio y reducir la pobreza, como también las necesidades financieras externas asociadas y las fuentes importantes de financiamiento.”⁶² Las mismas son preparadas por el país “a través de un proceso participativo que involucra intereses locales como también a los socios externos de desarrollo, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.”

El BPRS admite que “18 años de democracia y 15 años de ajustes estructurales han establecido los cimientos para la estabilidad económica, pero no han allanado el camino para la eliminación de la exclusión social, ni tampoco se ha logrado un progreso satisfactorio en la lucha contra la pobreza.”⁶³ El crecimiento desde fines de la década del '80 no cambió la dependencia que Bolivia tiene de los recursos naturales, no mejoró la competitividad, ni tampoco provocó un impacto en la diversificación de las exportaciones. El documento confirma los hallazgos de Macías acerca de que las políticas sociales de los '90 promovieron mejoras en la educación y la

⁶² Fondo Monetario Internacional. “Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP).” <http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.asp>.

⁶³ Gobierno de Bolivia. “Bolivia Poverty Reduction Strategy Paper.” La Paz, mar 2001.

salud, pero Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. La descentralización y la Ley de Participación Popular, sostiene el informe, ayudaron a redistribuir los fondos a las áreas más pobres y establecieron mecanismos de control social en el proceso político. Si bien el gasto social aumentó en el período 1995-1999, de un 12,3 % a un 16,5 % del PBI, sigue estando por debajo del promedio latinoamericano. El BPRS le atribuye este hecho a una recaudación impositiva insuficiente y a un gasto cada vez mayor.

El documento identifica tres factores determinantes principales de la pobreza en Bolivia. En las zonas urbanas, hay problemas de empleo y de bajo capital humano por parte de los trabajadores. En segundo lugar, en las zonas rurales, la pobreza se atribuye a una baja productividad del sector agrícola y a los bajos precios de los productos agrícolas en el mercado. Además, hay comunidades indígenas en las llanuras que aún dependen de una economía de subsistencia. El tercer factor determinante de la pobreza es una falta de infraestructura vial, que encarece enormemente los costos de transporte, no solo de los productos agrícolas, sino también de los costos de transacción en las redes comerciales.

El objetivo del BPRS es “reducir la pobreza por medio de políticas económicas y sociales” y consiste de cuatro componentes principales: Expansión del empleo y oportunidades de ingresos para los pobres, desarrollo de las capacidades productivas de los pobres, aumento de la seguridad y la protección para los pobres, y un aumento de la participación y la integración social. En lugar de examinar en detalle las propuestas de reducción de la pobreza del BPRS, quizás es más revelador analizar la sección titulada “Contexto macroeconómico del BPRS.” Dicha sección delinea las premisas y suposiciones básicas de la propuesta, y revela las interpretaciones que el gobierno tiene sobre la pobreza y las reformas estructurales. La primera premisa es que el BPRS opera “en el marco de una economía de mercado y debe procurar mantener el equilibrio macroeconómico”, es decir, que las medidas recomendadas en el BPRS no deben socavar las políticas fiscales, monetarias, comerciales, o financieras del programa

económico de Bolivia. El BPRS depende de la continuidad de las políticas económicas y la preservación de “un entorno macroeconómico que conduzca a actividades de producción.” También buscará “intentar fortalecer reformas estructurales que no afecten el crecimiento, y se seguirán implementando las inversiones.” Increíblemente, el éxito del programa gira en torno a un “crecimiento económico sustentable de entre el 5% y el 15% a lo largo de los próximos 15 años.” Esta tasa de crecimiento, afirma el documento, logrará una reducción del índice de pobreza en término de habitantes en un promedio de 1,45% anual, y una disminución anual de la pobreza extrema de un 1,26%.

La inversión privada y la cooperación internacional son elementos cruciales del BPRS. Con respecto a las políticas fiscales, “el déficit será sostenible en tanto y en cuanto esté financiado por fuentes no inflacionarias, y se reduzca el crédito interno del Banco Central y se logre una reducción gradual del sector privado de tal manera que, en el último caso, el gasto público no supere al gasto privado.” Además, el BPRS agrega que “la sustentabilidad del equilibrio en los pagos se predica sobre la base de un crecimiento sostenido en las exportaciones, inversiones directas (principalmente en los sectores mineros y gasífero-petroleros, que financiarán una gran parte de las importaciones), y préstamos del sector público a tasas y vencimientos acordes con la capacidad de generar recursos para cubrir el costo de la deuda.” En la sección titulada “Cooperación Internacional en el Contexto del BPRS”, el gobierno reconoce su dependencia de la cooperación internacional y la importancia de extender su acceso a fuentes externas de financiamiento. La estrategia requiere que Bolivia negocie con los organismos financieros multilaterales y con los socios internacionales de cooperación para evitar la pérdida del acceso al financiamiento.

La pobreza, según la evaluación del gobierno, parece ser entendida como un problema práctico, un problema que crea baja productividad e impide el crecimiento económico. En resumen, el BPRS no cuestiona el modelo sobre el cual se basan las reformas estructurales; de

hecho, sostiene que deben fortalecerse dichas reformas. Los indicadores macroeconómicos son de suma importancia, lo cual no ha de sorprender dada la alta deuda de Bolivia y su elegibilidad para el HIPC. El crecimiento económico a través de políticas que no afecten al mercado sigue siendo esencial para reducir la pobreza, a pesar del hecho que ha sido insuficiente y que las tasas de crecimiento necesarias solo han sido posibles en el más optimista de los escenarios. La inversión extranjera directa sigue siendo deseable y necesaria, al igual que el acceso continuo al crédito, a pesar de la pesada deuda boliviana. Para atraer el capital extranjero necesario y reunir los requisitos necesarios para obtener créditos, Bolivia debe demostrar ser creíble y una inversión estable a la vez que debe cumplir con sus obligaciones de deuda.

Los sectores movilizados

Los puntos de vista de los autores que representan con mayor fidelidad a los sectores movilizados tanto en la guerra del gas como la del agua se pueden caracterizar por un rechazo al modelo neoliberal impuesto por las reformas estructurales ya que el mismo fracasó a la hora de reducir la pobreza y la continua dependencia del país de los créditos externos. La NPE y las privatizaciones de las principales industrias estatales en la década del '90 no lograron alentar un crecimiento lo suficientemente alto como para aliviar los altos niveles de pobreza existentes en Bolivia. Por lo tanto, hay un extendido rechazo a las políticas neoliberales, el reconocimiento de la crisis del viejo orden político y económico, y la bienvenida a un nuevo modelo económico y toma de decisiones políticas. En este punto de vista, existe un fuerte lazo entre las políticas económicas y el orden político; de allí que ambas son rechazadas. El punto de vista que representan los sectores movilizados no solo llama a una reversión de las reformas estructurales, sino también a una renovación completa del aparato estatal.

Álvaro García Linera, destacado intelectual boliviano y aliado de movimientos sociales, escribe que si bien la meta explícita de las reformas neoliberales fue “modernizar” el país, en realidad Bolivia es un país menos moderno de lo que era hace 20 años. El número de

trabajadores asalariados pasó de 73.000 a 64.000; el número de hogares que apenas subsisten pasó de 43.000 a 447.000. Al citar el aumento en la actividad de la economía informal, García Linera sostiene que en este período de 20 años, el número de personas que mantienen relaciones de mercado y contractuales cayó de un 40% a un 32% de la población urbana laboralmente activa. Solo un pequeño porcentaje de la población está vinculada al mercado, y la gran mayoría del país vive bajo estructuras económicas y culturales pre-industriales. Sin embargo, el país sigue dependiendo del financiamiento internacional, a pesar de que las exportaciones bolivianas apenas alcanzan un 0,7% del comercio mundial. En pocas palabras, los intentos de crear empleos, aumentar los ingresos, y entrar a la modernidad solo han causado una economía de estilo colonial, pérdida de miles de trabajos, un aumento en el precio de los servicios, un debilitamiento de los servicios, la bancarrota del comercio, y la pérdida de ingresos más severa en los últimos 100 años (de los más de USD 74.000 millones generados por la explotación del gas natural, solo un 18% fue de beneficio público).⁶⁴

Dada la crisis económica y política, los movimientos de oposición no solo proponen políticas diferentes, sino también una manera distinta de tomar decisiones. García Linera afirma que las propuestas populares están comenzando a erosionar el discurso dominante del libre mercado y la democracia liberal. Las nuevas propuestas incluyen “identidades indígenas con capacidad de autogobierno”; nuevas formas de participación democrática basadas en procesos deliberativos y corporativos; una asamblea constituyente para la transición de una democracia liberal a una democracia comunitaria; y una gestión social de los recursos públicos.

En su modelo de la sociedad boliviana, García Linera identifica cuatro tipos diferentes de civilizaciones existentes en la Bolivia moderna, cada una con distintas estructuras materiales, políticas, y simbólicas organizadas según distintos modos de producción y sistemas de autoridad. La primera es la civilización industrial moderna, de la cual participa un 20-30% de la población.

⁶⁴ García Linera 151. El autor no menciona la fuente de información.

La misma incluye la minería y la industria de manufacturas, bancos, grandes empresas, y el intercambio de bienes, servicios, y mano de obra basado en el mercado. La segunda civilización se organiza en torno a formas de producción domésticas, artesanas, o rurales; una gran parte de la economía informal corresponde a este grupo. Y la tercera es la civilización comunal, o comunidades en las que la política y la economía se fusionan, y que tienen su propio sistema de autoridad e instituciones políticas. La última civilización es la civilización amazónica, compuesta por distintos pueblos y lenguas, con diversas formas de gestión social y política, distintas de las tres civilizaciones mencionadas hasta el momento.

En total, dos tercios de los bolivianos pertenecen a estas tres civilizaciones mencionadas. Sin embargo, las normas, funciones, instituciones, y representaciones que constituyen el estado boliviano solo corresponden a la primera civilización, a esa parte de la sociedad orientada al mercado libre moderno. Mientras tanto, la mayor parte de la cultura popular no es industrial, y no comparte la identidad representada por las funciones del estado. La existencia de la República de Bolivia se ve, por lo tanto, amenazada constantemente, porque es incapaz de articular las diferentes fuerzas sociales que cohabitan su espacio geográfico. En ausencia de una fuerza unificadora, Bolivia continuamente experimenta guerras de mayor o menor intensidad, en las que los distintos actores luchan por obtener sus intereses.

Los académicos

Macías y Matus, en un informe del IIG, sostienen que la reciente crisis económica es el resultado del agotamiento del modelo de crecimiento económico aplicado en Bolivia.⁶⁵ Esto se da por diversas razones. Primero y principal, la inexistencia de un mercado interno en Bolivia es un obstáculo importante para el crecimiento. Esta carencia surge de una cultura de subsistencia agrícola, baja capacidad de producción, fragmentación territorial, y redes deficientes de comunicación y transporte. Además, la mayor parte de las transacciones no se dan en el mercado,

⁶⁵ Macías y Matus 481.

sino que se basan en formas ancestrales de reciprocidad, redistribución, y trueque. La distribución desigual de los ingresos y los altos niveles de pobreza también colaboran para derivar una gran parte de la demanda hacia el sector informal, que no está conectado con el resto de la economía. La clase alta está protegida por el estado y tiene capacidad de acumulación de riqueza sin necesidad de aumentar la productividad ni la competitividad, y por lo tanto no se ve incentivada a realizar inversiones productivas o a generar nuevas capacidades de exportación.

Macías y Matus afirman que la segunda razón por la que el modelo se acaba es la pobre gestión macroeconómica. Si bien entre 1993 y 1998 el crecimiento económico alcanzó el 4,5% anual, las reformas económicas tuvieron serias falencias que facilitaron la recesión que comenzó en 1998. Las reformas, según los autores, fueron excesivamente circunscriptas por el Consenso de Washington. La lista de políticas recomendadas da por sentados varios factores – como ser un aparato institucional favorable a las fuerzas del mercado y a la clase profesional – que simplemente no existía ni existe en Bolivia. Si bien las reformas estructurales eran bien intencionadas, se concentraban en la estabilización macroeconómica, sobreestimando los efectos transformadores de sus principales instrumentos políticos. Las reformas, a su vez, subestimaron las debilidades institucionales, entre ellas la ausencia de una clase empresaria con características capitalistas y la extrema debilidad del mercado interno.

Los autores concluyen que el principal problema es que ni las instituciones económicas formales ni las políticas ofrecen incentivos para fortalecer a los mercados reales, y en su lugar fortalecen y reproducen formas de organización económica que son la antítesis de una economía de mercado. Según sus recomendaciones, el gobierno debería: 1) Construir un mercado interno de tal manera que la población adquiera habilidades productivas y asociativas, que luego habrían de extenderse a los mercados externos; 2) Construir una nueva institución económica que active y formalice las fortalezas latentes del sector informal y lo incorpore al sector formal existente.

Ellos hacen hincapié en la necesidad de lograr “estabilidad y consenso” en el ámbito político para llevar a cabo dichas reformas, enfatizando la importancia de la “gobernabilidad” política.

Roberto Laserna, en su análisis de la economía boliviana, destaca la confusión que existe sobre cuál es el “modelo” exacto que existe en Bolivia, dado que es éste modelo el que muchos críticos consideran disfuncional.⁶⁶ Para muchos, este modelo se refiere a las reformas estructurales de los '80 y '90; para otros, es el sistema de pactos de coalición entre partidos políticos; otros críticos se refieren al modelo como el “modelo neoliberal.” Laserna, por otro lado, afirma que en Bolivia no existe un modelo económico estructuralmente heterogéneo. Él utiliza la palabra quechua *che'nko* (que significa “desorden”, o mezcla desordenada de objetos y procesos) para describir a este modelo, en el cual – similar al análisis de García Linera – existen simultáneamente distintas formas de producción, y que colocan distintos períodos de la historia unos sobre otros. Estas distintas formas y períodos históricos tienen distintos sistemas de valores y objetivos sociales. Según el autor, no todos los bolivianos valoran de la misma manera, por ejemplo, el tiempo libre o el trabajo, la amistad o el consumo, las vacaciones o la educación. Dichas diferencias muestran que esta heterogeneidad estructural es el carácter distintivo del modelo económico boliviano.

El *che'nko* que según Laserna reina en Bolivia tiene tres sistemas principales de producción. Primero se encuentra la economía natural de base, de la cual participa un 40% de la población. La mano de obra y la producción se organizan bajo el control y el acceso a los recursos naturales básicos como la tierra y el agua. Su núcleo central es la economía agrícola, con fuertes vínculos a las comunidades. Su principal objetivo es asegurar la renovación de la unidad económica, y toda la mano de obra disponible trabaja con ese fin. La reducción de riesgos es más importante que maximizar los beneficios, y la creencia general de organización es que la

⁶⁶ Laserna, Roberto. “Bolivia: La crisis de octubre y el fracaso del *ch'enko*. Una visión desde la economía política.” A publicarse en *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*, V 7, FLACSO Costa Rica. 24 Pgs.

riqueza se encuentra en la naturaleza, y no en el trabajo. Este sistema está estrechamente relacionado con la pobreza, dado que los granjeros propietarios de las tierras constituyen el grupo más pobre del país. La pobreza en este sistema se reduce a medida que mejoran las condiciones de producción, por ejemplo, aumentando el acceso a la tecnología y obteniendo una mayor orientación hacia una economía de mercado.

El segundo sistema de producción es la economía básica de mercado, de la cual participa un 25% de la población. Los recursos se distribuyen como una función de la capacidad individual de competir en el mercado. Este sistema se concentra en la producción de bienes y servicios y emplea a trabajadores asalariados que se organizan para maximizar las ganancias a través de la venta de bienes y servicios. Para mantener o aumentar las ganancias, la economía básica de mercado utiliza tecnología sofisticada y energía eléctrica o de petróleo. Este sistema de producción se ubica principalmente en las zonas urbanas, pero también puede encontrarse en sitios de extracción de recursos naturales o de agricultura a gran escala.

El tercer sistema es la economía básica familiar. En las zonas urbanas, se calcula que participa de este sistema un 36% de la población. Es el punto medio entre los dos sistemas anteriores, y comparte características de ambos. Es una economía fuertemente relacionada con el mercado, pero con una organización laboral basada en la unidad familiar. El objetivo económico sobre el cual se toman las decisiones no es maximizar los beneficios, sino aumentar los ingresos totales de la unidad. Su prioridad, al igual que la economía básica natural, es renovar la unidad económica, por lo que es muy importante la minimización del riesgo.

Luego de analizar cada sistema de producción, la investigación de Laserna concluye que cuanto mayor sea el acceso al mercado, y mayor la modernización organizacional y tecnológica, más altos serán los ingresos del grupo y menor será la incidencia de la pobreza en ese segmento.

Laserna afirma que el problema de la pobreza en Bolivia que debe ser explicado es por qué ha sido tan limitado el impacto de las inversiones en el crecimiento y en la reducción de la

pobreza. Hay quienes sostienen que es así porque las inversiones no han madurado, o que las inversiones han tenido poco impacto inmediato en la creación de puestos de trabajo debido a que se han concentrado en sectores con alta intensidad de capital. Por otro lado, Laserna sostiene que tener en cuenta la heterogeneidad estructural de la economía boliviana, con sus distintos modelos de producción, consumo, y trabajo, permite una mayor comprensión de por qué persisten la desigualdad y la pobreza y del fracaso de los intentos por promover el desarrollo. El problema de este modelo heterogéneo es que tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo, lo que dificulta la reducción de la pobreza, e inhibe la efectividad de las inversiones y del crecimiento en la producción. Por lo tanto, el autor concluye que el “modelo” que no funciona en Bolivia es la economía heterogénea. Es este *che'nko* de formas de producción, valores, y períodos históricos que conforma la base de la frustración y el conflicto social y que han puesto en riesgo la democracia boliviana.

Laserna, basado en su modelo de *che'nko* de la economía boliviana, sostiene que las reformas liberales intentaron encarar el problema de la heterogeneidad de la economía expandiendo la influencia del mercado. Dichas reformas hicieron posibles importantes avances en la reducción de la pobreza. Pero el proceso afectó seriamente a la economía familiar urbana, y para muchos, desaparecieron las oportunidades económicas. Esto explica la baja popularidad del modelo “neoliberal.”

Lo que Bolivia necesita, según Laserna, es una estrategia de desarrollo que permita un crecimiento económico (para aumentar así la disponibilidad de recursos y satisfacer las necesidades), movilidad social (libertad y reducción de la desigualdad), y renovación cultural (mantener una identidad cultural a pesar de y debido a los cambios inevitables). El desarrollo debe ser concebido como una expansión de la libertad en todo sentido. Está claro que el núcleo del crecimiento de Bolivia se encuentra en el sector más relacionado con la economía de mercado, en la que hay mayor productividad, mayor acceso a los avances tecnológicos, y

mayores salarios para los trabajadores. Para apoyar esa economía de mercado, son necesarias políticas específicas: Acceso a los créditos, mejor infraestructura para acceder a los mercados, y un fuerte apoyo tecnológico. El éxito de la economía básica de mercado es esencial, pues será la principal fuente de recursos fiscales a ser invertidos en la transformación de las economías básicas natural y familiar.

El debate sobre la pobreza y las reformas estructurales claramente genera una variedad de interpretaciones. Estas distintas interpretaciones son vitales a la hora de entender el contexto en el que tuvieron lugar las guerras del gas y el agua. Tal como demostrarán la siguiente descripción y análisis de los casos, el debate parece alimentar gran parte del discurso de los actores en el conflicto. A pesar del mínimo consenso que parece existir entre los actores - que la pobreza es el principal problema que enfrenta Bolivia - las distintas explicaciones de las razones y las interpretaciones de lo que se debe hacer alimentan el conflicto estructural que ya existe en toda relación de represión.

CAPÍTULO IV: LAS GUERRAS DEL GAS Y EL AGUA



La guerra del agua

El término “guerra del agua” se refiere al conflicto que tuvo lugar entre el gobierno de Bolivia y los sectores de la sociedad que se oponían a la privatización de los servicios municipales de agua en el valle de Cochabamba, Bolivia entre enero y abril de 2000. Normalmente se refiere de manera específica a las tres “batallas” de las calles de Cochabamba protagonizadas por los manifestantes y las fuerzas militares y policiales. Luego de varios meses de violencia y bloqueos, el gobierno cedió ante las demandas de los sectores movilizados y canceló el contrato de concesión y privatización del servicio de agua.

Desde luego que los antecedentes de la guerra se remontaban a mucho antes de su comienzo. La provisión de agua en el valle de Cochabamba era un problema, tanto en el uso rural como urbano. Ubicado en la zona central de Bolivia, a los pies de los Andes, el Departamento de Cochabamba es el tercero en población dentro del país y es reconocido por su variedad de productos, entre ellas las hojas de coca.⁶⁷ La ciudad de Cochabamba y sus poblaciones linderas se encuentra en el valle semi-árido de Cochabamba, el cual ha crecido rápidamente en población y urbanización en los últimos 20 años. La erradicación forzada de las plantaciones de coca en las zonas rurales del departamento ha llevado a que muchas personas

⁶⁷ La zona tropical del Departamento de Cochabamba, el Chapare, es reconocida como la principal región de cultivo de coca del país y blanco de los programas de erradicación de plantaciones de coca liderados por los Estados Unidos.

migren a la ciudad buscando trabajo, a medida que los agricultores iban perdiendo su sustento. Este crecimiento en la población comprometió el Servicio Municipal de Provisión de Agua (SEMAPA), por lo que el servicio de agua en Cochabamba comenzó a ser inadecuado, desigual, e ineficiente.⁶⁸ Los habitantes del área metropolitana de Cochabamba, alrededor de 778.000 en 1999, vieron disminuido el número de hogares con provisión de agua potable de un 70 a un 60 por ciento en el período 1990-1997. El informe Major Cities Water and Sewage Development Association Project, del Banco Mundial, (1990-1997) informó que en ese lapso, solo se lograron 47.520 de las 300.000 nuevas conexiones de agua que se pretendían, y la disponibilidad de agua permanecía en alrededor de 4 horas diarias.⁶⁹

Debido a la precariedad del servicio de agua, los cochabambinos venían exigiéndoles a los sucesivos gobiernos la ejecución del Proyecto Misicuni. El Misicuni se había convertido en una especie de mito en Cochabamba. Dicho proyecto sería la solución no solo a los problemas de suministro de agua en el valle, sino que también generaría energía hidroeléctrica. El Proyecto Misicuni consistía en la construcción de un dique de 115 metros y la canalización de un río a través de un túnel de 19 Km. a través de las montañas de Cochabamba. La inversión necesaria para la fase inicial del proyecto rondaba los USD 70 millones, más otros USD 200 millones para la distribución de agua potable. Se habían hecho promesas electorales, y muchas resoluciones habían sido aprobadas por el Congreso Nacional para llevar a cabo el Misicuni desde el regreso de Bolivia a la democracia en 1982. Los cochabambinos anhelaban que tanto los gobiernos local y nacional procuraran el financiamiento necesario para llevar a cabo el costoso proyecto de infraestructura. Sin embargo, hacia fines de los '90, no se había hecho progreso alguno para financiar o comenzar el Misicuni, y el servicio de agua distaba mucho de ser satisfactorio.

⁶⁸ García, Alberto O., Fernando García Y y Luz Quitón H. La "guerra del agua." Abril de 2000: la crisis de la política en Bolivia. La Paz: PIEB. 2003. Pg. 17.

⁶⁹ "Bolivian Water Management: A Tale of Three Cities." *Précis.* Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial. N 222, primavera 2002. 4 pgs

Mientras tanto, los cochabambinos tomaron otras medidas para asegurarse sus fuentes de agua. En las zonas urbanas, la estatal SEMAPA ofrecía un servicio de agua centralizado y poco confiable a los habitantes de la ciudad. En las afueras, algunas comunidades barriales tomaron las riendas y construyeron sus propios pozos, controlados por ellos mismos. Las comunidades se organizaron en comités o asociaciones para reunir los recursos necesarios y cavar pozos, controlar la calidad del agua, y administrar el servicio domiciliario.⁷⁰ Muchos de los cochabambinos más pobres dependían de camiones aguateros a los que les compraban agua a un precio muy alto. Carlos Crespo, autor de un detallado estudio sobre la provisión de agua en Cochabamba, calcula que de la población total de la ciudad de Cochabamba, un 57% recibía agua de la SEMAPA, un 15-20% de sistemas de provisión alternativa de agua (cooperativas o asociaciones barriales), y otro 15-20% de vendedores informales de agua (los aguateros).⁷¹

El control del agua ya era un tema bastante sensible mucho antes de la privatización del servicio en 1999. En 1992, la “guerra de los pozos” comenzó cuando la SEMAPA, buscando agua para abastecer a la ciudad, comenzó a realizar perforaciones en el valle. Los municipios de las zonas afectadas se unieron con las organizaciones sociales y tomaron acciones para detener las perforaciones y exigir la ejecución del Misicuni. En 1994, cuando la SEMAPA comenzó nuevamente a perforar, surgieron las protestas masivas en Cochabamba. Luego de una serie de negociaciones fracasadas, la SEMAPA pudo continuar perforando en abril de 1995, aprovechando la orden impuesta por la ley marcial que el presidente Sánchez de Lozada (quien se encontraba en su primer mandato de 1993-1997) había declarado debido a otras protestas.⁷² La guerra de los pozos continuó hasta 1998, cuando ante nuevas faltas de agua, la SEMAPA comenzó a perforar nuevamente. Se formó la Federación de Regantes del Departamento de Cochabamba, FEDECOR, para representar los intereses de los usuarios rurales del servicio de

⁷⁰ Gutiérrez Aguilar, Raquel. “La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. A un año de la guerra del agua.” *Tiempos de rebelión*. La Paz: Muela del Diablo. Pg. 193-209.

⁷¹ Crespo. A Chapter IV. CITATION!!!

⁷² García, García y Quitón 20.

agua. Esta vez la guerra culminó con un acuerdo entre la SEMAPA y los representantes de las partes afectadas, en el que se comprometía a abandonar las perforaciones para llevar a cabo proyectos de infraestructura.

Para obtener las inversiones privadas necesarias para llevar a cabo el Misicuni, el endeudado estado boliviano se vio obligado a ofrecerles un paquete atractivo a los potenciales inversores. El Banco Mundial tuvo un papel protagónico en este proceso ya que se oponía firmemente a los subsidios gubernamentales al servicio de agua, especialmente porque afectarían el presupuesto del país y su capacidad de cumplir con las obligaciones de la deuda. Si el servicio de agua era gratis o de bajo costo gracias a subsidios del estado, según la filosofía del BM, no habría incentivos para conservarlo. Además, según el modelo de “recuperación total del costo” propuesto por el Banco Mundial, los inversores privados necesitaban una garantía de recuperación de sus inversiones. Para un proyecto de la magnitud del Misicuni, los costos eran significativos, y la probabilidad de obtener pocas ganancias en proyectos de obra pública no lo hacían una inversión muy atractiva. El Informe de Gasto Público de 1999 publicado sobre Bolivia por el Banco Mundial sostiene que el servicio de agua en las grandes ciudades debe ser privatizado, y que “no deben otorgarse subsidios públicos para mejorar el aumento en las tarifas del agua en Cochabamba, las cuales deben reflejar el costo total de la provisión necesaria para la realización del proyecto Misicuni.”⁷³ La compañía que recibiría la concesión para el servicio de agua aumentaría las tarifas para así financiar el Misicuni.

Entre agosto y noviembre de 1998, el presidente Hugo Bánzer tuvo un buen desempeño en sus promesas de campaña cuando, a través de un decreto oficial, comenzó la licitación pública de la concesión de 40 años de la SEMAPA y la realización del Misicuni. Sin embargo, no se recibieron ofertas debido a la falta de interés de los inversores en un proyecto tan costoso. El proyecto fue modificado para darle prioridad a la rentable distribución de agua potable, y dejó en

⁷³ Banco Mundial. “Bolivia Public Expenditure Review.” 14 Jun 1999.

un segundo plano al agua para irrigación y generación de electricidad. Se extendió la fecha límite de presentación de ofertas, y para abril de 1999, se había recibido una oferta. La compañía se llamaba Aguas del Tunari, y se trataba de un consorcio internacional compuesto por compañías nacionales y extranjeras con la intención de ganar el contrato. El 55% del consorcio estaba controlado por International Water, del Reino Unido, y la estadounidense Bechtel, a su vez, controlaba el 50% de International Water. Bechtel sería más tarde la destinataria de gran parte de la ira internacional sobre lo sucedido en la guerra del agua. Otro 20% del consorcio estaba formado por capital internacional, y el 25% restante, por capital boliviano. Dado que no hubo otras ofertas, Aguas del Tunari ganó la licitación y avanzó a la etapa de negociación.⁷⁴

Las negociaciones entre el gobierno de Bolivia y Aguas del Tunari comenzaron en abril de 1999. Cuando las mismas concluyeron el 3 de septiembre de 1999, la comisión y la compañía firmaron el siguiente acuerdo: Una concesión de 40 años del servicio de agua potable y de riego en Cochabamba, dos contratos separados de 10 años para la concesión de la Compañía del Misicuni y la SEMAPA (Aguas del Tunari se haría cargo de las deudas de la SEMAPA), y un contrato de licencia para la generación de electricidad. El contrato principal era la concesión de 40 años de la provisión de agua potable y de riego. El mismo tenía tres responsabilidades y privilegios cruciales para Aguas del Tunari: 1) La construcción del proyecto Misicuni; 2) la provisión exclusiva de los servicios de agua y cloacas, incluyendo el control de las tarifas, la cobertura, expansión, y atención al cliente; y 3) el derecho exclusivo de provisión de agua de riego y de pozo y el cobro por la venta de la misma.⁷⁵

La medida final fue que el Congreso aprobó la Ley 2029 el 29 de octubre de 1999. La Ley de Servicios de Agua Potable y Cloacas determinaba que todos los recursos de agua estarían bajo el control de la compañía trasnacional que obtuvo la concesión. Además, la concesión le daba a la nueva proveedora el derecho de utilizar el agua definida como el “estado en el que se

⁷⁴ García, García y Quitón 34-36.

⁷⁵ García, García y Quitón 40.

da en la naturaleza.” La Ley 2029 recibió fuerte oposición por parte de un grupo que se convertiría más tarde en uno de los principales actores de la guerra del agua, la FEDECOR. La FEDECOR, al igual que las cooperativas y asociaciones barriales, estaba preocupada por el hecho de que la ley afecta sus “usos y costumbres”, o las iniciativas que ellos tenían para manejar el agua. Sin embargo, había mucha confusión y debate en torno a lo que hacía y no hacía la Ley 2029. Investigadores como Carlos Crespo han examinado las implicancias legales de la Ley, y nos extenderíamos demasiado si lo hiciéramos en el presente trabajo. Pero la FEDECOR veía a la concesión como parte de un proceso mayor de privatización del servicio de agua, y decidió actuar de manera preventiva exigiendo retener sus derechos de usos y costumbres.⁷⁶

Aguas del Tunari tomó el control de la SEMAPA oficialmente el 1 de noviembre de 1999. Para diciembre de ese año, muchos vecinos comenzaron a recibir sus facturas de agua. En algunos casos, los aumentos eran mucho mayores que el 35% anunciado por la compañía. La reestructuración de las tarifas de agua resultaba en un incremento de más de un 200% en las facturas en algunos casos.⁷⁷ Según una evaluación del Banco Mundial, los aumentos fueron realizados para incrementar las inversiones en el servicio de agua, “pero para los consumidores, simplemente era pagar más por el mismo mal servicio.”⁷⁸

El descontento popular creció rápidamente hacia fines de 1999. Diversos sectores de la sociedad cochabambina comenzaron a preocuparse por la concesión y la Ley 2029. Según las encuestas, la impresión colectiva común de las cooperativas y asociaciones, que hasta entonces controlaban los pozos comunitarios, era que Aguas del Tunari, gracias a la Ley 2029, les cobraría por el agua.⁷⁹ Otro grupo afectado por la Ley 2029 fueron los agricultores que almacenaban y

⁷⁶ “Una guerra más allá del agua: febrero-abril del 2000.” CEDIB: Recopilación de artículos publicados en Boliviapress.

⁷⁷ Ver sitio web de Democracy Center para más ejemplos sobre aumentos en las facturas de agua, <http://www.democracycctr.org/Bechtel/waterbills/>

⁷⁸ “Bolivia Water Management: A Tale of Three Cities.”

⁷⁹ Carlos Crespo cita su estudio de los barrios implicados en la guerra del agua en “Equity, Democracy, and Accountability in Bolivian Water Reforms.” (no publicado)

distribuían agua para riego.⁸⁰ La percepción de que Aguas del Tunari les cobraría por el agua que ya habían recolectado y almacenado amenazaba los intereses de las comunidades y de los agricultores que dependían de los pozos para poder regar sus plantaciones. La FEDECOR comenzó a organizar una oposición, un desarrollo crucial que afectaría el curso de la guerra del agua.

La organización que pasó a representar de manera cohesiva a la sociedad civil en el conflicto fue la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida. La Coordinadora era una organización formada en noviembre de 1999 con el apoyo de la FEDECOR, la Federación de Fabriles, la Central Obrera Departamental, y también el Comité de Defensa del Agua y la Economía Popular, que habían sido formados anteriormente para rechazar el aumento en las tarifas de agua.⁸¹ El eje FEDECOR/Fabriles representaba la unión de los trabajadores del campo y urbanos. Esta unión, de importancia histórica en Bolivia, había sido socavada desde las reformas políticas y económicas del estado en las décadas del '80 y '90. No obstante, la Coordinadora pudo superar las dificultades de organización post-reforma construyendo una red central de organizaciones ya existentes que tenían como común denominador la oposición a la privatización del servicio de agua. Irónicamente, la FEDECOR, que unos años antes había entrado en un intenso conflicto con la SEMAPA por las perforaciones, ahora se unía con la misma en defensa del control público de la compañía para proteger los intereses de los regantes. El líder de los Fabriles, Oscar Olivera, era líder y cara visible de la Coordinadora. Pero había cierta competencia en la representación de la sociedad civil: el Comité Civil, un grupo de organizaciones profesionales, empresas, y líderes políticos, y el representante tradicional de los intereses de la sociedad civil, también decían representar a la gente en la guerra del agua. Sin embargo, su participación y apoyo inicial al plan de privatización disminuyeron su capacidad de representar legítimamente a quienes se oponían al mismo. La Coordinadora construyó una

⁸⁰ Gutiérrez 194.

⁸¹ García, García y Quiton 47.

amplia base de apoyo popular a partir de grupos cuyos intereses se veían afectados por la concesión, y pudo así representar de manera legítima a sus adherentes.

La Coordinadora utilizó diversos medios de acción colectiva durante la guerra del agua, entre ellos marchas, huelgas, una toma pacífica simbólica de la Plaza 14 de Septiembre, rechazo a pagar las facturas de agua, comunicados públicos, y reclamos legales de la inconstitucionalidad de la concesión.⁸²

Lo que pasaría a ser la primera batalla de la guerra del agua sucedió en enero de 2000. Una movilización para protestar por los aumentos en las facturas de agua fue convocada por la Coordinadora, el Comité Cívico, y otras instituciones, la cual paralizó Cochabamba durante tres días a partir del 12 de enero. Diversos sectores de la sociedad participaron de las protestas, entre ellos sindicatos urbanos, organizaciones profesionales, estudiantes universitarios, y sindicatos de agricultores, todos ellos reclamando la cancelación del contrato de privatización con Aguas del Tunari. El 14 de enero, el gobierno aceptó formar una nueva estructura tarifaria, modificar la Ley 2029, y revisar el contrato.⁸³ El acuerdo se conoció como el “Acuerdo regional para el servicio de agua, defensa de la economía popular, coexistencia pacífica, y respeto por los derechos humanos.”

Según la Coordinadora, el gobierno no logró cumplir su parte del acuerdo, y el 2 de febrero, convocó a una toma pacífica y simbólica de la Plaza 14 de Septiembre, la plaza principal de Cochabamba. El gobierno anunció que no permitiría ese hecho, y reforzó la policía y las fuerzas militares en Cochabamba agregando 700 uniformados provenientes de otras partes del país. La Iglesia Católica instó a ambas partes a negociar, pero no se logró satisfactoriamente. Las movilizaciones continuaron el 4 de febrero, y los organizadores decían haberse fortalecido en

⁸² Ver “Capítulo V: ¿Puede el gobierno promover acuerdos? La negociación de febrero durante la guerra del agua.” Tesis de doctorado, de Carlos Crespo; también García, García y Quintón 55.

⁸³ De la Fuente, Manuel. “La ‘guerra’ por el agua en Cochabamba: Crónica de una dolorosa victoria.” *Documentos de reflexión académica*, N 15, May 2000. PROMEC, Facultad de Ciencias Económicas y Sociología. Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.

número y en determinación gracias a la posición del gobierno. Se cerraron los comercios, bancos, e instituciones públicas y privadas, a pesar de que los organizadores no habían convocado a una huelga. Las tropas del gobierno bloquearon el acceso a la Plaza 14 de Septiembre. El choque que resultó fue conocido luego como la segunda batalla en la guerra del agua. Duró dos días, y 175 personas resultaron heridas. Se logró un acuerdo de negociación entre el gobierno y la Coordinadora, con la mediación de la Iglesia Católica y la agencia de derechos humanos, terminando así el conflicto en las calles. El gobierno acordó los mismos puntos de enero, y que las tarifas por el servicio de agua permanecerían sin aumentos hasta el final de las negociaciones. Fue en esta batalla que la Coordinadora se destacó como representante del descontento popular de los cochabambinos. El Comité Cívico había instado a los ciudadanos a no participar en las movilizaciones de febrero, y había perdido su legitimidad en la opinión pública.⁸⁴

Al negociar la revisión del contrato con Aguas del Tunari, la Coordinadora no solo buscaba reducir las tarifas, sino que también cuestionaba el contrato en sí. Con el apoyo de organizaciones profesionales, la Coordinadora sostenía que el contrato no se enmarcaba dentro de los intereses legales ni económicos de la población. Cuando la Coordinadora se vio insatisfecha con las negociaciones, decidió romperlas y exigir que el gobierno cancelara el contrato con Aguas del Tunari.⁸⁵ El 26 de marzo, la Coordinadora llevó a cabo un referendo popular formulándoles tres preguntas a los cochabambinos: Si estaban de acuerdo con el aumento en las tarifas del agua, si estaban a favor de mantener el contrato con Aguas del Tunari, y si aprobaban la modificación de la Ley 2029. Entre 30.000 y 50.000 personas participaron del referendo extraoficial, y más de un 90% de los participantes apoyaron la posición de la Coordinadora. A comienzos de abril, la Coordinadora anunció una huelga por tiempo

⁸⁴ "Cronología del conflicto: Bolivia." *Observatorio Social de América Latina*. CLACSO. N 1, Junio 2000. Pg. 70.

⁸⁵ De la Fuente 2000 5.

indeterminado y los bloqueos comenzaron el 4 de abril, exigiendo que Aguas del Tunari abandonara la ciudad, que se congelaran las tarifas del servicio de agua, y que se modificara la Ley 2029.

Si bien el Comité Cívico rechazó una vez más las medidas adoptadas por la Coordinadora, el 4 de abril se bloquearon por completo las autopistas y carreteras, y prácticamente no había movimiento en la ciudad. Ese día, la Coordinadora anunció que ocuparía las oficinas de Aguas del Tunari en 24 horas si no recibía una notificación de que el consorcio abandonaría su puesto. Sin embargo, a pocos días del bloqueo, algunos de los participantes comenzaron a retirarse de la protesta. El 6 de abril, la Coordinadora regresó a la mesa de negociaciones. Al ingresar a la Prefectura municipal para comenzar las negociaciones, el gobierno arrestó a los representantes de la Coordinadora. Los arrestos fueron mostrados por la prensa y provocaron la ira popular.⁸⁶ Si bien el gobierno liberó a los representantes poco después, dicha acción ya había provocado una importante protesta y renovado el apoyo hacia la Coordinadora. La situación se agravó aún más cuando el Congreso suspendió su debate de la Ley 2029. En las negociaciones previas, el gobierno había acordado modificar la ley, y el Congreso de hecho había modificado gran parte de la misma, cuando de repente decidió suspender el debate.

El 7 de abril, unas 50.000 personas participaron de una protesta aún más energizada en las Plaza 14 de Septiembre. Ese día, el Prefecto anunció a través del Arzobispado que Aguas del Tunari había abandonado la ciudad. Sin embargo, los festejos por la noticia fueron breves; la decisión del gobierno central fue invalidada y el Prefecto declaró ley marcial por primera vez desde 1995. Se sucedieron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, no solo en Cochabamba, sino también en el altiplano, donde los uniformados intentaron despejar los bloqueos, resultando en la muerte de varios agricultores.

⁸⁶ De la Fuente 2000 6.

Si bien la ciudad estaba altamente militarizada para ese entonces, en Cochabamba la gente tomó las calles para protestar y bloquear los caminos. Treinta personas resultaron heridas en los choques, y un joven de 17 años resultó muerto cuando las fuerzas de seguridad dispararon a la multitud. En un incidente altamente publicitado, un soldado vestido de civil fue filmado mientras disparaba a las masas. El 10 de abril, el Superintendente de Aguas del Tunari anunció que la compañía abandonaría la ciudad. Los líderes de la Coordinadora, desde su escondite, exigieron que el gobierno firmase un documento, como también que se comprometiese a modificar la Ley 2029. Luego de la resistencia inicial, el gobierno cedió. Después de siete días de bloquear por completo la ciudad de Cochabamba y de intensos y violentos conflictos, se cumplieron las demandas de la Coordinadora: Aguas del Tunari abandonó la ciudad, el gobierno acordó modificar los artículos restantes de la Ley 2029, indemnizar a las víctimas de los enfrentamientos, y liberar a los presos encarcelados durante el conflicto.

La guerra del gas

La “guerra del gas” se refiere al conflicto generado entre el gobierno de Bolivia y los sectores movilizados por un plan de exportación de gas natural boliviano. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad comenzaron en septiembre de 2003 y se extendieron hasta la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. Los sectores movilizados representaban a diversas facciones de la sociedad, cada una con distintas exigencias sociales, pero unidas en su rechazo al plan propuesto para exportar gas natural y exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. El epicentro fue la ciudad de El Alto, la tercera más poblada en el país. El Alto se halla en una planicie por encima de La Paz, ubicada estratégicamente a lo largo de las principales rutas de transporte hacia la capital, un factor importante en el desarrollo del conflicto callejero. Es una de las ciudades más pobres del país, y cuenta con una gran población de migrantes rurales, y es la ciudad más grande con una identidad aborígen bien marcada. Si bien la guerra del gas se originó en las zonas rurales del Departamento

de La Paz, y eventualmente se extendió a otras ciudades importantes, El Alto fue escenario de los enfrentamientos más violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Con solo mirar las pancartas de los manifestantes se cae en la cuenta que las miles de personas que participaron en la guerra del gas lo hicieron para evitar la exportación de gas natural boliviano a EE.UU. y México a través de puertos chilenos. El descubrimiento de importantes depósitos de gas natural en Bolivia a fines de la década del '90 fue considerado en su momento como el camino que llevaría al país al desarrollo. Luego de la capitalización de la compañía petrolera estatal YPFB en 1994, unas 20 compañías extranjeras invirtieron USD 3.500 millones en la explotación del gas natural. Los descubrimientos realizados elevaron las estimaciones de reservas de gas, pasando de 5,5 billones de pies cúbicos en 1996 a 55 billones de pies cúbicos en 2002.⁸⁷ Se informó en su momento que dichos hallazgos le darían a Bolivia el “músculo político extranjero para convertirse en un centro de distribución de energía en la región.”⁸⁸ Además, la llegada del tan ansiado camino para aumentar los ingresos del país fue visto como una reivindicación para los gobiernos nacionales que habían alentado la inversión privada para la explotación.

La producción de gas natural en Bolivia creció enormemente a fines de los '90. La producción pasó de 92.232,12 a 226.740,48 millones de pies cúbicos en el período 1999-2002, y se construyó un gasoducto desde el Departamento de Santa Cruz hasta São Paulo, Brasil para exportar gas.⁸⁹ De enero de 2002 a octubre de 2003, la exportación de gas natural generó USD 292,16 millones, lo que representaba más de la mitad de los ingresos del país en el sector minero y de extracción.⁹⁰ El siguiente paso lógico para las compañías que participaban del gas natural boliviano sería la exportación. La población boliviana, según se afirmaba, no era lo

⁸⁷ Forero, Juan. “Losing Energy and Investors.” *The New York Times*. 29 Jul 2004. pW1.

⁸⁸ “Bolivia: Pacific LNG to conclude LNG export studies.” *South American Business Information*. 15 Oct 2001.

⁸⁹ “Bolivia: Producción de petróleo y gas natural por año según subsector 1991-2002. Instituto Nacional de Estadística.

⁹⁰ Instituto Nacional de Estadística. *Nota de Prensa*. 154. dic 2003.

suficientemente grande como para crear un mercado interno proporcional a la oferta y generar el tipo de ganancias que esperaban los inversores.

En junio de 2001, un grupo de compañías petroleras formaron un consorcio llamado Pacific LNG para planificar la exportación de gas natural. El mismo estaba compuesto por las multinacionales Repsol YPF (37,5% de participación), British Gas (37,5%), y Pan American Energy (25%, que a su vez es propiedad de British Petroleum en un 60%, y el restante 40% pertenece a una compañía argentina). Los acuerdos firmados con el gobierno boliviano redujeron la carga impositiva al capital importado.⁹¹ El consorcio planeaba expandir las exportaciones de gas natural boliviano e incluir mercados en EE.UU. y México.

Si bien se hicieron explícitos algunos detalles del plan propuesto por el gobierno boliviano y Pacific LNG, trascendió que el mismo tenía las siguientes características: El gas natural que sería exportado por el consorcio provenía del campo Margarita, en el Departamento de Tarija, el cual contenía unos 13 billones de pies cúbicos de gas. El gas sería transportado a través de un gasoducto a un puerto probablemente en la costa del norte chileno, donde sería licuado para su transporte a México. El gas natural líquido sería luego regasificado y distribuido en México y California. El costo estimado del plan se calculaba en unos USD 5000-7000 millones. Se calculaba además que en varios años la industria produciría USD 1000 millones por año y que las ganancias del gobierno a partir del gas natural subirían a unos USD 480 millones al año.⁹² El campo Margarita fue descubierto luego de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 1996, la cual sostenía que todos los hallazgos de gas posteriores a la promulgación de la ley estarían sujetos a un impuesto del 18% que iría al Tesoro Nacional. Los campos ya existentes tributarían un 50%. Además, trascendió ampliamente que el gas se vendería en USD 0,70 por cada mil pies cúbicos, lo que llevó a que se acusara al gobierno de estar “regalando” el gas.

⁹¹ “Pacific LNG seeks ‘tax neutrality’ for gas.” *LatAm Energy*. 30 ago 2001. v4 i17 p9(1).

⁹² “Pipe Dreams.” *The Economist*. 14 May 2002.

El puerto de exportación también generó diversos conflictos. La otra opción era el puerto de Ilo, en Perú, una ruta mucho más larga y costosa para un gasoducto. Pacific LNG se inclinaba notoriamente a favor del puerto chileno, afirmando “que un gasoducto a Perú le agregaría unos USD 610 a 930 millones al costo original de USD 5000 millones.”⁹³ El consorcio competía intensamente con proveedores de gas natural en Asia para abastecer a los mercados estadounidenses y mexicanos, por lo que era muy importante reducir los costos en la medida de lo posible.⁹⁴ Sánchez de Lozada había declarado públicamente que el factor económico sería la base de la decisión del puerto a utilizar. Para Pacific LNG, Chile, en lugar de Perú, era el único puerto viable para exportar gas boliviano a EE.UU. y México. Por lo tanto, la opción “lógica” para la exportación de gas natural boliviano, extraído principalmente de la sureña provincia de Tarija, era la costa norte de Chile. Si bien nunca se llegó a un acuerdo definitivo, prácticamente no cabían dudas de que tanto el gobierno como la compañía se inclinaban a favor de la ruta chilena y que esa sería la elegida.

Sin embargo, el conflicto histórico con Chile por la salida al Océano Pacífico hizo difícil la aceptación de dicha propuesta. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se habían suspendido desde 1978, y el gran resentimiento del pueblo boliviano hacia sus vecinos generó una mayor resistencia. Hasta entonces, la política de Bolivia era no hacer negocios con Chile hasta que los dos países hubiesen resuelto el tema del acceso de Bolivia al Pacífico. Debido a dicha enemistad histórica, el gobierno boliviano pospuso en reiteradas ocasiones la toma de una decisión final sobre el puerto a utilizar para la exportación hasta tanto se asegurasen los compradores en México. El consorcio estaba en negociaciones exclusivas con la compañía estadounidense Sempra Energy desde diciembre de 2001, la cual le compraría gas para distribución. No obstante, los compradores esperaban que se tome una decisión con respecto al

⁹³ “La Paz to decide on gas route by December.” *LatAm Energy*. 25 jun 2003. v6 i12 p8(1)

⁹⁴ Gray, Tony. “Bolivia and Peru set to ‘squander’ LNG assets.” *Europe Intelligence Wire*. 8 jul 2003.

puerto. La decisión del gobierno boliviano se esperaba para octubre de 2003, aproximadamente, luego de la firma del contrato con Semptra.

A medida que se acercaba la decisión del puerto a utilizar, comenzó a intensificarse la oposición al plan de exportación. Si bien ya se había iniciado un debate por la venta de gas dos años antes, a mediados de 2003, el tema había alcanzado una notoriedad crítica. Más adelante se examinará más detalladamente la oposición al plan, por ahora, se describe a continuación un resumen de los argumentos contra la exportación de gas natural que se entendían como los elementos del plan propuesto por Pacific LNG:

- Una de las exigencias era que la cuestión de la exportación de gas natural debía consultarse primero a los ciudadanos a través de un referendo vinculante. Sánchez de Lozada había hablado vagamente de una “consulta popular” sobre el tema del gas, pero la falta de una definición o un plan concreto parecía hacer que esas palabras se las llevara el viento.⁹⁵
- Prácticamente todos los sectores movilizados exigían que el gas debía ser industrializado en Bolivia por manos bolivianas para recién ser exportado como un producto con valor agregado. Tal como estaba planeada, la exportación – según la percepción de la gente – no beneficiaría al pueblo, sino que sería entregada a compañías transnacionales y compradores externos. La capitalización de la compañía petrolera estatal en 1995 fue citada como evidencia de que los bolivianos ya no controlaban sus recursos naturales. Pacific LNG era considerada por muchos bolivianos como un negocio multimillonario que enriquecería a las compañías transnacionales a la vez que dejaría virtualmente ningún beneficio al país. Este sentimiento se vio exacerbado cuando un ejecutivo de la compañía petrolera española Repsol fue citado en una declaración a la prensa afirmando que por cada dólar invertido en la industria boliviana del gas, se obtenían diez de ganancias.

⁹⁵ “Govts. move LNG deal forward - Bolivia, Mexico.” *The America's Intelligence Wire*. 15 Sep 2003.

- De igual manera, la memoria colectiva sobre la explotación de los recursos naturales en la historia boliviana tuvo un papel importante en la percepción de la gente. Bolivia tenía abundantes depósitos de plata y estaño, los cuales fueron explotados durante y después de la colonización dejando pocos beneficios a la población – Bolivia sigue siendo el país más pobre de América del Sur.
- También se generó más oposición debido a que se comúnmente se creía que el gas natural pasaría por un puerto ubicado en tierras de su enemigo histórico y que sería licuado en Chile. Por las razones ya mencionadas, se consideraba un insulto que Chile se beneficiara del gas natural boliviano mientras que muchos habitantes de las zonas rurales más pobres de Bolivia aún siguen utilizando estiércol como combustible.

A medida que se acercaba la firma del contrato de exportación, los ánimos comenzaron a caldearse. El 9 de agosto de 2003, se formó en Cochabamba la Coordinadora de Recuperación y Defensa del Gas. La misma estaba compuesta por diversos opositores a la exportación del gas, entre ellos la Coordinadora (de la guerra del agua), los Fabriles, la FEDECOR, la CSUTCB, las organizaciones de coccaleros, y otros grupos sociales. Su objetivo era formar un espacio de “reunión, resistencia, y rebelión” para luchar y evitar la venta del gas natural y recuperar los recursos naturales de manos de las compañías transnacionales.⁹⁶ A pesar de la amplia representación de esta Coordinadora, no logró el mismo nivel de centralización en la guerra que el alcanzado por la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida en la guerra del agua.

Al verse enfrentado con una feroz oposición a Pacific LNG, Sánchez de Lozada, debilitado por un motín de la policía y por los hechos de violencia sucedidos en La Paz en febrero anterior, necesitaba una manera de despejar la situación. En un intento por descabezar a la oposición interna, Sánchez de Lozada venía negociando con el Banco Mundial y Pacific LNG para financiar 225.000 nuevas conexiones domiciliarias de gas. En junio de ese año, el gobierno

⁹⁶ Coordinadora de Recuperación y de Defensa del Gas. “Pronunciamento del primer encuentro nacional por la recuperación y defensa del gas.” Cochabamba. 2 ago 2002.

anunció que se encontraba cerca de alcanzar su meta de nuevos clientes, aumentando de 14.000 a 20.000. Su gobierno también incorporó un importante partido a su alianza, logrando así mayoría en el Congreso. Además, el 16 de septiembre de 2003 se lanzó una campaña de información, con un costo de USD 2,5 millones, para intentar convencer a los bolivianos de que Chile era la mejor opción para la exportación del gas natural.⁹⁷

La guerra del gas comenzó con un hecho superficial que nada tenía que ver con la cuestión de la exportación del gas. El 12 de septiembre, los campesinos del altiplano en el Departamento de La Paz anunciaron que bloquearían las rutas a partir del 15 de ese mes. Su intención era exigir la liberación de Edwin Huampo, quien se encontraba detenido por matar a dos personas en un caso de “justicia comunitaria” en su pueblo. Los grupos indígenas del altiplano son extremadamente independientes y reacios a aceptar cualquier intento del gobierno central de interferir con lo que ellos consideran asuntos comunitarios, como ser casos de justicia comunitaria, o la aplicación de castigos extrajudiciales. El gobierno a su vez intentó disuadir las protestas anunciando que cualquier bloqueo sería despejado por el ejército y la policía y envió tropas para vigilar los caminos de acceso a la capital.⁹⁸

Esas protestas contra el gobierno central coincidieron con masivas movilizaciones organizadas por movimientos sociales el 19 de septiembre. Las manifestaciones se concentraron en la ciudad de El Alto, con la participación de alrededor de 100.000 personas provenientes de todo el país, siendo los principales organizadores el MAS y la COB. La protesta era contra la exportación, exigiendo que el gas natural debiera industrializarse en Bolivia para ser usado por los bolivianos. El gobierno, empero, parecía estar despreocupado, y sostenía que si se los comparaba con los ocho millones de bolivianos, el número de manifestantes no llegaba ni a un 1% de la población.⁹⁹

⁹⁷ “El gobierno inicia campaña de explicación con \$2.5 millones de dólares.” *La Prensa*. 17 sep 2003.

⁹⁸ “Policía y militares se adelantan al bloqueo y toman los caminos.” *La Razón*. 13 sep 03.

⁹⁹ “El ejecutivo asegura que ni el 1% se movilizó ayer.” *La Razón*. 20 sep 03.

El clima se tornaba cada vez más tenso en el Departamento de La Paz cuando el 20 de septiembre se desataron choques armados entre los campesinos del altiplano y los soldados y policías convocados para detener los bloqueos en el pueblo de Warisata. Las tropas habían sido enviadas allí para despejar el camino de Sorata a La Paz; alrededor de 1000 turistas quedaron atrapados en Sorata por los bloqueos, y según las declaraciones del gobierno, habían sido tomados como rehenes por los campesinos. Los hechos de violencia dejaron un saldo de siete muertos: Cinco miembros de esa comunidad y dos soldados. Una de las bajas civiles fue un niño de ocho años, lo que enfureció a la población, especialmente en El Alto. El día después de la violencia, diversos sectores de la sociedad, entre ellos el MAS y la COB, anunciaron que se manifestarían en solidaridad a los campesinos de Warisata, además de la protesta original contra la exportación de gas. La Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas declaró a los campesinos “mártires de la recuperación del gas.”¹⁰⁰ La coincidencia de las protestas por la exportación y los bloqueos de los campesinos se mezclaron de manera intrincada con la cuestión del gas y el nacionalismo aymara. También se movilizaron los estudiantes universitarios, quienes ya se encontraban en una huelga de hambre en protesta contra una ley de autonomía de las universidades¹⁰¹. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto anunció una huelga de 24 horas. Para sumar aún más al conflicto, dicha huelga pasó a ser por tiempo indeterminado a partir del 8 de octubre. Con el apoyo de todos esos sectores, se intensificaron los bloqueos de La Paz, y la capital quedaba cada vez más aislada del resto del país. Las movilizaciones en El Alto habían logrado su cometido de cerrar la entrada de suministros a La Paz, y la capital quedaría aislada mientras durasen los enfrentamientos.

Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo de la CSTUCB, diputado, y líder del partido político aborigen MIP, era el vocero de facto de los campesinos movilizados y de la población aymara. Lo llaman el *Mallku*, palabra aymara que significa cóndor y líder respetado del pueblo aymara.

¹⁰⁰ Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas. 26 sep 03.

¹⁰¹ “El MAS y la COB preparan movilizaciones de apoyo.” *La Razón*. 22 sep 03.

Quispe exigía que el gobierno tomara medidas sobre los 72 puntos restantes de un acuerdo negociado en 2001. Él sostenía que después de la violencia en Warisata, se había roto el diálogo con el gobierno, y que no había otra opción más que la lucha armada para obtener lo que exigían.¹⁰² El gobierno llamó al diálogo con los sectores aborígenes, pero Quispe exigió la desmilitarización del altiplano, la liberación de los detenidos por el gobierno, y un compromiso de que las conversaciones se llevarían a cabo en Warisata antes de proseguir. El gobierno estaba dispuesto a cumplir esas condiciones.

El 6 de octubre, las protestas llegaron a su tercera semana. Diversos sectores se habían sumado a las marchas, muchos de ellos respondiendo al paro general convocado por la COB. Todo el país, especialmente en El Alto y La Paz, docentes, estudiantes, trabajadores de la salud, obreros fabriles, cocaleros, mineros, y otras facciones se unieron, cada sector con sus propias demandas y quejas, pero unidos en su rechazo a la exportación del gas, y cada vez más vehementes en el pedido de renuncia de Sánchez de Lozada.¹⁰³ Si bien su nivel de popularidad apenas alcanzaba el 18% según una encuesta, Sánchez de Lozada declaró a través de un vocero que “no tiene pensado renunciar, y es firme su decisión de defender la democracia.”¹⁰⁴

El 12 de octubre, la Presidencia anunció que congelaría las negociaciones sobre la venta del gas y que consultaría al pueblo boliviano. Ese mismo día marcó un punto de inflexión en la guerra del gas, pues se tornaron más violentos los choques entre las tropas y la gente que intentaba bloquear la ruta de El Alto a La Paz. La capital se encontraba al borde de quedarse sin combustible, por lo que se convocó al ejército para despejar la carretera y permitir que ingresaran camiones con combustible a través de El Alto hacia La Paz. Las versiones de los hechos varían – hay quienes afirman que las tropas dispararon a mansalva a la multitud, otros sostienen que los

¹⁰² “El conflicto se basa en demandas de hace 3 años.” *La Razón*, 23 sep 03.

¹⁰³ “Tercera semana de protestas en Bolivia.” *La Nación* (Buenos Aires), 7 oct 03.

¹⁰⁴ “Gobierno militariza...”; “El gobierno de Sánchez de Lozada, ante un futuro incierto.” *La Nación* (Buenos Aires), 2 oct 2003.

manifestantes arrojaban dinamita cerca de los camiones con combustible – pero los resultados fueron visibles: 25 civiles y un soldado perdieron la vida.

El día siguiente fue aún más violento. Continuaron las manifestaciones y marchas, y en un intento por apaciguarlas, 20 civiles más perdieron la vida y otros 100 resultaron heridos, esta vez en La Paz.¹⁰⁵ Además, ocho manifestantes heridos en los enfrentamientos del día anterior murieron a causa de las lesiones recibidas. Como resultado, el vicepresidente Carlos Mesa se distanció públicamente de Sánchez de Lozada, pero no renunció, dejando abierta la posibilidad de sucederlo constitucionalmente en el cargo en caso de que el primer mandatario renunciara. Este es un dato importante pues el clamor por la renuncia del presidente se hizo cada vez más notorio como condición para terminar las movilizaciones. Sin embargo, Sánchez de Lozada anunció en repetidas ocasiones que no renunciaría y recibió el apoyo oficial de varios países y organizaciones, entre ellas los EE.UU, Argentina, Brasil, la OEA, y la Comunidad Andina de Naciones.¹⁰⁶ Pero su alianza de gobierno comenzó a desintegrarse. El alcalde de La Paz, miembro de uno de los partidos que conformaba la alianza con el Presidente, denunció la violencia y encabezó una marcha hacia el palacio de gobierno para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. Los otros partidos de la coalición estaban divididos, algunos a favor del gobierno, otros separándose de él.

El 15 de octubre, Sánchez de Lozada anunció que según un acuerdo logrado con todos los miembros de la alianza gobernante, se realizaría un referendo sobre la exportación del gas, se modificaría la Ley de Hidrocarburos, y se incorporaría una Asamblea Constituyente a la Constitución. El líder del sindicato de cocaleros Evo Morales junto con Felipe Quispe rechazaron la propuesta y reiteraron su pedido de renuncia al presidente. Continuaron las marchas y protestas, y los observadores dieron cuenta de que algunos sectores de la clase media iniciaron

¹⁰⁵ Chávez, Walter. “Bolivia, una revolución social democrática.” *El Dipló, Le Monde Diplomatique*. Nov 2003. 6.

¹⁰⁶ “El Presidente no renunciará a su cargo, pese a la violencia y a Mesa.” *La Razón*. 14 oct 2003.

huelgas de hambre exigiendo también la renuncia del Presidente.¹⁰⁷ El día siguiente, según los organizadores, alrededor de 200.000 cocaleros, mineros, estudiantes, organizaciones vecinales de El Alto, y otros, bajaron a La Paz.

El 17 de octubre, después de un mes de protestas, huelgas, bloqueos, y violentos enfrentamientos, que dejaron un saldo de 60 muertos aproximadamente, Gonzalo Sánchez de Lozada presentó su renuncia ante el Congreso y voló a Miami. La renuncia fue aceptada sin debate alguno. Según los procedimientos estipulados en la Constitución Boliviana, el vicepresidente Carlos Mesa asumió la presidencia. Su primera promesa fue realizar un referendo vinculante sobre la exportación del gas natural, la revisión de la Ley de Hidrocarburos, y una Asamblea Constituyente. Respetado periodista e historiador con pocos lazos con los partidos políticos, prometió también gobernar sin los partidos y cumplir su mandato en tanto y en cuanto así lo creyera apto la legislatura. Los líderes de los sectores movilizados le dieron un período de 90 días para cumplir sus promesas.

Sempra Energy inició conversaciones con proveedores indonesios para comprarles gas natural, y en diciembre firmó un contrato con ellos.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Chávez 6.

¹⁰⁸ "Pacific LNG down, but not out." *The America's Intelligence Wire*. 23 dic 2003.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS

El conflicto es la categoría de análisis del presente estudio, y dicho análisis intentará tener en cuenta tanto a los actores que participaron del conflicto como a la estructura social que lo generó. El presente análisis mostrará que los casos son ejemplos de conflicto generado estructuralmente. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta las particularidades de los actores al estudiar el conflicto. El desafío de yuxtaponer el análisis estructural y un análisis de los actores puede cumplirse mediante un examen del discurso empleado por los actores para satisfacer sus intereses. Este discurso puede ser considerado como una estrategia, pero también como una revelación de la propia visión que el actor tiene de la estructura en la que interactúa con los demás. Dado que el conflicto solo existe cuando hay una relación, el discurso que rodea a un conflicto puede revelar información sobre esa relación, y por ende, también de la estructura social. En esos casos, un análisis del discurso parece dejar en evidencia que la democracia es el objeto del conflicto existente entre los dos principales grupos de actores. Dicho conflicto se ve alimentado por el debate sobre la naturaleza de la pobreza en Bolivia y lo que debe hacerse para erradicarla. En las guerras del gas y el agua, el conflicto en el discurso tiene lugar en distintos ámbitos, pero la categoría general fueron las distintas interpretaciones que ellos tenían de la democracia. Ese es el campo de conflicto latente que dominó la estructura del discurso de los actores. Cada bando decía representar a la “verdadera” democracia, y sus interpretaciones de la democracia eran partes integrales de su discurso.

Realizar un examen de las estructuras sociales y los actores es una tarea compleja. La teoría sociológica del conflicto definida por Dahrendorf y apoyada por Simmel brinda ciertas pautas a tener en cuenta en esta empresa. El análisis de cuatro pasos que Dahrendorf hace del conflicto se aplica tanto a la guerra del agua como a la del gas, pues ambas son casos muy claros de conflictos generados entre el gobierno y los sectores movilizados, o los “gobernantes y gobernados.” Estos conflictos son generados por la represión de un grupo sobre otro, y pueden

ser analizados desde la perspectiva de la organización política de la sociedad: El estado. Dahrendorf sostiene inequívocamente que el estado, “es decir, la sociedad en su aspecto político, es un grupo coordinado imperativamente” en el cual existen personas que ocupan puestos de autoridad. La manera en que se organiza políticamente una sociedad lleva inevitablemente al conflicto: “Por lo tanto, el conflicto político es un hecho estructural de la sociedad bajo cualquier condición imaginable. Este conflicto puede adoptar formas leves o severas, puede desaparecer por períodos limitados desde el punto de vista del observador superficial, pero no puede ser eliminado.”

El modelo de cuatro pasos que Dahrendorf plantea para los conflictos sociales puede ser una herramienta muy útil para examinar esta estructura. Para realizar el análisis de la estructura, es necesario tener en cuenta la relación estructural existente entre los actores, especialmente en términos de los papeles de dominación positiva y negativa que tienen los actores. Los relatos previos de las guerras del agua y el gas describen los dos primeros pasos: La formación de cuasi-grupos con intereses latentes, seguida por la formación de grupos de interés con roles de dominación positiva y negativa, la cual tiene lugar bajo las condiciones de la organización.

El primer paso del modelo de Dahrendorf se manifiesta por el crecimiento de la oposición, pero no de la oposición organizada, a la privatización y los planes de exportación. Dahrendorf divide a los actores del conflicto en un grupo de interés que desea proteger el status quo, y otro grupo de interés con deseos de cambiar. Este desarrollo tuvo lugar según el modelo: El gobierno, con un rol de dominación positiva, tenía interés de conservar el status quo (llevar a cabo las políticas propuestas); los sectores (aún no) movilizados tenían interés de cambiar (cancelar las políticas). Como afirma Dahrendorf, la distinción entre “ellos” y “nosotros” es una de las experiencias más fundamentales para la mayoría de los hombres en sociedad”, y está estrechamente relacionada con una distribución desigual del poder.¹⁰⁹ Ese es el origen estructural

¹⁰⁹ Dahrendorf 1958a 176.

del conflicto desplegado tanto en la guerra del agua como en la guerra del gas. En el segundo paso, la formación de grupos de interés organizados con roles de dominación positiva y negativa tuvo lugar cuando se formaron movimientos sociales con el objetivo explícito de desafiar las políticas económicas del gobierno. Esos grupos organizados tenían programas e ideologías específicos, y su incorporación se dio bajo las condiciones variables empíricamente de la organización. Sin embargo, el presente estudio no intentará examinar las condiciones sociales, políticas, y técnicas que afectaron a la organización de los grupos.

Esta sección examinará el tercer paso del modelo de Dahrendorf: El conflicto constante entre los grupos de interés, uno con interés en mantener el status quo, y el otro interesado en cambiar. Para analizar el conflicto, la investigación se centrará principalmente en la manera en que los actores estructuraron su discurso. La forma e intensidad del conflicto dependen de las condiciones variables empíricamente del conflicto. Dahrendorf apoya una investigación de la movilidad social de los individuos y de mecanismos efectivos para regular el conflicto social como las condiciones variables empíricamente del conflicto. Este tipo de investigación empírica no es el principal interés de este estudio, pues el objetivo no es determinar las formas y la intensidad de los conflictos, sino analizar la estructura de los mismos.

Un examen del conflicto también ayudará en la determinación del cuarto paso del modelo de Dahrendorf: Determinar el cambio en las estructuras sociales a través de un cambio en las relaciones de dominación, el cual sucede bajo las condiciones del cambio estructural. Dicho examen se describe en el siguiente capítulo.

Para este análisis, los actores implicados en el conflicto son separados en dos categorías: Los que están a favor de las políticas económicas (privatización y exportación), y aquellos que se oponen. En caso de haber un tercer actor importante, será especificado. Los dos actores principales serán llamados colectivamente "los sectores movilizados" y el "gobierno." Ambas denominaciones no representan la complejidad de ambos bandos, y se hará un esfuerzo razonable

para reconocer y explicar su naturaleza no unitaria en tanto y en cuanto afecte la manera en que ambos bandos construyen su campo de conflicto. Tal como demostrará la presente sección, el objeto de los conflictos fueron las políticas económicas: La privatización del servicio de agua y la exportación de gas natural. No obstante, el discurso empleado por los actores se estructuraba en torno a otras cuestiones – principalmente, su interpretación de la democracia.

Al comparar el discurso de los actores, son notables las diferencias de interpretación entre ambos roles de distinta dominación dentro del grupo coordinado imperativamente. La siguiente tabla ilustra una comparación de la estructura del discurso de ambos actores principales:

Tabla 5.1 Estructura del discurso en la guerra del agua y la guerra del gas

Sectores movilizados:		Gobierno:
	DEMOCRACIA	
(cuestión de justicia, ética)	← Pobreza →	(cuestión de economía, práctica)
Justicia		Ineficiencia del sector público
Memoria colectiva		Razonamiento económico
Actores externos: Negativos		Actores externos: Positivos
• (Independencia)		• (Inversión extranjera)
Participación		Orden y estabilidad
Toma de decisiones		Credibilidad
Reconocimiento del conflicto		Negación del conflicto

Este capítulo mostrará cómo los principales actores invocaron a la democracia explícitamente en su discurso, y cómo su interpretación se vio alimentada por sus opiniones con respecto a la pobreza en Bolivia. Los sectores movilizados construyeron su discurso en torno a ideas de justicia, memoria colectiva, la influencia negativa de los actores externos, y la participación popular en la toma de decisiones. Como la parte revisionista con un rol de dominación negativa, buscaban reconocer el conflicto y participar de él. El gobierno invocaba ideas de eficiencia, con un razonamiento basado en la economía. Los actores externos eran vistos de manera positiva, y de hecho se realizaron intentos para lograr el orden, la estabilidad, y la credibilidad para atraer

las inversiones extranjeras. Como la parte con un rol de dominación positiva y que apoyaba el status quo, el gobierno buscaba negar el conflicto generado por los recursos naturales.

La guerra del agua

Sectores movilizados: Aquellos que se oponían a la privatización

En términos generales, los sectores movilizados estaban representados por la Coordinadora, un conglomerado de movimientos y



Foto 5.1 Manifestación en la Plaza 14 de septiembre en Cochabamba.

organizaciones ya existentes. La misma representó de manera cohesiva a la sociedad civil durante la guerra del agua. Fue la voz centralizada que expresó la opinión y recibió el apoyo de quienes se oponían al plan de privatización y a la Ley 2029.

El principal interés de la Coordinadora era unir a las organizaciones e individuos que la componían. La FEDECOR estaba interesada en conservar los derechos de “usos y costumbres” de los pozos por los que habían luchado en la década del '90. La Ley 2029 definía a los recursos naturales bajo el control de la nueva proveedora del servicio lo cual amenazaba la posibilidad de los miembros de la FEDECOR de acceder al agua de los pozos que ellos mismos habían perforado y gestionado hasta entonces. Lo que ellos querían era mantener la provisión de agua subterránea y evitar que se les cobrara por el agua de sus pozos. Lo mismo se aplicaba para el 15-20% de cochabambinos que recibían agua de cooperativas o asociaciones barriales. Naturalmente, los ambientalistas estaban preocupados por las consecuencias que podría provocar al medio ambiente el proyecto Misicuni. Y desde luego, estaban aquellos que llegaron a la Coordinadora al ver cómo sus facturas de agua aumentaban enormemente, y también aquellas personas cuyos magros ingresos les hacían muy difícil, e incluso imposible, afrontar el servicio

de agua. Por lo tanto, sus intereses se pueden resumir en la cancelación del contrato de privatización y la continuación de los “usos y costumbres” en lo que respecta al servicio de agua. Los únicos que no estaban visiblemente representados en esta coalición eran el 15-20% de vecinos excluidos del servicio de agua y que compraban el suministro a los costosos aguateros.¹¹⁰ No obstante, la Coordinadora era un medio central y concentrado para articular la exigencia de cancelar el contrato con Aguas del Tunari y revisar la Ley 2029.

La Coordinadora planteó un compromiso irrevocable de lograr sus demandas. Dado que la implementación de las soluciones negociadas de enero y febrero no fue satisfactoria, la Coordinadora sospechaba que toda conversación que pudiese darse en el futuro solo estaría llena de promesas vagas por parte del gobierno. El referendo que se llevó a cabo a fines de marzo legitimó la posición tajante de que Aguas del Tunari debía abandonar la ciudad, a través de lo que ellos llamaron una verdadera expresión democrática de la voluntad popular. Además, las tácticas represivas del ejército y la policía no hicieron más que aumentar el número de adherentes a la Coordinadora. Como la Coordinadora se había comprometido de manera irrevocable a paralizar la ciudad, el único recurso del gobierno habría sido una derrota total de la Coordinadora: Encarcelar a sus líderes, restringir sus actividades, y eliminar las protestas. Esto habría provocado muchas muertes, con el riesgo latente de que la ira popular se extendiera a otras partes del país. El clamor popular surgido luego del arresto de los representantes de la Coordinadora seguramente le indicó al gobierno que continuar la represión no era una opción aceptable.

La afirmación de que la Coordinadora era la verdadera representante de la voluntad popular estaba claramente evidenciada en su discurso. Sus afirmaciones se forjaban en torno a su representación de la democracia. Su argumento era que el pueblo de Cochabamba no había decidido privatizar el sistema de agua; esa decisión había sido tomada por políticos que no

¹¹⁰ Laserna, Roberto. “2000: conflictos sociales y movimientos políticos en Bolivia.” *Annual Social 2000*, FLACSO, Costa Rica.

representaban la voluntad popular. Por lo tanto, la Coordinadora representaba a gente simple y trabajadora que exigía tener el control de lo que les corresponde por derecho: El agua. La Coordinadora fue estructurada como una lucha noble por la justicia, que enfrentó a los poderosos con los indefensos, empleando medios verdaderamente democráticos para luchar contra los supuestos intereses democráticos del gobierno y las empresas, las que obtendrían ganancias a costa de los pobres. El discurso se erigía en torno a la capacidad que la Coordinadora tenía de servir como un canal de participación pública – a diferencia del gobierno – y exigía que la toma de decisiones esté en manos de la población. Su discurso también evocaba la memoria colectiva de errores del pasado y también casos de influencia extranjera, planteando a los actores externos como presencias negativas. Al ser la parte revisionista en la guerra del agua, el discurso de la Coordinadora contenía un reconocimiento explícito del conflicto existente por la privatización del servicio de agua.

El hecho de que la gente del lugar se refiere al conflicto de Cochabamba en 2000 como la “guerra del agua” indica el éxito que tuvo la Coordinadora en hacer explícito el conflicto y en enmarcar los incidentes como una lucha de las víctimas de la globalización y las políticas neoliberales contra las corporaciones, los inversores extranjeros, y las élites bolivianas que las representaban. Después de la primera batalla en enero, la Coordinadora declaró la primera victoria “en la larga pelea por defender los intereses del pueblo sencillo y trabajador contra las imposiciones y negociados del mal gobierno de hombres de empresarios y politiqueros.”¹¹¹ Según la Coordinadora, el pueblo de Cochabamba que se sumó a las protestas simplemente estaba defendiendo lo que les correspondía por derecho y que veían amenazado por la privatización. Para ellos, era nada más que una cuestión de justicia, como el derecho de la gente a defender lo que les pertenece colectivamente.

¹¹¹ Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. “Comunicado No. 6.” 15 ene 2000.

La Coordinadora estableció su caso contra la privatización planteando varias acusaciones contra el gobierno y la concesionaria. Entre ellas se dijo que el contrato con Aguas del Tunari era “escandalosamente lesivo a sus intereses, de que este contrato tiene cláusulas confidenciales, de que la empresa no tiene capitales registrados, que no ha invertido ningún dinero según es su obligación contractual, y de que importantes empresarios-políticos del MIR, ADN, y MNR son accionistas de la empresa consorcio.”¹¹² La acusación de corrupción y la idea de que la concesión solo beneficiaría a la elite fue una fuente importante de descontento para la Coordinadora. No solo sostenía que la imposición de la privatización era injusta per se, sino también que los términos y condiciones de la concesión eran nocivos para los intereses cotidianos de los cochabambinos.

La Coordinadora fortaleció sus intereses haciendo referencia a su experiencia como cuerpo consultivo y por tanto legítimo y representativo para ilustrar el contraste que tenía con el gobierno. En un comunicado, mencionó que las constantes asambleas, reuniones, y la confianza colectiva “son nuestro principal recurso para defender lo que es nuestro.”¹¹³ Evidentemente, la relación del gobierno con la sociedad civil no compartía ninguno de esos atributos. Después de la segunda batalla, la Coordinadora publicó un comunicado en el que decía:

Entramos a la Plaza [14 de septiembre] tras dos días de batalla tal como dijimos, jubilosamente, para decir que Cochabamba no se rinde, que el Agua no está en venta, para recuperar la palabra, la democracia; en fin, para mostrar que en relación al agua, somos nosotros los que decidimos y que no estamos dispuestos a someternos a lo que digan ministros, empresarios e instituciones financieras internacionales.¹¹⁴

La visión participativa de la democracia se evidencia cuando dice que “decidimos y hacemos, discutimos y ejecutamos implementamos...Democracia es soberanía del pueblo y eso es lo que hemos hecho.” Además, sostenía que había un “consenso total” entre los cochabambinos con

¹¹² Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. “Denuncia de secuestro de dirigentes de la Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la Vida.” Cochabamba. 8 apr 2000.

¹¹³ “Comunicado No. 6.”

¹¹⁴ Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida. “¡Y...el agua sigue siendo nuestra!” Cochabamba. 6 feb 2000.

respecto a la lista de exigencias de la Coordinadora.¹¹⁵ Para ilustrar el amplio atractivo de sus objetivos, la Coordinadora también mencionaba sus intentos de hacer que la lucha por el agua sea nacional, puesto que había sistemas de riego y consumo de agua basados en prácticas tradicionales que se veían perjudicados por la privatización amparada por la ley.¹¹⁶

A medida que se intensificaba el conflicto en las calles, también lo hacía el discurso. Después de la segunda batalla, la Coordinadora atacó al gobierno por sus tácticas represivas, defenestrando a los “criminales vestidos de policías” y a la masacre que se pretendía llevar a cabo. La Coordinadora afirmó que las piedras vencieron a las balas y al gas lacrimógeno, y que la dignidad de los ciudadanos había vencido a la cobardía de los funcionarios corruptos y mediocres del gobierno.¹¹⁷ Las acusaciones de represión hicieron aún más posible el contraste entre los poderosos y los indefensos que sirvieron para movilizar a cada vez más sectores de la sociedad. La Coordinadora pudo así sentenciar que puso en práctica procesos de toma de decisiones realmente democráticos, como el referendo del mes de marzo.

Al utilizar la memoria colectiva, la Coordinadora afirmó en una referencia al plan de ajuste estructural de 1985, que “después 15 años estamos disfrutando el júbilo de un triunfo.”¹¹⁸ Kruse y Vargas se refieren a la memoria colectiva en referencias observadas durante el conflicto contra la dictadura de Bánzer. Las pancartas de los manifestantes rezaban “Me acuerdo de 1971” (o 1979, 1980, y otros golpes de estado). En otras se leía: “Este Sr. Bánzer no cambió para nada.”¹¹⁹

¹¹⁵ Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. “Denuncia de secuestro de dirigentes de la Coordinadora Departamental de Defensa del Agua y de la Vida.” Cochabamba. 8 apr 2000.

¹¹⁶ Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida. “¡Y...el agua sigue siendo nuestra!” Cochabamba. 6 feb 2000.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Vargas, Humberto and Thomas Kruse. “Las victorias de Abril: una historia que aún no concluye.” *Observatorio Social de América Latina*. CLACSO. N 2, sep 2000. Pg 14.

Las actitudes de los actores externos eran vistas a menudo como una imposición de su voluntad sobre el pueblo de Cochabamba, infringiendo así la soberanía popular. En un comunicado, Olivera afirmó que Cochabamba:

Ha sufrido una falta de agua por 50 años y un sed de justicia por más de 500 años, y el Banco Mundial exige que los cochabambinos sedientos tomemos dinero de nuestros bolsillos para resolver el problema, y que el agua debe dejar de ser un derecho colectivo y convertirse en propiedad privada, ahí la transnacional Bechtel junto con los oficiales corruptos firmaron un contrato de la concesión de la compañía municipal por 40 años...¹²⁰

Esta declaración fue escrita cuatro años después de la guerra del agua, y resume el discurso con el beneficio de la perspectiva desde varios niveles. Primero, Olivera menciona al Banco Mundial y a Bechtel, resaltando la influencia negativa que los actores externos tuvieron sobre Bolivia. Luego, invoca la memoria colectiva, mencionando que los cochabambinos han sufrido injusticias por más de 500 años – en referencia a la colonización – y también a la más reciente falta de un suministro confiable de agua. Planteado de esta manera, el agua no es más que un elemento más de una larga lista de injusticias acumuladas.

Por último, Olivera especifica la raíz del conflicto: Aquellos que creen que los recursos naturales deben ser un derecho colectivo, y aquellos que creen que deben ser gestionados como propiedad privada. Este reconocimiento de la fuente fundamental del conflicto deja expuesta la manera en que la democracia se convirtió en el principal ámbito de conflicto en el discurso. Dado que el agua es un bien público, según la Coordinadora, las decisiones relacionadas con ese recurso debían ser tomadas por el sector público. Si Bolivia tuviera una verdadera democracia, según la representación que la Coordinadora tenía de la democracia, el pueblo seguramente no habría decidido privatizar el servicio de agua. Por lo tanto, es necesaria una verdadera democracia para que la población pueda tomar decisiones colectivas con respecto a los bienes públicos. La Coordinadora exigió una revisión del sistema político existente para poder cambiar el patrón de toma de decisiones.

¹²⁰ Olivera, Oscar. "La guerra del agua en Cochabamba y la construcción de espacios de rebelión y recuperación de nuestras voces." Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. Feb 2004.

El Gobierno: Aquellos a favor de la privatización

Tanto el gobierno local como el nacional tenían un fuerte interés político en la concesión, pues el proyecto Misicuni tenía una importancia real y simbólica. Había mucho por ganar si se mejoraba el servicio de agua en el valle. Habría sido un beneficio político, especialmente si los inversores extranjeros financiaban el proyecto y el gobierno no invertía los ya escasos recursos para llevarlo a cabo. Además, después de negociar el contrato con Aguas del Tunari, el gobierno no quería que la compañía se viera obligada a irse por las protestas sociales. Si el gobierno y el sector privado habrían de atraer inversiones extranjeras a la zona en el futuro, se creía que sería algo muy dañino. En el mismo sentido, y al punto que el gobierno local representaba la posición de la elite local, esta elite tenía un fuerte interés en establecer a Cochabamba como un entorno receptivo a las inversiones extranjeras. Al ostentar el poder, tenían mucho que ganar a partir de las relaciones con las compañías transnacionales que invertirían en Cochabamba.

El presidente Bánzer tenía un interés bastante particular en llevar a cabo el plan de privatización, puesto que el Misicuni fue el único tema de la campaña de 1997 entre él y Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada defendía el plan Corani – menos grandioso y de menor costo, por cierto – para aumentar el suministro de agua a Cochabamba. Bánzer se inclinaba a favor del proyecto Misicuni en su campaña, y tenía la firme intención de cumplir su promesa electoral concediendo el servicio de agua a una compañía que a su vez también trabajara en el Misicuni.

Una persona notable en el conflicto fue Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba. Originalmente él estaba a favor de la concesión, y formó parte del equipo de negociación. Sin embargo, con el crecimiento de la oposición, cambió su posición para ganar la reelección en octubre de 1999. Al ser muy criticado por la Coordinadora por haber apoyado inicialmente a la concesión, Reyes Villa abandonó la alianza gobernante que su partido, la NFR, o Nueva Fuerza Republicana, había formado con el ADN de Bánzer, sosteniendo que había sido engañado. Cuando los líderes de la Coordinadora fueron arrestados en abril, Reyes Villa se declaró

prisionero en solidaridad con los cautivos. En términos generales, Reyes Villa logró mantenerse al margen del conflicto, conservando su imagen y así continuar su carrera política.¹²¹ Su presencia relativamente fuerte en las elecciones presidenciales de 2002 es una prueba de que logró con éxito conservar su imagen.

El gobierno adoptó una estrategia represiva en respuesta a la oposición generada por el plan de privatización. Para hacer una demostración visible de la autoridad del gobierno, se anunció que no se permitiría una toma pacífica de la Plaza 14 de Septiembre por parte de manifestantes en febrero, y se convocaron a las fuerzas de seguridad para detener las protestas. Los enfrentamientos con los sectores movilizados durante la guerra dieron como resultado arrestos, heridos, y un muerto, y terminaron con la declaración de ley marcial durante la batalla final. Se intentaron negociaciones solo después de haber violentos enfrentamientos con los manifestantes, y la guerra solo vio su fin después de una semana de bloqueo total y la ciudad de Cochabamba convertida en zona de guerra.

El discurso del gobierno se centraba en su representación de la democracia. Al ser el bando con un rol de dominación positiva, el gobierno concentraba sus energías en hacer respetar su autoridad y decisión. Esto dio como resultado una negación implícita de que existiera un conflicto. El discurso se construía en torno a diversos ámbitos, utilizando un razonamiento económico para hacer hincapié en la necesidad de estabilidad y orden para así lograr la credibilidad suficiente para atraer las inversiones extranjeras. Esa noción marcaba un contraste notable con el discurso de la Coordinadora, en el cual los actores externos tenían un papel negativo, imponiéndose sobre el pueblo boliviano y socavando la capacidad que éstos tenían de decidir por sí mismos.

Los intereses del gobierno al promover la imagen de estabilidad política necesaria para atraer inversiones extranjeras se evidenciaba en las declaraciones de Luis Uzin, Superintendente

¹²¹ García, García y Quitón 78.

de Higiene Pública de Cochabamba: "Le pedimos a la población que no recurra a la presión [bloqueos, marchas] porque afectan la imagen regional y ahuyentan a los inversores, a la vez que echan por la borda las soluciones concretas cuando hay importantes avances en las negociaciones."¹²² Además, agregó "si se cancela el contrato de concesión con Aguas del Tunari, será prácticamente imposible obtener el compromiso de otra compañía internacional, pues se habrá creado una terrible impresión del país."¹²³ El Ministro de Comercio Exterior agregó que "Cochabamba pierde cuatro millones de dólares diarios a causa de la posición intransigente de la Coordinadora."¹²⁴ Las marchas, protestas, bloqueos, y otras manifestaciones visibles del conflicto eran calificados en el discurso como de un alto daño para la economía. El gobierno sostenía también que dichas acciones condenaban a Bolivia a no recibir inversiones extranjeras en el futuro. Ellos sostenían que al protestar, los cochabambinos se hacían un daño económico a sí mismos.

El discurso del gobierno resaltaba la importancia de la estabilidad para el país, y también de la democracia. El Ministro de Información, Ronald McLean, intentó desacreditar a la Coordinadora diciendo: "Quiero denunciar la actitud subversiva absolutamente financiada políticamente por los narcotraficantes, quienes pretenden desestabilizar el gobierno electo constitucional y democráticamente."¹²⁵ Según ese razonamiento, el gobierno se vio obligado a defenderse de una posible fuerza desestabilizadora financiada por los narcotraficantes. Esa afirmación también hizo hincapié en los aspectos formales del gobierno (electo constitucional y democráticamente), como una manera de darle legitimidad a la institución.

El Ministro de Gobierno declaró: "Quiero decir con la mayor seriedad y responsabilidad que el gobierno hará respetar su autoridad, y la policía y el ejército no permitirán que se tome la

¹²² Tomado de *Los Tiempos* (Cochabamba), 4 apr 2000, citado en García, García y Quitón 71.

¹²³ Tomado de *Los Tiempos* (Cochabamba), 4 apr 2000, citado en García, García y Quitón 72.

¹²⁴ Tomado de *Ultima Hora* (La Paz) 5 apr 2000, citado en García, García y Quitón 71.

¹²⁵ Quiroga, Carlos. "Government blames narcotraffickers for protests." 10 apr 2000.

http://dailynews.yahoo.com/h/nm/20000410/wl/bolivia_emergency_6.html

ciudad, mucho menos que se realice bloqueos y marchas.”¹²⁶ El gobierno respaldó sus amenazas enviando soldados para evitar la toma simbólica y pacífica de la Plaza 14 de Septiembre en febrero. McLean anunció que “el orden público será respetado y se defenderá la propiedad privada, evitando todo acto de violencia.”¹²⁷ El orden y la estabilidad eran muy importantes, como también la imagen del gobierno de turno. Otros Ministros de Estado explicaron: “Se ha dicho que existe libertad de expresión en democracia. Pero lo que no existe es la libertad de violar los derechos de otros bloqueando constantemente rutas y caminos, pues eso lastima a millones de bolivianos que quieren ir a trabajar.”¹²⁸ Esa declaración demostró aún más la representación que el gobierno tenía de la democracia en la cual la estabilidad cobra una gran importancia.

El discurso aparecido durante la declaración de la ley marcial es un ejemplo excelente de cómo el gobierno usó a la democracia como el principal ámbito de su discurso. Al defender la declaración de la ley marcial, McLean sostuvo que tenía como objetivos “proteger las libertades de los ciudadanos, mantener las reglas del juego, el espíritu de la democracia, la participación institucional, y la búsqueda de consenso.”¹²⁹ Aquí, las medidas extra-democráticas de la ley marcial fueron justificadas para defender la democracia. En referencia al presidente Bánzer, McLean dijo lo siguiente: “Vemos que es adecuado, para el bien común, declarar ley marcial para proteger el cumplimiento de la ley... el caos comenzaba a cundir justo cuando comenzábamos un importante plan de estímulo económico.”¹³⁰ Bánzer afirmó que se declaró la ley marcial para “terminar con la convulsión social y establecer mejores bases para un diálogo nacional.”¹³¹

¹²⁶ De *Ultima Hora*, La Paz, 4 feb 2000, citado en García, García y Quiton 68.

¹²⁷ “La Paz cercada por bloques campesinos que amenazan ampliarse.” Efe News Services, 3 apr 2000.

¹²⁸ De *Los Tiempos* (Cochabamba), *Opinión* (Cochabamba) y *Presencia* (La Paz), febrero y abril de 2000, citado en García, García y Quiton 70.

¹²⁹ “Bánzer decretó el estado de sitio a raíz de la convulsión social.” *La Nación*. 9 apr 2000

¹³⁰ “El caos empezaba a cundir.” *La Nación*. 9 apr 2000

¹³¹ “Nuevas protestas agravan la crítica situación en Bolivia.” *La Nación*. 11 apr 2000.

El discurso del gobierno revela una interpretación de la democracia muy diferente de la que tenía la Coordinadora. Los actores externos eran vistos como potenciales fuentes de capital, no como una amenaza a la soberanía boliviana. En lugar de construir su discurso en torno a la justicia, la memoria colectiva, la toma de decisiones, y el reconocimiento del conflicto, el gobierno prefirió basarse en argumentos económicos, y en la necesidad de crear una imagen pública de estabilidad, orden, y credibilidad. Parece haber, entonces, una constante negación del conflicto por el agua de parte del gobierno, pues en el discurso gubernamental no se reconocen las posiciones de quienes se oponían a la privatización. En el discurso, el gobierno calificó constantemente de dañinas a toda medida que hiciera visible el conflicto, e incluso justificó medidas como la ley marcial afirmando que eran necesarias para “proteger el espíritu de la democracia.”

La guerra del gas

Los sectores movilizados: Aquellos que se oponían a la exportación.

La identificación de los actores e intereses entre los sectores movilizados de la guerra del gas es compleja e intrincada. Miles de manifestantes representaban a muchos



Foto 5.2 Manifestantes se encuentran con gas lacrimógeno en La Paz (La Prensa)

sectores de la sociedad, con diversas ocupaciones, identidades, y exigencias. Un análisis exhaustivo de estos distintos actores va más allá del alcance del presente estudio, por lo que se tratará de examinar el efecto agregado de los sectores movilizados. Según el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), hacia fines de septiembre de 2003, los

los Políticos, Barrios y la CSTUCB, de la cual Felipe Quispe es el Secretario Ejecutivo. La

“Manifestantes alquilan gas lacrimógeno, 13 de septiembre.” Archivo ZPU, Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), Cochabamba, 2003. 4 Cd-100.

siguientes sectores eran algunos de los que participaban de las protestas y movilizaban adherentes.¹³²

- 1) COB
- 2) CSUTCB (Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo)
- 3) COR de El Alto
- 4) UPEA (Universidad Pública de El Alto)
- 5) Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas
- 6) Transportistas Interprovinciales
- 7) Sindicato de mineros
- 8) Movimiento Sin Tierra – MST
- 9) Trabajadores de la salud
- 10) Cocaleros de Las Yungas y el Chapare
- 11) Federaciones barriales de El Alto y La Paz

Como en la guerra del agua, este grupo diversificado se unió para rechazar la exportación del gas, y luego para exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. El objetivo del presente estudio no es examinar las exigencias de los sectores individuales. Sin embargo, cabe acotar que es imposible dejar totalmente de lado un estudio microsociológico de los distintos movimientos, sindicatos, y organizaciones, para determinar la importancia del tema del gas al compararlo con las exigencias individuales de cada grupo. No obstante, queda claro que la propuesta de exportación de gas natural fue el asunto temporal que unió a los distintos sectores en protesta contra las políticas del gobierno central.

A diferencia de la guerra del agua, no hubo aquí una representación central de las demandas. La Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas fue un intento de emular la experiencia de Cochabamba, pero no logró nunca el tipo de aglutinación de su predecesora. Pero esta Coordinadora, junto con la población mayormente aymara de El Alto liderada por Felipe Quispe, son dos actores sociales que se destacaron en la guerra del gas. La primera fue importante porque se organizó con el objetivo explícito de oponerse a la exportación de gas. La segunda no estaba representada en una sola organización central, sino en varias, particularmente las Federaciones Barriales y la CSUTCB, de la cual Felipe Quispe era el Secretario Ejecutivo. La

¹³² "Sectores movilizados en Bolivia, fin de septiembre." *Anuario 2003*. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Cochabamba, 2003. 1 Cd-rom.

guerra del gas fue iniciada por la población mayormente aymara del Departamento La Paz, y esta protagonista principal de la guerra del gas fue representada, centralmente si se quiere, por las federaciones y por la organización de Quispe.

En la medida en que se pueda centralizar la guerra del gas en un solo representante individual, probablemente ese sería Felipe Quispe. Este hombre podía articular no solo las demandas de los campesinos y aymaras, sino que representaba oficialmente a distintas organizaciones, pero también expresaba la demanda generalizada de cancelar el plan de exportación de gas y exigir la renuncia de Sánchez de Lozada. Su doble papel como Secretario Ejecutivo de la CSUTCB y miembro del Congreso y líder del partido que había obtenido el 6% de los votos en las elecciones anteriores complica la evaluación de los intereses de Quispe. La participación de Quispe en el sistema electoral parecía ser una contradicción con el deseo del pueblo aymara de independizarse del gobierno central, mientras que al mismo tiempo los grupos aborígenes exigían autonomía del control gubernamental. Él era el líder de un partido político que formaba parte de la oposición en el Congreso, y al mismo tiempo era la cara visible de un grupo que no solo participaba del conflicto, sino que también buscaba separarse del gobierno central. El discurso de Quispe, al igual que el de los otros grupos que lideraba, tenía un fuerte tono de nacionalismo aymara.

Los agricultores que él representaba prácticamente declararon una guerra civil, no solo por el gas, sino también reclamando la autonomía del pueblo aymara. El 25 de septiembre de 2003, Quispe declaró en una entrevista:

Los aimaras originariamente hemos sido dueños del territorio. Tenemos que reclamar que llegue a nuestras manos, por eso vamos a plantear la autodeterminación de la nación aimara en las zonas donde estamos alzados en armas. No vamos a dialogar todavía. Vamos a mantener nuestra posición revolucionaria, una posición radical.¹³³

Sobre el tema del gas, agregó que “el gas natural debe ser nacionalizado, debe pasar a manos de los indígenas, industrializado en la llamada Bolivia y recién vender a otros países.” Esa

¹³³ “Felipe Quispe asegura que los aimaras están alzados en armas.” 25 sep 2003.
<http://peru.indymedia.org/news/2003/09/3127.php>

declaración revela no solo el interés del sector aymara de controlar el gas natural, sino también su interés de obtener autonomía y separarse del gobierno central. Al recordar que el conflicto violento de la guerra del gas comenzó por un caso de justicia comunitaria en el altiplano, es posible ver cómo la autonomía y el control del gas están entrelazados en el discurso aymara.

El discurso nacionalista aymara invocaba la nostalgia por el grandioso pasado de los pueblos indígenas y la incompetencia de los líderes políticos de la Bolivia republicana. Una resolución de la CSUTCB y el MIP durante la guerra del gas decía que “el destino de este país estuvo durante 178 años en manos de la oligarquía personificada por la clase política que nos ha gobernado hasta ahora, y lo único bueno para lo que sirve es para hacer este *Qullasuyu*, la Bolivia hoy día, el país más pobre del continente. Por eso y mucho más, debemos retomar el poder para así recuperar la grandeza de nuestro *Qullasuyu*.”¹³⁴ *Qullasuyu* es la palabra aymara para referirse al Imperio Inca. El discurso también denuncia los crímenes perpetrados por el gobierno contra los pueblos indígenas, y enmarca la guerra del gas como una cuestión de justicia: “La ciudad de El Alto, la mayor y más pobre metrópolis de Bolivia, se levanta con una única voz y la fuerza de la desesperación de su pobreza, indignada con los asesinatos de sus padres, hermanos, e hijos de las comunidades, masacrados sin pensar.”¹³⁵

La Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas fue otro actor principal de la guerra debido a que su único objetivo era el tema del gas. Esta Coordinadora estaba compuesta de diversos grupos con experiencia en la guerra del agua, entre ellos las organizaciones de cocaleros, la FEDECOR, los Trabajadores Fabriles, grupos ambientalistas, y diversos movimientos sociales.¹³⁶ Estaba compuesta de esos y otros grupos, cada uno con distintos reclamos y demandas, pero que representaba un corte transversal de la sociedad civil que se

¹³⁴ “Resolución de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la dirección central del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). OSAL, Año IV, N 12, sep-dic 2003.

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas. “Resoluciones.” Cochabamba. 26 sep 2003.

oponía a la exportación. Si bien abarcaba a grupos con identidades indígenas, su discurso no incluía un fuerte componente nacionalista indígena.

Además del discurso nacionalista indígena de los sectores aymaras, el discurso de los sectores movilizados incluía los siguientes elementos: Denuncia de la indebida interferencia de los actores externos, referencias a la memoria colectiva con respecto a la explotación de los recursos naturales, y la declaración explícita de la representación que los sectores movilizados tenían de la democracia, especialmente en términos de participación popular y toma de decisiones. Además, el discurso a menudo se refería a la pobreza en Bolivia. Los dos primeros elementos – la denuncia de la interferencia extranjera y la memoria colectiva – están fuertemente relacionados con la interpretación de democracia de los sectores movilizados: En una democracia, el pueblo es soberano y no debe estar sujeto a interferencia externa; de igual manera, la memoria colectiva recordaba un tiempo de la historia boliviana en la cual la democracia – tal como la veían los sectores movilizados – no existía. La explotación de la plata en los tiempos coloniales, la explotación del estaño durante los gobiernos autoritarios, y la pérdida de la salida al Pacífico, todos esos hechos, según el razonamiento del discurso, sucedieron cuando Bolivia no era realmente democrática. El tercer elemento del discurso, entonces, une esas distintas interpretaciones y denuncia específicamente la falta de una verdadera democracia y los intentos de los sectores movilizados de construirla.

La denuncia de interferencia por parte de actores externos en los asuntos nacionales fue una parte importante del discurso de los sectores movilizados. La exportación del gas fue representada como un importante esquema generador de recursos para las compañías petroleras transnacionales que dejarían a Bolivia más pobre que nunca. La Coordinadora fue consultada en

una ocasión: “¿Estamos dispuestos a dejar que este negocio genere USD 1250 millones para las compañías transnacionales y USD 50 millones para los bolivianos?”¹³⁷

No fue suficiente con denunciar la interferencia extranjera como algo adverso para los intereses bolivianos; los sectores movilizados también la culparon por su indebida influencia en Gonzalo Sánchez de Lozada. Fue calificado de asesino, fue quemado simbólicamente en público, y ridiculizado por su acento “yanqui” al hablar castellano. Sánchez de Lozada era hijo de un diplomático boliviano, y pasó gran parte de su juventud en los EE.UU. Una líder de la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia anunció: “tenemos que salir y manifestar, es la única oportunidad que tenemos para expresarnos y defender lo que nos pertenece por derecho... Señor Goni, se lo digo con respeto, tenga dignidad, respétese a usted mismo, vea cómo el pueblo lo insulta, ya no se haga maltratar, váyase del país, déjenos en paz con nuestros indios a los que usted tanto odia, váyase a donde pertenece, váyase a Washington.”¹³⁸ Las organizaciones lideradas por Quispe agregaron: “¡Vete de nuestra tierra sagrada, gringo asesino!”¹³⁹

Los manifestantes ridiculizaban las estrechas relaciones de Sánchez de Lozada con los EE.UU.; en una publicación de los Obreros Fabriles, el gobierno boliviano fue acusado de bajarse los pantalones ante los EE.UU. por enésima vez.¹⁴⁰ El mismo documento también hacía referencia al papel de los EE.UU. en la guerra del agua, al decir que la Embajada de EE.UU. había presionado al gobierno boliviano a utilizar la fuerza para apaciguar las protestas. Si bien no tuvo un papel directo en la guerra del gas, la percepción de la influencia estadounidense era fuerte en el discurso de los sectores movilizados. Esto se debió quizás a la memoria colectiva, pues se había hecho una conexión entre el papel de los EE.UU. y las explotaciones del pasado. La misma publicación de los Fabriles afirmaba que Bolivia había sido obligada a ceder el grueso

¹³⁷ Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas. “Manifiesto de la primera movilización de recuperación y defensa del gas.” Cochabamba. 19 sep 2003.

¹³⁸ García Mérida, Wilson. “Así expulsamos al gringo Gonzalo Sánchez de Lozada.” Agencia de Información Fray Tito para América Latina. 21 oct 04.

¹³⁹ “Resolución de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la dirección central del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP). OSAL, Año IV, N 12, sep-dic 2003.

¹⁴⁰ Federación de Trabajadores Fabriles. “‘Guerra del gas,’ germen de unidad.” 26 de Marzo. 23. sep 2003.

de sus reservas de estaño a los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Los intereses de Sánchez de Lozada y de los EE.UU. eran representados como algo idéntico, y el presidente boliviano fue culpado de representar más los intereses extranjeros que los nacionales. Ese mote parece haber tenido resonancia; hacia el fin de los conflictos violentos, su renuncia fue una condición no negociable para el fin de la guerra del gas.

El papel de la memoria colectiva en el discurso está estrechamente relacionado con la denuncia de interferencia externa. Con respecto a los recursos naturales, existe una fuerte memoria colectiva del saqueo de los mismos en beneficio de los extranjeros. Hay una cierta disonancia cognitiva colectiva en Bolivia en el sentido de que un país tan rico en recursos naturales, en el pasado y el presente, pueda seguir siendo el país más pobre de Sudamérica. La invocación de la memoria colectiva en el discurso giraba en torno a tres temas: La historia de la explotación de los recursos naturales, el conflicto con Chile por la salida de Bolivia al Pacífico, y la memoria de protestas y revoluciones populares anteriores (principalmente la guerra del agua).

Los investigadores sostienen que el descubrimiento de las reservas de gas natural en el campo Margarita en Tarija se compara solo con el descubrimiento del Cerro Rico en Potosí, y la mina de estaño Salvadora. El razonamiento para recurrir a la memoria colectiva es el siguiente: Bolivia cuenta con valiosos recursos naturales, que fueron explotados por un pequeño grupo de élites nacionales y extranjeras. Las masas bolivianas nunca se beneficiaron de su explotación, y al día de hoy sufren los niveles de pobreza más altos de Sudamérica. La exportación del gas por parte de Pacific LNG, según la veían los sectores movilizadores, sería la última manifestación de esta tradición. Un documento señalaba que los sectores movilizadores – obreros, agricultores, amas de casa, estudiantes, profesionales, desempleados, por nombrar algunos – “no quieren cometer el mismo error histórico otra vez de ser cómplices del saqueo de los recursos y bienes del estado.”¹⁴¹

¹⁴¹ Federación de Trabajadores Fabriles. “‘Guerra del gas,’ germen de unidad.” *26 de Marzo*. 23. sep 2003.

Para agravar aún más la situación, la propuesta de exportación a través de un puerto chileno tocó un nervio distinto. Si bien el congreso boliviano ratificó un tratado de 1904 con Chile cediendo formalmente su litoral marítimo a cambio de una indemnización, muchos bolivianos siguen reclamando lo que ellos sostienen es territorio marítimo legítimo. A lo largo del siglo XX, la salida al mar tendió a aparecer en la escena nacional en momentos de tensiones políticas, manipulada por los líderes como una manera de unir al país. Sin embargo, esta vez el conflicto histórico con Chile se volcó en contra de los líderes nacionales – el plan de exportar gas a través de Chile fue tomado por los manifestantes como una fuente de oposición. La Coordinadora de la Recuperación y Defensa del Gas sostenía que Sánchez de Lozada, “confabulado con la oligarquía chilena, pretende entregar nuestro gas para fortalecer económica y militarmente a Chile.”¹⁴² Una vez más, los intereses de Sánchez de Lozada son sinónimo de intereses extranjeros, y la memoria colectiva de las maniobras geopolíticas chilenas generó una fuerte oposición al plan que era visto como de beneficio para Chile a costa de los bolivianos.

Luego de realizar una lectura del discurso de los sectores movilizados, parece ser que el concepto invocado con mayor frecuencia es la democracia. Gran parte de este discurso se construyó explícitamente en torno a la interpretación que éstos tenían. En primer lugar, el discurso calificaba de no democrático al supuesto gobierno democrático. La Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas declaró que “el pueblo se ha rebelado, indignado por el manejo antipatriótico y antidemocrático del gas natural, al descubrir que Sánchez de Lozada le otorgó nuestros recursos naturales y nuestra propiedad a compañías transnacionales...”¹⁴³ El carácter “antidemocrático” de la gestión de Sánchez de Lozada es probablemente el plan de exportar gas natural, que es entendido como algo en contra de la voluntad del pueblo.

¹⁴² Coordinadora de la Recuperación y la Defensa del Gas. “Manifiesto al pueblo boliviano.” Cochabamba. 04 oct 2003.

¹⁴³ Ibid

Quizás el elemento más frecuente del discurso fue la afirmación de que los sectores movilizados estaban construyendo una verdadera democracia de la gente. Un manifiesto del 22 de septiembre de 2003 de la Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas declaró solidaridad con los agricultores movilizados en el altiplano en rechazo a la “venta de gas a Chile.” Además, agregaron que las acciones militares contra los manifestantes

...are directed towards throwing off this democratic process that since April of 2000 has established a democracy of the people, with direct participation of those who are excluded; of the simple and hardworking people that are willing to defend this process that until now has only served a few politicians and businessmen.¹⁴⁴

Ese fragmento menciona a abril de 2000 en una referencia explícita a la guerra del agua. El discurso es prácticamente idéntico al de la guerra del agua, y de hecho probablemente venga de los mismos autores. En otros documentos, los grupos se refirieron a la experiencia de la guerra del agua, describiéndola como un “viaje histórico y heroico.” Si bien la percepción de una amenaza a los recursos naturales era distinta (exportación en lugar de privatización), el común denominador a ambas guerras fue la falta de control público sobre la toma de decisiones colectivas. La guerra del gas era vista como parte de una continua lucha y expresión de la verdadera democracia, llegando después de las victorias en la guerra del agua, la Rebelión Aymara, la resistencia a la erradicación de la coca, y los sucesos de febrero de 2003.¹⁴⁵ La misma invoca la idea de que el pueblo trabaja para construir una democracia según sus términos y que la democracia en el pasado solo sirvió los intereses de las élites.

La Coordinadora para la Recuperación y Defensa del gas declaró que “La lucha por el gas debe ser un espacio para la construcción y el fortalecimiento de la unidad del pueblo, lo cual permite la imposición de su voluntad.”¹⁴⁶ En un manifiesto, agregó que es posible

prescindir y derrotar a aquellos que hasta el día de hoy deciden por nosotros, a espaldas de nosotros y contra nosotros, esos llamados gobernantes que están ciegos, sordos y torpes ante las demandas de la población. La gente sencilla y trabajadora ha empezado a escribir, diseñar y construir una nueva democracia, la participativa, la de las organizaciones de multitudes con dirección colectiva y horizontal,

¹⁴⁴ Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas. “Nuestra solidaridad con los campesinos y nuestro repudio por la masacre de los gobernantes.” Cochabamba. 22 sep 2003.

¹⁴⁵ Federación de Obreros Fabriles. “Primer manifiesto de la ‘guerra del gas.’” 26 de Marzo. 23 sep 2003.

¹⁴⁶ Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas. 26 sep 03.

donde las decisiones sean tomadas por todos, sin que los caudillos o partidos políticos no den permiso para hacerlo.¹⁴⁷

En ese extracto se mencionan estructuras de participación, toma de decisiones colectivas, y de autoridad horizontal. Son todos elementos de una verdadera democracia, que marcan un contraste notable con la democracia real llevada a cabo por el gobierno. Los líderes y partidos políticos son mencionados específicamente, y la Coordinadora afirma que todos los bolivianos, no los representantes, deben ser quienes tomen las decisiones. La COB, por su parte, también enfatizaba su carácter democrático, declarando en la primera oración de su programa durante la guerra del gas que su asamblea decidía democráticamente los puntos de su plataforma.¹⁴⁸ El programa también agregaba: “Los bolivianos somos quienes debemos decidir sobre el gas, porque la soberanía y la dignidad reside en nosotros...” No solo se invocaba la soberanía del pueblo, sino también su dignidad, para justificar un mayor poder de toma de decisiones para el pueblo.

El MAS, en un comunicado del 13 de octubre de 2003, titulado “¡Defender la democracia!” afirmaba que

Cada vez que participamos y nos movilizamos, cada vez que les decimos no públicamente a los manipuladores, estamos construyendo una nueva democracia. Es una democracia basada y sostenida por la sociedad civil, en nosotros y para nosotros. Esta democracia es un peligro para los intereses de los poderosos, para la oligarquía que nos gobierna...enfrentada con estos intereses oscuros y manipuladores, ¡defender la democracia! Desenmascaremos a sus verdaderos enemigos: Aquellos que se aprovechan [de la democracia] solo para imponer sus decisiones e intereses.¹⁴⁹

La democracia es enarbolada como un ideal que debe ser defendido cuando se enfrenta con “manipuladores” y con la “oligarquía” que la utiliza para satisfacer sus propios intereses. Los ideales de la verdadera democracia son enaltecidos y practicados por los sectores movilizados. Esta representación idealizada de la democracia es el elemento central de este comunicado en particular. Además, Evo Morales llamó públicamente a un cambio en la forma oficial de democracia en Bolivia, sosteniendo que se inclinaba a favor de una “revolución pacífica” para

¹⁴⁷ Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas. “Manifiesto al pueblo boliviano.” Cochabamba. 04 oct 2003.

¹⁴⁸ COB. “Programa de lucha de la COB.”

¹⁴⁹ MAS. “¡Defender la democracia!” 13 oct 2003.

pasar de la actual “democracia representativa” a una “democracia participativa”¹⁵⁰. La exigencia de una democracia participativa fue otra parte del discurso de los sectores movilizados, quienes exigían una “asamblea constituyente.” Esta asamblea incluiría a todos los sectores de la sociedad boliviana y tendría como objetivo rediseñar la organización política del estado, y, según los sectores movilizados, permitiría la inclusión de la toma de decisiones comunitarias y la democracia participativa o directa. Cuando Carlos Mesa asumió la autoridad, prometió la ejecución de tal asamblea, programada para el año 2005.

Los sectores movilizados exigían el control público de los recursos gasíferos. El gas natural, según los Fabriles, era un “patrimonio nacional, y por lo tanto su venta y exportación debe ser consultado con el pueblo, los dueños legítimos y soberanos del destino de Bolivia.”¹⁵¹ Estaba claro que si se le consultaba, el pueblo boliviano optaría por redistribuir la riqueza a nivel nacional. La misma publicación exigió que las decisiones se tomaran de abajo hacia arriba, invocando un modelo de toma de decisiones en democracia diferente de la experiencia de los manifestantes. Aún más, en un manifiesto leído por Oscar Olivera al comienzo de la guerra del gas, se declaraba que:

Hasta hoy, solamente unos pocos llamados líderes de partidos han hablado por nosotros, han decidido por nosotros, así comprometiendo no sólo el presente y el futuro bienestar de los bolivianos, pero aun peor, han puesto en riesgo nuestra propia existencia como nación.¹⁵²

La Coordinadora para la Recuperación y la Defensa del Gas termina ese manifiesto diciendo: “Fuera a aquellos que han demostrado que no sirven para nada y que dejen paso a la gente autoorganizada, y que ahora con sus actitudes y medidas están poniendo en riesgo la propia existencia como nación.” Los defensores de la exportación de gas y los partidos políticos son vistos como traidores, y por lo tanto deben ser reemplazados por una verdadera democracia.

¹⁵⁰ “Evo propone ‘revolución pacífica’ para una democracia participativa.” *La Prensa*. 03 oct 03.

¹⁵¹ Federación de Obreros Fabriles. “Primer manifiesto de la ‘guerra del gas.’” *26 de Marzo*. 23 sep 2003.

¹⁵² Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas. “Manifiesto al pueblo boliviano.” Cochabamba. 04 oct 2003.

Desde el punto de vista de los sectores movilizados, las consecuencias de perder la pelea por la exportación del gas serían desastrosas. “Si no controlamos de manera autónoma nuestros recursos naturales, nunca seremos un país independiente.”¹⁵³ El gas natural, por tanto, es más que un recurso natural, es una herencia. Algunos manifestantes declaraban: “Debemos cuidar el gas, es el futuro de los niños bolivianos.” Puesto que se trata de un recurso natural lucrativo, los sectores movilizados tenían urgencia por “recuperarlo y defenderlo.” La COB agregó: “La industrialización es un imperativo histórico y es necesarios para el desarrollo del país. Recuperar el gas es un deber patriótico y revolucionario.”¹⁵⁴

El siguiente fragmento tomado de un documento de la Coordinadora habla sobre la toma de decisiones:

Los eventos gloriosos de octubre ya pasaron, en donde el pueblo mostró su decisión firme y dedicada de cambiar las estructuras económicas y políticas, que hasta hoy solo sirvieron para quitarnos nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio, y que ha concentrado la toma de decisiones en la casta política y empresaria, y los partidos políticos han decidido y han hablado por nosotros.¹⁵⁵

Este fragmento es un excelente ejemplo del reconocimiento del conflicto por el gas. La Coordinadora hablaba de su “firme decisión de cambiar las estructuras económicas y políticas.” Ese reconocimiento explícito del conflicto era muy diferente al discurso que favorecía la exportación. Al exigir un cambio, reconoce la divergencia de intereses de aquellos que ostentan el poder y favorecen la exportación, y enmarca al primer grupo como algo negativo y dañino para los intereses bolivianos.

El discurso de los sectores movilizados utilizó varios ámbitos para representar la democracia. Dejando de lado por un momento el discurso nacionalista indígena, los sectores movilizados invocaron la influencia negativa de los actores externos, la memoria colectiva, y una exigencia explícita de una verdadera democracia en el conflicto. Si bien la guerra del gas se

¹⁵³ “Bolivia: Miles de comerciantes marchan en contra de la venta del gas.” 30 sep 2003. <http://www.rebellion.org/bolivia/030930gas.htm>.

¹⁵⁴ COB. “Programa de lucha de la COB.”

¹⁵⁵ Coordinadora para la Recuperación y Defensa del Gas. “Unidad de pensamiento y acción frente a las principales tareas y enemigos del pueblo.” Cochabamba. 30 oct 2003.

trataba del control de un recurso natural, al examinar el discurso se descubren las distintas interpretaciones de la democracia como raíz del conflicto. Al igual que en la guerra del agua, los sectores movilizados exigían una revisión del sistema político existente y que se cambiara a un sistema que cumpliera sus expectativas de una verdadera democracia. Tal como se verá en la próxima sección, el gobierno también invocaba su propia interpretación de democracia en el discurso.

El gobierno: Aquellos a favor de la exportación

La presente investigación pone al gobierno y a los promotores de la exportación de gas de un mismo lado. Sin embargo, es importante reconocer primero que no todos los elementos del gobierno estaban a favor de Pacific LNG. De muchas maneras, el gobierno nacional tenía mucho que ganar con la exportación, tanto simbólica como económicamente. Bolivia pasaría a ser una inversión atractiva, y se convertiría en un centro de generación de energía para el Cono Sur. El Presidente y su consejo de ministros estaban a favor del plan y lo promovían activamente. No obstante, es importante destacar que los partidos aliados con el MNR habían manifestado su rechazo al plan de exportación. En enero de 2003, el ex presidente Jaime Paz Zamora del MIR anunció su oposición.¹⁵⁶ El gobierno nacional comenzó a dividirse cada vez más sobre este tema, a medida que la oposición se hacía evidente. En octubre, cuando el vicepresidente Mesa se distanció públicamente de la administración después de que la violencia alcanzara su nivel más intenso en las calles, Sánchez de Lozada se vio muy debilitado.

El discurso del gobierno durante la guerra del gas reveló su estrategia. Al igual que la guerra del agua, se enfatizó la importancia de la inversión privada y la ley y el orden para establecer la credibilidad del país. También incluía amenazas y denuncias de los sectores movilizados calificándolos de narcoterroristas que amenazaban la estabilidad del gobierno electo. De una manera similar al discurso de los sectores movilizados, estos elementos se unían

¹⁵⁶ "Ex-president scorns LNG export plans." *The America's Intelligence Wire*. 7 ene 2003.

con una invocación explícita de la representación que el gobierno tenía de la democracia. Tal como se esperaba, esa visión difería enormemente de la de los sectores movilizadas.

Según estaba identificado en las distintas propuestas y documentos, como el BPRS, el gobierno consideraba a la inversión privada como de suma importancia para la economía boliviana. En un documento que defendía la política de hidrocarburos, Sánchez de Lozada defendía sus argumentos en distintas bases.¹⁵⁷ Durante muchos años, afirmaba el mandatario, el estado boliviano controló diversos aspectos de la capacidad productiva del país. Sin embargo, en el proceso de modernización, este intervencionismo y excesivo control desaparecieron, generando una transformación del estado. Para facilitar ese proceso se aprobaron un cierto número de leyes. Su posición era de que “el crecimiento de la inversión privada es muy importante, para liberar al estado de esa responsabilidad y garantizar la iniciativa libre, establecer derechos, garantías, y obligaciones que se apliquen a todos por igual, nacionales o extranjeros, que inviertan en el país.” Estas leyes hacen posible la “estabilidad legal” tanto para el estado como para los inversores por igual. Las inversiones eran vistas como algo vital para el futuro de Bolivia. Agregó además que era necesario “crear conciencia de que Bolivia no tiene futuro si no exportamos el gas.”¹⁵⁸

Al hablar de leyes, garantías, derechos, y obligaciones, Sánchez de Lozada hizo hincapié en la importancia de la estabilidad y la credibilidad para atraer las inversiones. Además, manifestó que “la paz y el orden son aspectos importantes para el avance del país. Los anuncios y presiones como los bloqueos generan un impacto negativo de gran magnitud en diferentes sectores, como el turismo.”¹⁵⁹ Las tácticas de la oposición fueron denunciadas como adversas para la estabilidad y el orden, como también para el avance del país. Este avance se entiende

¹⁵⁷ “Alegato de Gonzalo Sánchez de Lozada en defensa del decreto 24806.” CEDIB Anuario 2003.

¹⁵⁸ “La Paz to decide on gas route by December.” *LatAm Energy*. 25 jun 2003. v6 i12 p8(1)

¹⁵⁹ “Presidente advierte que hará respetar el estado de derecho.” *La Opinión* (Cochabamba) 20 sep 2003.

como la atracción de inversiones a Bolivia. Al relacionar las movilizaciones con un retraso en el desarrollo, Sánchez de Lozada intentó en su discurso desacreditar a los sectores movilizados.

Además de calificar a las tácticas de los sectores movilizados como un detrimento para el crecimiento económico, Sánchez de Lozada sostuvo que su gobierno se encontraba sitiado por narcoterroristas y otros que intentaban derrocarlo. Este discurso parece haber sido diseñado para atraer la atención a los sucesos tocando dos de las mayores preocupaciones que tenían los actores externos en cuanto a seguridad, especialmente los EE.UU.: La amenaza del narcoterrorismo y los regímenes inestables y no democráticos. El 11 de octubre un vocero del gobierno declaró que un “un proceso sedicioso de golpe de Estado instigado políticamente por Evo Morales y otros dirigentes.”¹⁶⁰ Agregó además: “Quiero decirle a Evo (Morales), al *Mallku*, (Felipe Quispe), y a todos aquellos que se han unido para traerle violencia y sangre a la familia boliviana que no tendrán éxito.”¹⁶¹ Los líderes de la oposición eran mostrados como traicioneros y violentos, y como un peligro para todos los bolivianos.

Para el gobierno, el orden y la estabilidad estaban estrechamente relacionados con su representación de la democracia. Sánchez de Lozada hacía un fuerte énfasis en el orden, al afirmar que “los que no quieren aceptar que las cosas se deben hacer con orden obviamente tienen que atender a las consecuencias...la autoridad y la responsabilidad del gobierno y el presidente democrático deben ser aceptadas.”¹⁶² El gobierno declaró en reiteradas ocasiones que su posición era defender la democracia. El Presidente afirmó que no habría de reemplazar la “democracia con una dictadura sindical... crear un nuevo totalitarismo, una nueva dictadura que enfrenta región con región, clase contra clase, etnia contra etnia. No lo permitiremos, se restablecerá el orden y serán derrotados los que cometan sedición.”¹⁶³ El tono de las declaraciones es amenazante, probablemente arraigado en la filosofía de que un gobierno tiene la

¹⁶⁰ “Gobierno militariza El Alto y acusa a Evo de gestar un golpe.” *La Prensa*. 12 oct 2003.

¹⁶¹ “El Presidente no renunciará a su cargo, pese a la violencia y a Mesa.” *La Razón*. 14 oct 2003.

¹⁶² “Presidente advierte que hará respetar el estado de derecho.” *La Opinión* (Cochabamba) 20 sep 2003.

¹⁶³ “El Presidente no renunciará a su cargo, pese a la violencia y a Mesa.” *La Razón*. 14 oct 2003.

obligación de defenderse de todo ataque. Al igual que los sectores movilizados, el gobierno afirmaba explícitamente que defendía la democracia mediante un restablecimiento del orden.

En los primeros días de octubre de 2003, Sánchez de Lozada presentó su visión del pueblo boliviano, intentando minimizar la cada vez más visible guerra del gas:¹⁶⁴ “Los bolivianos trabajan y producen, pero hay una pequeña minoría que bloquea y utiliza instrumentos de violencia, pero estoy satisfecho al ver esta vasta mayoría de bolivianos que producen, invierten, y creen en Bolivia, creen en su país, en su familia, y en el futuro de sus hijos.” En La Paz, “donde tienen lugar la mayoría de las protestas, bloqueos, y problemas, la gente va a los mercados, las fábricas trabajan, hay transporte... se discute mucho sobre si exportar o no gas... pero mientras tanto – porque llevará un largo tiempo resolver e implementar esto – es importante producir soja y otros productos como azúcar, y participar en otras producciones que brinden empleo, actividad económica, y porque debemos salir de esta crisis trabajando y no a través de la violencia.”

En este ejemplo, hay una negación de la existencia del conflicto por el gas natural. El problema, según lo presenta Sánchez de Lozada, no es la cuestión de la exportación del gas, sino de lograr estabilidad para asegurarse que Bolivia produzca. Se minimiza el conflicto por el gas y se lo hace ver insignificante, y no se reconoce la legitimidad de quienes se oponen al plan de exportación. Además, a medida que empeoraba el conflicto, el gobierno insistió continuamente en que no se había tomado una decisión sobre el destino del gas natural boliviano. La promesa de un referendo sobre el gas natural llegó muy tarde, y las movilizaciones no se detuvieron sino hasta el 17 de octubre, cuando renunció Sánchez de Lozada.

Embajada de EE.UU.

Un tercer actor notable en el conflicto es la Embajada de los Estados Unidos. A menudo mencionada por los movimientos sociales y políticos en Bolivia como una influencia indebida en

¹⁶⁴ “Goni minimiza los conflictos y descarta el estado de sitio.” *La Prensa*. 05 oct 2003.

el gobierno boliviano, la Embajada de EE.UU. en La Paz ha sido blanco de muchas críticas, específicamente por su papel en promover los programas de erradicación de la coca que han generado violencia en las regiones productoras de coca. Además, la poco popular política de erradicación de la coca es mencionada frecuentemente como un conflicto latente que se manifestó en el punto más caliente de la guerra del gas. Estados Unidos había apoyado firmemente al reformista y propulsor del libre mercado Sánchez de Lozada, y si bien no había evidencias que sugirieran que el apoyo de Washington a Sánchez de Lozada iba más allá del discurso, la percepción que había de una intervención estadounidense en la guerra del gas era importante. La Embajada de EE.UU. merece la atención en el presente estudio ya que su discurso acerca de lo acontecido en la guerra del gas también se había construido fuertemente en torno a su interpretación oficial de democracia.

Al momento del conflicto, ya estaba firme en vigencia el paradigma de seguridad post 11 de Septiembre. Dado que Bolivia no es un interés estratégico clave en lo que respecta a seguridad, la superpotencia mundial no tenía un interés directo en el conflicto. Por lo tanto, mientras por un lado apoyaba plenamente al gobierno de Sánchez de Lozada, había pocas posibilidades de que EE.UU. interviniera directamente en la guerra. El gas natural que Bolivia podría haber exportado a los mercados estadounidenses tiene una amplia competencia y como materia prima revestía poca importancia. Sin embargo, la posición de EE.UU. era que la exportación del gas sería buena para Bolivia. Según una entrevista con el embajador de EE.UU. en Bolivia, David Greenlee, EE.UU. tenía cuatro intereses principales en Bolivia:¹⁶⁵ Primero, la consolidación de la democracia boliviana, seguida de cerca por el desarrollo económico del país a través de sistemas y mercados abiertos. El tercer interés más importante de EE.UU. es sacar a Bolivia del circuito coca-cocaína; y en cuarto lugar, la seguridad de las fronteras y la integridad de los sistemas. Finalmente están los programas de ayuda de EE.UU., concentrados en áreas de

¹⁶⁵ US Ambassador David Greenlee. Personal interview. La Paz, Bolivia. 3 Mar 2004.

desarrollo alternativo, apoyo a las operaciones antinarcoóticos, y otros proyectos USAID. Si bien Bolivia no es un interés estratégico importante, según el Embajador Greenlee, en caso de estallar, la inestabilidad podría contagiarse en la región. En caso de renuncia del Presidente electo, a lo cual EE.UU. se oponía, su interés principal sería buscar una transferencia constitucional de poder al vicepresidente. Cuando Carlos Mesa se distanció públicamente de Sánchez de Lozada pero no renunció, dejó abierta la posibilidad de una transferencia constitucional y ordenada de poder. Ese era el resultado menos desfavorable para EE.UU.

El discurso proveniente de la Embajada de EE.UU. en La Paz era de total apoyo a Sánchez de Lozada y preocupación por las consecuencias de su despojo por la democracia Boliviana:

Estamos muy preocupados por el ataque contra la democracia y el orden constitucional en Bolivia. Expresamos nuestro pleno apoyo a este gobierno, elegido constitucional y democráticamente. Este gobierno no debe ser reemplazado por uno impuesto por la fuerza o por la violencia delincuencial. El proceso democrático cuenta con todos los instrumentos y las instituciones necesarias para guiar a Bolivia hacia un futuro más próspero.¹⁶⁶

Sin embargo, EE.UU. era muy cuidadoso de no repetir errores del pasado, como amenazar explícitamente con retirar la ayuda si los hechos no eran de su agrado. Durante las elecciones presidenciales de 2002, claramente alteradas por la fuerte candidatura de Evo Morales, el entonces Embajador de EE.UU. Manuel Rocha les advirtió a los bolivianos que la elección de Morales haría peligrar la ayuda estadounidense. Una vez más, en este fragmento, se menciona explícitamente, y también hay una negación del conflicto. Las movilizaciones son calificadas de violencia criminal, y no hay un reconocimiento de la oposición a la exportación del gas.

Representaciones de democracia de los distintos actores

El análisis previo del discurso demostró la manera en que los actores utilizaron sus representaciones de la democracia en el conflicto, y que dichas representaciones se basaron en razonamientos divergentes. Los sectores movilizados utilizaron en su representación de

¹⁶⁶ United States Embassy in La Paz, Bolivia. "Comunicado de la Embajada de los Estados Unidos." 13 Oct 2003. <http://bolivia.usembassy.gov/DOCS/101356.htm>

democracia la justicia, la memoria colectiva, la influencia negativa de los actores externos, la participación popular, y la toma de decisiones. El gobierno, por su parte, utilizó un razonamiento económico, e hizo hincapié en la necesidad de estabilidad, credibilidad, y ley y orden para atraer las inversiones extranjeras. Ambas partes decían ser los practicantes de la verdadera democracia. Esta justificación se enmarcaba en torno a roles de dominación positiva y negativa: El gobierno insistía en que debía respetarse su autoridad, y los sectores movilizados sostenían que ellos eran más democráticos que el gobierno porque sus organizaciones permitían una toma popular de decisiones y tenían estructuras de autoridad horizontales. De igual manera, si bien el gobierno en algunos casos intentó negar la existencia de un conflicto, los sectores movilizados buscaron participar explícitamente y reconocer el conflicto.

¿Qué revela este discurso sobre la relación entre los actores y la estructura social que generó el conflicto? La pregunta quizás puede considerarse en el contexto de otra pregunta: ¿Por qué la democracia surge como el objeto del conflicto? En un conflicto claramente generado por los recursos naturales, o quizás en otros conflictos latentes, ¿por qué, al examinar el discurso, la democracia prevalecía tanto? Existen diversas interpretaciones posibles:

- Por muchas razones, hacia fines de la década del '90 había surgido una gran frustración en Bolivia. La NPE de 1985, además de su propósito de obtener estabilidad macroeconómica, también intentó cambiar el modelo del estado boliviano, de un corporativismo estatal, vigente desde 1952, a un modelo de libre mercado. Al disminuir tremendamente el rol del estado en la economía, la incapacidad del estado para satisfacer las demandas sociales más la constante pobreza generaban frustración, la cual se vio exacerbada dada la riqueza en recursos naturales con que cuenta el país. Roberto Laserna ofrece un recordatorio muy importante relacionado con esta interpretación. En el pasado, el conflicto generado por el movimiento de corporativismo estatal no estaba *contra* el estado sino *a favor* del estado.¹⁶⁷ Es decir, el conflicto no era

¹⁶⁷ Laserna 2000.

necesariamente gobierno contra oposición, sino un conflicto por un mayor protagonismo del estado. Al igual que esta lucha pasada, los conflictos de las guerras del agua y el gas tampoco eran *contra* el estado. Los sectores movilizados en la guerra del agua exigían un control estatal (público) del agua, al igual que subsidios; en la guerra del gas, los sectores movilizados exigían un mayor protagonismo de YPFB, y que el gas fuese industrializado en Bolivia por manos bolivianas. Dichas exigencias son similares a las del movimiento corporativista, que convirtió al estado boliviano en el centro político, social, y económico del país. A principios del siglo XXI, el estado ya no cumplía ese rol.

Además, la constante pobreza es una fuente de frustración. El presente estudio ya ha examinado el debate por las reformas estructurales y la pobreza en Bolivia. La percepción generalizada entre los sectores movilizados es que la pobreza ha aumentado desde 1985. Lejos de reducir la pobreza, las reformas estructurales parecen haberla aumentado. Dado que los partidos políticos, dentro del sistema de coaliciones, habían creado un consenso para asegurar la aprobación de las reformas estructurales, recibieron gran parte de la culpa por la continua pobreza en Bolivia. Esta frustración económica se convirtió entonces en una frustración política, dado que los regímenes políticos de todos los partidos implementaron las mismas reformas básicas de libre mercado. Aún mas, según el BPRS, la marginalización del proceso de toma de decisiones (políticas) es directamente proporcional al nivel de pobreza de un grupo social particular. Los sectores más pobres de la población, principalmente los pueblos indígenas, permanece marginados de la toma de decisiones y no están representados adecuadamente en las instituciones estatales. Esto, según el BPRS, pone sobre el tapete la base de la democracia y el gobierno boliviano. Debido a la constante pobreza y al aumento en la desigualdad, los partidos políticos y el sistema político eran vistos cada vez más como corruptos, poco representativos, y controlados por una pequeña elite despreocupada de la situación de los pobres (que son mayoría en Bolivia).

- Álvaro García Linera afirma que la crisis política de la democracia representativa de libre mercado y la cada vez mayor visibilidad de los conflictos a principios del siglo XXI no son más que el “ocaso de un ciclo estatal.”¹⁶⁸ La organización liberal del estado, que nunca estuvo realmente arraigada en la sociedad boliviana, está tomando una forma diferente, erosionando la hegemonía del modelo vigente desde el regreso a la democracia. Existe una percepción cada vez más mayor de que la democracia tal como se lleva a cabo en Bolivia desde 1982 no es más que una simulación ritual que tiene lugar cada cuatro o cinco años. La democracia entendida como la participación de la ciudadanía en la gestión de los bienes públicos ha sido dañada por las presiones de las embajadas extranjeras, las organizaciones internacionales, y los inversores privados, reduciendo a cero la posibilidad de que los bolivianos puedan decidir el camino de la economía, el estado, y la vida colectiva. El estado boliviano es monoétnico, en el sentido que no representa la diversidad boliviana en términos de raza, cultura, y formas de organización; por lo tanto, su legitimidad será siempre cuestionada por las culturas y etnias excluidas de la administración gubernamental.¹⁶⁹

Esta interpretación expresada por García Linera está claramente representada en el discurso de los actores. La democracia, interpretada por los sectores movilizados como el poder de los bolivianos para tomar decisiones sobre la vida nacional, no existe en Bolivia. Los conflictos de los últimos años, entre ellos las guerras del agua y el gas, son síntomas de este conflicto mayor por la toma de decisiones.

- En un informe para la UNDP, Calderón y Gamarra sostienen que existe una crisis de representación y una crisis del sistema de democracia pactada en Bolivia a principios del siglo XXI. Por diversas razones, los partidos políticos en particular prácticamente han perdido toda su legitimidad como representantes de la sociedad civil. Las reformas de los '90 que redujeron el

¹⁶⁸ García Linera, Álvaro. “El ocaso de un ciclo estatal.” *Democratizaciones plebeyas*. La Paz: Muela del Diablo, 2002, 149-176.

¹⁶⁹ García Linera 169.

papel del estado y descentralizaron su autoridad, como la Ley de Participación Popular y Descentralización, también afectaron las operaciones de los partidos políticos. Dichas reformas redujeron los medios de compensación, principalmente en forma de puestos en el gobierno, disponibles para los miembros del partido, y el clientelismo que era parte del sistema partidario, se vio socavado. Luego de esas reformas, los partidos no incorporaron un nuevo liderazgo ni establecieron vínculos con la sociedad civil. Si bien las reformas habían sido instauradas con la intención de consolidar de los partidos, tuvieron el efecto opuesto, creando un sistema de representación popular en el cual los miembros del partido se sentían cada vez más excluidos de los partidos nacionales. Además, el Congreso perdió legitimidad por otorgar protección legal a sus corruptos miembros.

El informe de Calderón y Gamarra, entonces, sentencia que el sistema de democracia representativa en Bolivia es disfuncional. Por lo tanto, la democracia era el objeto del conflicto porque no cumple como debiera su función de mecanismo de toma de decisiones y gestión del conflicto.

- La democracia fue el objeto en las guerras del agua y el gas porque la oposición generada por las políticas económicas sacó a la luz la manera en que se tomaban las decisiones sobre los recursos colectivos. El conflicto que surgió involucró al sistema político del estado, dado su rol como cuerpo de toma de decisiones colectivas en la sociedad. La democracia, a su vez, surgió como el elemento central del discurso porque es el sistema político reinante en Bolivia, a través del cual se toman las decisiones sobre los bienes públicos. Notablemente, la oposición no cuestionaba la democracia en sí – sino solamente a la manera en que ésta se practica en Bolivia. Esto revela una interpretación de la democracia muy diferente de la del gobierno a favor de las políticas. Para los sectores movilizadados, dado que en una democracia la toma de decisiones está en manos del pueblo, exigían una verdadera democracia, una democracia que permitiera el control público de los recursos naturales. Sin embargo, el gobierno como actor oficial del sistema

político, sostenía que en una democracia las decisiones no deben ser tomadas por hordas en las calles, sino a través del sistema político, y que las protestas dañaban la economía y la imagen de Bolivia. Dentro del grupo coordinado imperativamente (el estado boliviano), el control de los recursos naturales estaba inextricablemente relacionado con el sistema de toma de decisiones: La democracia.

En este contexto, la idea de Simmel de que el conflicto puede generarse cuando los actores perciben una amenaza a una estructura común de la cual ambos bandos forman parte tiene un atractivo intuitivo. La democracia es potencialmente esa estructura mayor que tanto los sectores movilizados como el gobierno decían proteger y defender. La construcción del discurso en torno a la democracia respondía a una estrategia utilizada por los actores para ir tras sus intereses.

Estas cuatro interpretaciones de por qué la democracia surgió como el objeto del conflicto en las guerras del agua y el gas pueden ser útil al considerar la relación existente entre los actores y la estructura que generó el conflicto. Está claro que la idea de lo que es y debe ser la democracia es una fuente de conflicto en Bolivia. El objetivo de examinar las diferentes interpretaciones no es determinar cuál es la correcta, sino considerar el contexto estructural mayor del conflicto y también la naturaleza particular de los actores. Si bien puede ser tentador decir que la democracia en Bolivia era disfuncional en esos dos casos, la democracia no es la categoría de análisis del presente estudio. El punto no es definir qué es la democracia en Bolivia, mucho menos decidir si funciona bien o no, sino examinar las distintas representaciones que los actores tenían de ella. Al analizar el conflicto, considerar el discurso – principalmente, las representaciones de la democracia – se logra una conceptualización del lugar adoptado por los actores en el conflicto.

Lo más revelador del discurso empleado es que revela la tensión existente en la sociedad boliviana entre los grupos con roles de dominación positiva y negativa. Cuando los sectores movilizados hablan o escriben sobre revisar el sistema político de Bolivia, revelan la fuente estructural del conflicto. La revisión del sistema político del país tiene como objetivo específico cambiar las relaciones de dominación. El conflicto es entre un actor con poder sobre el otro en términos de cómo se toman las decisiones. El gobierno – la parte que apoya el status quo y la conservación de los roles de dominación – también construyó su discurso en torno al sistema político, pero con una interpretación diferente de la democracia. Los actores con roles de dominación positiva y negativa tenían interpretaciones divergentes de cómo debían tomarse las decisiones, las cuales generaron el conflicto. La democracia es el sistema político de Bolivia, por eso el discurso empleado por los actores se construyó en torno a la idea de democracia.

¿Qué dice la aparición de la democracia como objeto sobre la relación entre los actores y la estructura a la hora de generar el conflicto? La hipótesis de este estudio plantea que las guerras del agua y el gas pueden conceptuarse en tres niveles diferentes. El objeto de conflicto, a simple vista, eran los recursos naturales. Debido a diversos rasgos históricos específicos a Bolivia, los recursos naturales son un tema saliente. Sin embargo, otros conflictos latentes – también particulares a Bolivia – parecen manifestarse en el clímax del conflicto por el agua y el gas. En este contexto, el discurso revela información sobre las fuerzas históricas particulares a Bolivia. No obstante, es importante reconocer que si no existieran el conflicto entre los actores o el conflicto estructural, las guerras no habrían sido las mismas. La conceptualización de las guerras en tres niveles diferentes revela la influencia tanto de las fuerzas históricas particulares a los actores como de las estructuras sociales que tienden a generar el conflicto. La existencia de la democracia como el objeto del conflicto es el resultado de las estructuras y los actores.

Sostener que el conflicto manifestado en las guerras del agua y el gas de no haber estado los actores o la estructura social parece una afirmación bastante obvia. La cuantificación del peso

relativo de ambos factores exigiría una operacionalización de las variables que va más allá del alcance del presente estudio. Sin embargo, en estos casos, y después de considerar el modelo de Dahrendorf y analizar a los actores en su discurso, queda evidenciado que tanto la estructura como los actores tuvieron un papel significativo en la generación y manifestación del conflicto.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN

La presente investigación ha examinado diversos aspectos de las estructuras y los actores involucrados en las guerras del agua y el gas. La hipótesis propone que los recursos naturales en cuestión en ambas guerras, al igual que otros conflictos latentes, presentaron un tema saliente que sirvió para revelar el conflicto sobre distintas interpretaciones de la democracia.

Al invocar la democracia en el discurso como el objeto del conflicto, los actores revelan la manera en que se posicionan en la sociedad. Las representaciones que los actores tienen de su posición se ven alimentadas por el debate sobre la pobreza y el legado de las reformas estructurales. Hablando en general, los sectores movilizados y el gobierno son los bandos opuestos en este debate. Por su parte, los sectores movilizados sostienen que la pobreza se ha empeorado en Bolivia y que el plan de ajuste estructural es el culpable, rechazando el modelo económico y el sistema político que lo implementaron. El gobierno, admitiendo que la pobreza sigue siendo el mayor desafío del país, sostiene que la pobreza ha sido reducida desde la implementación del plan de ajuste estructural, y no cuestiona el modelo de libre mercado sobre el cual se basaron las reformas.

El desafío de la presente investigación, como se menciona anteriormente, es relacionar a los actores con la estructura social; es decir, las particularidades históricas de las guerras del agua y el gas que le darían forma a la sociedad. Por un lado, este estudio utilizó una revisión de las estructuras económicas, políticas, y sociales de la historia boliviana para interpretar a los diferentes actores. Por otro lado, la teoría del conflicto social de Ralf Dahrendorf ofreció un marco teórico para considerar los orígenes estructurales del conflicto existente en todo grupo coordinado imperativamente entre un actor con un rol de dominación positiva y otro con un rol de dominación negativa. Su modelo de cuatro pasos fue útil al examinar el desarrollo del conflicto. Sin embargo, es necesario considerar el cuarto paso del modelo, en el cual el conflicto da como resultado cambios estructurales en la relaciones sociales.

Según el modelo conflictivo de sociedad de Dahrendorf, en un grupo coordinado imperativamente, como el estado, el conflicto es generado inevitablemente por la represión de un grupo social sobre otro. Este conflicto genera cambio social. Este modelo parece ser útil para interpretar las guerras del agua y el gas. En la fase de conflicto de ambos casos, las distintas representaciones de la democracia fueron el elemento central del discurso. Los sectores movilizadores afirmaban específicamente que se encontraban revisando el sistema político del país. Esto puede interpretarse como un intento específico de cambiar las relaciones de dominación que generaron el conflicto. La guerra del gas, según los sectores movilizadores, demostró la necesidad de una revisión del sistema político. García Linera dice lo siguiente:

Luego de la rebelión de octubre, queda en evidencia que el estado boliviano necesita reorganizarse, ya no siguiendo las normas liberales como el único organizador de la vida política sobre las cuales se ha basado desde su fundación hasta el día de hoy. Si la crisis política en Bolivia ha de superarse, es necesario formar un estado multicultural que incluya a los sectores marginados tradicionalmente – los indígenas – respetando fundamentalmente sus organizaciones comunitarias.¹⁷⁰

Tal como ha destacado el presente estudio, en la guerra del agua, los sectores movilizadores utilizaron el mismo discurso democrático para oponerse a la política de gobierno, invocando una necesidad de ayudar al proceso de toma de decisiones del gobierno.

Dado que el conflicto lleva al cambio social en este modelo, la cuestión ahora es determinar qué cambios tuvieron lugar en las relaciones estructurales de los actores. En el cuarto paso del modelo de Dahrendorf, esto se da bajo las condiciones empíricamente variables del cambio estructural. Dahrendorf admite que estos factores son imprecisos, pero también menciona la intensidad del conflicto y la capacidad de los gobernantes para mantenerse en el poder como posibles variables que determinan el cambio estructural.

¿Cuál fue el cambio estructural que tuvo lugar luego de las guerras? En la conclusión de la guerra del agua, el gobierno cedió a las demandas de la Coordinadora, y Aguas del Tunari abandonó Cochabamba y se rescindió el contrato de concesión. Parecía ser una “victoria”

¹⁷⁰ García Linera, Álvaro. “Democracia liberal vs. Democracia comunitaria.” Red Voltaire.net. <http://www.redvoltaire.net/article2845.html>

contundente de la Coordinadora y sus miembros. El fin de la guerra del gas también estuvo marcado por acciones similares: La cancelación del proyecto de exportación de gas y la renuncia de Sánchez de Lozada. Además, el nuevo presidente Carlos Mesa hizo promesas que calmaron a las masas, entre ellas un referendo vinculante sobre la cuestión del gas, una Asamblea Constituyente, una nueva ley de energía, y que gobernaría sin los partidos políticos. Los sectores movilizados le dieron 90 días para llevar a cabo sus promesas. Nuevamente, los sectores movilizados parecían haber obtenido una victoria sobre el gobierno.

Sin embargo, como refuta el presente estudio, el objeto del conflicto era la democracia. En ambas guerras, las exigencias se cumplían para disipar la situación, pero las estructuras que llevaron al conflicto no cambiaban. Si bien las manifestaciones violentas del conflicto en la guerra del agua y del gas ya habían terminado, el conflicto seguía. El conflicto generado estructuralmente entre los actores con roles de dominación positiva y negativa siempre existirá en una relación de autoridad. Después de tener en cuenta los cambios estructurales que resultaron de las guerras del agua y el gas, parece evidente que el fin de las guerras fue una alteración de la forma del conflicto; no obstante, la fuente estructural del conflicto seguía estando. Según Dahrendorf, el conflicto político es un hecho bajo toda condición concebible. La estructura de autoridad del sistema político en Bolivia seguía en su lugar. Las estructuras como la autoridad tienden a generar conflicto independientemente de los factores históricos. En tanto y en cuanto esa estructura histórica esté en pie, habrá conflicto constante sobre la manera en que se toman las decisiones. Bajo esas condiciones, es posible que las diversas interpretaciones de democracia – cuando se trata del sistema político vigente, o de la estructura superior a la cual se refiere Simmel – sean luego los objetos de dicho conflicto.

Tal como enfatizó la hipótesis, las condiciones variables empíricamente particulares a Bolivia son de gran importancia en las guerras. El debate sobre la pobreza alimenta el conflicto generado estructuralmente; la historia de Bolivia con respecto a los recursos naturales debe ser

tenida en cuenta en estos conflictos notablemente iniciados por los recursos naturales. La democracia surge como el objeto del conflicto como un vínculo entre dichas condiciones históricas y la estructura de sociedad. Dado que la democracia es el sistema político y la manera en que se toman las decisiones relacionadas con los recursos colectivos, se convierte en el objeto del conflicto entre los grupos con roles de dominación positiva y negativa.

Los niveles del conflicto

La presente investigación parece apoyar la hipótesis de que los recursos naturales en cuestión en las guerras del agua y el gas, al igual que otros conflictos latentes, presentaron un tema saliente que sirvió para revelar el conflicto sobre las distintas interpretaciones de democracia. Aún más, el estudio sugiere que los conflictos del caso estudiado pueden ser concebidos como en tres niveles. El primer nivel de conflicto fueron los recursos naturales en cuestión. Por razones de memoria colectiva, los recursos naturales y las políticas económicas relacionadas con ellos fueron un tema importante para muchos bolivianos. Un segundo nivel de conflicto en las guerras fueron los conflictos latentes o “angustias acumuladas” por diversos temas, entre ellos la interferencia de agentes internacionales, la política de erradicación de la coca, y una historia de racismo y marginalización contra la población indígena. Sin embargo, luego de llevar a cabo un análisis histórico de Bolivia y analizar el discurso de los principales actores de las guerras, un tercer nivel de conflicto parece ser generado por las diversas representaciones de lo que es y debe ser la democracia. Esta divergencia se vio alimentada en gran medida por el debate en la sociedad boliviana sobre la pobreza y el legado de las reformas estructurales de los '80 y '90.

Dada la historia de explotación de recursos naturales en el pasado, el agua y el gas eran temas muy delicados. Quizás ningún otro objeto habría desatado conflictos de la magnitud de las guerras del agua y el gas. Si las condiciones políticas estaban dadas para que cualquier cosa desatara el conflicto, ¿por qué no hubo “guerra” en febrero de 2003 cuando se amotinó la

policía? Vista la naturaleza de por sí conflictiva de la política de erradicación de la coca, ¿por qué no hubo una guerra de la coca? Existe un fuerte sentido de memoria colectiva y simbolismo relacionado con los recursos naturales, como también de sensibilidad frente a la interferencia internacional.

El retraso en el clímax de la guerra del gas parecer ser una evidencia de que el gas fue el pretexto para protestar contra la falta de representación de ciertos sectores de la población en la toma de decisiones. El gas y el agua fueron una excusa o una oportunidad dentro de las características históricas particulares de Bolivia. Esto no quiere decir que las guerras fueron intencionales o premeditadas en su totalidad; sino que la importancia del agua y el gas fue producto de la historia y de las estructuras sociales generadoras de conflicto. Estas estructuras sociales en particular generan conflicto más allá de su contexto histórico, pero para entender cómo se han desarrollado estas estructuras a lo largo del tiempo en una unidad en particular hace falta un análisis histórico. Así, los tres niveles en que se divide el conflicto de las guerras del agua y el gas no están claramente definidos, sino que se superponen considerablemente y cada uno es importante a la hora de analizar los casos. La teoría del conflicto social de Dahrendorf es útil para identificar, entre esos tres niveles, cómo las estructuras sociales tienen un papel en la generación de conflicto junto con, pero independientes de, las particularidades históricas.

Si bien el presente estudio ha propuesto que existen tres posibles niveles de conflicto que se manifestaron en ambas guerras, un área de investigación podría llevar a considerar un cuarto nivel de conflicto, aún más profundo que el conflicto por la democracia. Este cuarto nivel podría ser potencialmente el conflicto entre la propiedad pública (colectiva) y la privada (individual). Quizás exista un conflicto fundamental por la propiedad colectiva e individual de los bienes que se haya evidenciado en las guerras del agua y el gas.

El conflicto manifestado en las guerras del agua y el gas está lejos de ser resuelto. Bolivia continuará siendo un caso interesante de observar. Si bien los grupos ideológicos probablemente

continuarán citando al caso boliviano para apoyar su particular visión del mundo, sigue siendo una sociedad compleja y un sistema político que implora un examen más exhaustivo antes de establecer conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA

- AGULLA Juan Carlos. La experiencia sociológica II. Buenos Aires: Estudio Sigma, 1994.
- BANCO MUNDIAL. Bolivia Rural Water and Sanitation Project. Staff Appraisal Report. (15 Dec 1995).
- . Bolivia Public Expenditure Review. (14 Jun 1999).
- CALDERÓN F.; Gamarra, E. Crisis, inflexión y reforma del sistema de partidos en Bolivia. La Paz: UNDP, 2003.
- CALDERÓN F.; Laserna, R. Paradojas de modernidad. Buenos Aires: CLACSO, 1994.
- CHÁVEZ Walter. Bolivia, una revolución social democrática. El Dipló, Le Monde Diplomatique. Ed. Argentina. (Nov 2003), p. 4-6.
- CRESPO, Carlos F. Continuidad y Ruptura: la "Guerra del Agua" y los nuevos movimientos sociales en Bolivia. Observatorio Social de América Latina. CLASCO. No. 8 (Sep 2002).
- . Tesis de doctorado. No publicado.
- "Cronología del conflicto: Bolivia." (2000) Observatorio Social de América Latina. CLACSO. No. 1.
- CROW John A. The Epic of Latin America. 4ª ed. Berkeley: University of California Press, 1992.
- DAHRENDORF Ralf. Toward a Theory of Social Change. The Journal of Conflict Resolution. Vol. 2, no. 2. (Jun 1958): p. 170-183.
- . Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis. The American Journal of Sociology, Vol. 64, no. 2 (Sep 1958): p. 115-127.
- DE LA FUENTE Manuel. Del reino del neoliberalismo a la insurgencia de los indígenas y campesinos: La posibilidad de construir una nueva Bolivia. Observatorio Social de América Latina. CLASCO. No. 8 (Sep 2002).

- , La 'guerra' por el agua en Cochabamba: Crónica de una dolorosa victoria. Documentos de reflexión académica, PROMEC, Facultad de Ciencias Económicas y Sociología. Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. N 15, (Mayo 2000).
- Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial. (2002) Bolivian Water Management: A Tale of Three Cities. Précis. No. 222, primavera. 4 p.
- DOMÍNGO Pilar. Party Politics, Intermediation and Representation. p.141-159. En: Crabtree y Whitehead. Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience. Nueva York: Palgrave, 2001. 240 p.
- DROSDOFF, Daniel. Salto al Vacío: Estabilización y riesgo político en Bolivia. Archivos del Presente. Vol. 3, no. 2, (Abr-Jun 1998): p. 167-183.
- DE FERRANTI David (...) y otros. Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with History? Banco Mundial, 2004.
- GARCÍA A.; García, F.; Quitón, L. La "guerra del agua." Abril de 2000: la crisis de la política en Bolivia. La Paz: PIEB, 2003. 127 p.
- GARCÍA LINERA Álvaro. El ocaso de un ciclo estatal. p. 149-176. En: Democratizaciones plebeyas. La Paz: Muela del Diablo, 2002. 176 p.
- , "Democracia liberal vs. Democracia comunitaria." Red Voltaire.net.
<http://www.redvoltaire.net/article2845.html>
- GARCÍA Álvaro y Gutiérrez, R. El ciclo estatal neoliberal y sus crisis. p. 11-24. En: Democratizaciones plebeyas. La Paz: Muela del Diablo, 2002. 176 p.
- GODOY Ricardo; De Franco, M. High Inflation and Bolivian Agriculture. Journal of Latin American Studies. Vol. 24, no. 3. (Oct 1992): p. 617-637
- Gobierno de Bolivia. Bolivia Poverty Reduction Strategy. (10 mayo 2001).

- GRAY-MOLINA George. Exclusion, Participation and Democratic State-building. p. 63-82. En: Crabtree y Whitehead. *Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience*. Nueva York: Palgrave, 2001. 240 p.
- GREBE LÓPEZ Horst. The Private Sector and Democratization. p. 160-178. En: Crabtree y Whitehead. *Towards Democratic Viability: The Bolivian Experience*. Nueva York: Palgrave, 2001. 240 p.
- GREENLEE David, US Ambassador to Bolivia. Personal Interview. La Paz, Bolivia, 3 March 2004.
- GUTIÉRREZ AGUILAR Raquel. La Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida. A un año de la guerra del agua. p. 193-209. En: *Tiempos de rebelión*. La Paz: Muela del Diablo, 2001. 242 p.
- Instituto Nacional de Estadísticas. Gobierno de Bolivia. <http://www.ine.gov.bo>
- KLEIN Herbert. *A Concise History of Bolivia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- LASERNA Roberto. 2000: conflictos sociales y movimientos políticos en Bolivia. *Anual Social* 2000. Costa Rica, FLACSO.
- . Bolivia: La crisis de octubre y el fracaso del *ch'enko*. Una visión desde la economía política. A publicarse *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*, Vol. 7, Costa Rica, FLACSO. 24 p.
- LEHMAN Kenneth. *Bolivia and the United States: A Limited Partnership*. Athens: University of Georgia Press, 1999.
- MACIAS Iñigo and Mario Matus. ¿Economía de mercado sin mercado?: Gobernabilidad política de las reformas económicas. Bolivia: El desarrollo posible, las instituciones necesarias. Barcelona: Instituto Internacional de Gobernabilidad. (Nov 2003)

- MACIAS Iñigo. "Los avances sociales no reducen la pobreza ni la desigualdad." Bolivia: El desarrollo posible, las instituciones necesarias. Barcelona: Instituto Internacional de Gobernabilidad. (Nov 2003)
- MANN Arthur J.; Pastor Jr., M. Orthodox and Heterodox Stabilization Policies in Bolivia and Peru: 1985-1988. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 31, no. 4, (Invierno, 1989), p. 163-192.
- DEL POZO José. *Historia de América Latina y del Caribe 1825-2001*. Santiago de Chile: LOM, 2002.
- QUISPE HUANCA Felipe. Organización y proyecto político de la rebelión indígena aymara-quechua. Entrevistado por Patricia Costas (...) y otros. *Tiempos de rebelión*. La Paz: Muela del Diablo, 2001. p. 163-189.
- SACHS Jeffrey. The Bolivian Hyperinflation and Stabilization. *The American Economic Review*, Vol. 77, no. 2, Trabajos y procedimientos de la 99a reunión de la Asociación Americana de Economía. (Mayo 1987), p. 279-283.
- Sectores movilizados en Bolivia, fines de septiembre. Anuario 2003. Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), 2003. 1 Cd-rom.
- SIDA. (Swedish International Development Cooperation Agency). *Regional Strategy for South America 2003-2007*. (Mar 2003).
- SIMMEL Georg. *Conflict and the Web of Group-Affiliations*. Trad. Kurt H. Wolff and Reinhard Bendix. Nueva York: The Free Press, 1955. 195 p.
- United Nations Development Program. *Human Development Report 2004*. <http://www.undp.org/>
- United States Library of Congress. *Bolivia Country Study*. <http://countrystudies.us/bolivia/>
- VARGAS H.; Kruse, T. Las victorias de Abril: una historia que aún no concluye. *Observatorio Social de América Latina*. CLACSO. No. 2, (Sep 2000): p. 7-14.

YASHAR Deborah J. Contesting Citizenship: Indigenous Movements and Democracy in Latin America. *Comparative Politics*, Vol. 31, no. 1 (Oct 1998): p. 23-42.